Las características de dicha sociedad, son las siguientes: salvadoreña, de este domicilio, con un capital social de veinte mil colones (¢ 20.000.00), el plazo de la sociedad es por tiempo indefinido; inscrita al N° 25 del Libro 330 de Registro de Sociedades del Registro de Comercio; N.I.T. 0614-220282-002-6.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, diez de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. N° 19726 2-7-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado la señora Ilse Mathies de Carmona, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

La solicitante nació en Santa Ana, departamento del mismo nombre, el día nueve de agosto de mil novecientos cuarenta y uno y es de oficios del hogar, salvadoreña, residente en 10ª Av. Sur N° 29, Santa Ana con Cédula de Identidad Personal N° 1-1-036391 y N.I.T. en trámite.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y nueve.

Dr. Adalberto López Quezada,
Registrador.

3 v. alt. N° 19730 2-7-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado Ketty Anny Alvarenga o Ketty Anny Mathies de Joannes, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

La solicitante nació en Palo de Campana, Santa Ana, departamento del mismo nombre, el día dieciocho de mayo de mil novecientos treinta y nueve, salvadoreña, oficios del hogar, residente en 10ª Avenida Sur N° 29, Santa Ana, departamento del mismo nombre, con Cédula de Identidad Personal N° 2-1-86704 y NIT 0210-260439-001-7.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, veintiocho de septiembre de mil novecientos setenta y siete.

Dr. Adalberto López Quezada,
Registrador.

3 v. alt. N° 19731 2-7-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado Gumerinda Mathies Alvarenga, conocida por Brunilda Mathies Alvarenga, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

La solicitante nació en el cantón Palo de Campana, jurisdicción de Santa Ana, departamento del mismo nombre, el día tres de febrero de mil novecientos treinta y es salvadoreña, de oficios del hogar, residente en 10ª Av. Sur N° 29, de Santa Ana, departamento del mismo nombre; con Cédula de Identidad Personal N° 2-1-009140 y NIT 0210-030230-001-0.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, trece de octubre de mil novecientos setenta y cinco.

Dr. Adalberto López Quezada,
Registrador.

3 v. alt. N° 19732 2-7-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado Eugenio Salvador Torres Tobar, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

El solicitante nació en el cantón Santa Anita, jurisdicción de Mercedes Umaña, departamento de Usulután, el día veinte de noviembre de mil novecientos cincuenta y tres y es salvadoreño, comerciante, residente en Colonia La Rábida, 35ª Calle Oriente y 14ª Avenida Norte N° 1909, de esta ciudad; con Cédula de Identidad Personal N° 1-4-006038 y N.I.T. 1111-201153-001-0.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, diez de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. N° 19771 2-7-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que el señor Julio César González Suvillaga, como Representante Legal de la Sociedad "Inversiones Suma, Sociedad Anónima de Capital Variable", que se abrevia "Inversiones Suma, S.A. de C.V.", salvadoreña, de este domicilio, cuya Escritura Social está inscrita bajo el N° 25 del Libro 330 de Registro de Sociedades del Registro de Comercio, N. I. T. 0614-220282-002-6 y Matrícula Personal de Comerciante Social en trámite, ha presentado solicitud a este Departamento para que se conceda a su representada la Matrícula de Comercio correspondiente y se inscriba a su favor la Empresa Comercial denominada "Inversiones Suma, S. A. de C. V.", que se dedica a la inversión en otras Sociedades, con dirección en Edificio Central N° 217, ciudad, con un activo de doscientos cuarenta mil colones (¢ 240.000.00), y que tiene el establecimiento denominado "Inversiones Suma,

S.A. de C.V.", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19727 2-7-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que Julio Pineda Hernández, mayor de edad, salvadoreño, comerciante, con residencia en 2ª Calle Poniente Nº 1, barrio El Calvario, Apopa, departamento de San Salvador, con Cédula de Identidad Personal Nº 1-9-005788, NIT 0821-271247-001-8 y Matricula Personal de Comerciante Individual en trámite, ha presentado solicitud a este Departamento para que se le conceda la matricula de comercio correspondiente y se inscriba a su favor la empresa de servicios denominada "Transportes San Cristóbal", que se dedica al transporte de pasajeros, con dirección en 2ª Calle Poniente Nº 1, barrio El Calvario, Apopa, departamento de San Salvador, cuyo activo asciende a la suma de treinta mil novecientos cuarenta y seis colones treinta centavos (¢ 30.946.30).

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición, en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, veintiséis de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19765 2-7-XII-83.

El infrascrito Juez,

Al público para los efectos de ley, hace saber: que a este Juzgado se ha presentado el doctor José Mauricio Guerra Guerra, en concepto de apoderado de José Gilberto Argueta, a solicitar a favor de éste título supletorio, de un terreno de naturaleza rústica situado en el lugar "Las Quebradas", jurisdicción de San Simón, distrito de Osicala departamento de Morazán, y no distrito de San Francisco Gotera, como dice la solicitud de la capacidad superficial de cuatro manzanas o sean dos hectáreas ochenta áreas, que tiene los linderos siguientes: al Oriente, con terreno de Herberth Baiza, brotones de pito y cerca de alambre de por medio; al Norte, con Encarnación Márquez y Luis Alonso Araujo, brotones de izote de por medio, carretera que conduce a Delicias de Concepción de por medio al Poniente, con terreno de los señores José Eleuterio Argueta y Encarnación Márquez, quebrada de por medio; y al Sur, con Herberth Baiza y José Eleuterio Argueta, brotones de pito e izote de por medio. Inmueble adquirido por compra que hizo el señor José Eleuterio Argueta, en el mes de enero de mil novecientos setenta y uno.

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco Gotera, a los veinticuatro días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.—**Dr. Juan Ramón Montoya,** Juez 2º de 1ª Instancia. —**Br. Juan Antonio López,** Srio.

3 v. alt. Nº 19766 2-VII-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que María Leonor Portillo viuda de Valencia, salvadoreña, mayor de edad, comerciante, con residencia en Calle Los Abetos, Pasaje 4, Colonia San Francisco, ciudad, con Cédula de Identidad Personal Nº 1-1-27188, NIT 1204-010737-001-0 y Matricula Personal de Comerciante Individual en trámite, ha presentado a este Departamento solicitud para que se le conceda la matricula de comercio correspondiente y se inscriba a su favor la empresa comercial denominada "Almacén Los Angeles", que se dedica a la compra venta de mercaderías en general, con dirección en 7ª Avenida Sur y 4ª Calle Poniente de esta ciudad, cuyo activo asciende a la suma de sesenta y seis mil setecientos cincuenta colones cuarenta y seis centavos (¢ 66.750.46) y que tiene el establecimiento denominado "Almacén Los Angeles", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición, en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, siete de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19760 2-7-XII-83.

El infrascrito Alcalde,

Hace saber: que María Adelina Rivera de Bonilla, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de San Francisco Javier, se ha presentado a esta Alcaldía, solicitando título de propiedad, a su favor, de un terreno rústico, situado en el cantón Los Hornos, de esta jurisdicción, de veintidós hectáreas, catorce áreas setenta y tres centiáreas de capacidad, que linda: Oriente, terrenos de la sociedad Vidaurre Hermanos y Cía., camino de por medio; Norte, terreno de Concepción María Saleh de Ruano; Poniente, terreno de Tránsito Romero viuda de Mejía; y Sur, terreno de Milagro Bonilla de Reyes; lo adquirió por compra que hizo a Salvador Antonio González, mayor de edad, del domicilio de Usulután; no hay poseedores proindivisos y no es predio dominante ni sirviente. No tiene cargas ni derechos reales. Los colindantes son de este domicilio. Lo estima en veinte mil colones.

Alcaldía Municipal: San Francisco Javier, a los veinte días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. — **Romeo Iglesias Claros,** Alcalde Municipal. — **Rosario Mena,** Secretario Municipal, Interina.

3 v. alt. Nº 19759 2-7-XII-83.

José Arturo López Tenorio, Juez de lo Civil de este distrito judicial,

Hace saber: que a este Juzgado se ha presentado el doctor José Mauricio Guerra Guerra, como apoderado de la señora Marta Alicia Melgar, mayor de edad, de oficios domésticos, de este domicilio, manifestando: que su poderdante, es poseedora en forma quieta, pacífica, pública, sin interrupción sin reconocer dominio ajeno ni tener proindivisión con ninguna persona, de un terreno de naturaleza rústica, situado en el cantón El Amate de esta jurisdicción, distrito y departamento de San Miguel, de la capacidad de mil cuatrocientos noventa y siete metros sesenta decímetros cuadrados, que mide y linda: al Oriente, sesenta y dos metros cuarenta centímetros, con Casta Castillo de Vargas, cerco de alambre de la colindante; al Norte, veinticuatro

metros, con Luis Galeas; al Poniente, sesenta y dos metros cuarenta centímetros, calle de por medio con Tránsito Martínez; y al Sur, veinticuatro metros, con Teresa de Jesús Cruz de Ayala, cerco de alambre de la colindante; existe construida una casa techo de lámina, pozo para sacar agua potable y demás servicios. Inmueble que adquirió su cliente, por compra que hizo a Cristina Bolaines, por medio de escritura privada celebrada en el mes de abril de mil novecientos setenta y uno, la que no está inscrita, ni era inscribible, por carecer de antecedente inscrito. Por lo antes expuesto, pide: que previas las formalidades de ley, se le extienda título supletorio a su mandante del inmueble antes descrito.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil: San Miguel, a las diez horas cinco minutos del día dieciséis de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. —**Dr. José Arturo López Tenorio**, Juez de lo Civil. —**Manuel Antonio Gómez Rodríguez**, Srío.

3 v. alt. N° 19767 2-7-XII-83.

José Arturo López Tenorio, Juez de lo Civil del distrito judicial de San Miguel,

Hace saber: que a este Juzgado se ha presentado el doctor José Mauricio Guerra Guerra, mayor de edad, abogado, de este domicilio, en su carácter de apoderado de la señora María Eva Mercado, hoy de Galeas, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio del cantón San Pedro, jurisdicción de Chirilagua, manifestando: que su poderdante es poseedora en forma quieta, pacífica, pública, sin interrupción, sin reconocer dominio ajeno ni tener proindivisión con ninguna persona, de tres terrenos que se describen así: el primero, un terreno de naturaleza rústica, inculto, situado en el cantón San Pedro, jurisdicción de Chirilagua, distrito y departamento de San Miguel, de la capacidad superficial de cuatro manzanas o sean dos hectáreas ochenta áreas, que tiene los linderos siguientes: al Oriente, con terreno de Eduardo Caballero, cerco de alambre propio; al Norte, callejón de por medio, linda con terreno de don Braulio Escobar, cerco de alambre propio; al Poniente, con terreno del señor José Ángel Berrios, cerco de alambre propio; y al Sur, con terreno de los señores Gertrudis Cabrera y Leandro Guevara. El segundo: otro terreno de la misma naturaleza y situación que al anteriormente descrito, de la capacidad superficial de dos manzanas o sea una hectárea cuarenta áreas, que tiene los linderos siguientes: al Oriente, con terreno de Luis Cedillos, cerco de alambre del colindante; al Norte, con terreno de doña Catalina Galeas, cerco de alambre del colindante; al Poniente, con terreno de Julio Bonilla, calle de por medio; y al Sur, con el señor Antolín Pereira, cerco de alambre del colindante. Existe construida una casa, techo de tejas, paredes de adobe, pozo de sacar agua y servicios sanitarios; y el tercero: otro terreno de la misma naturaleza y situación que los dos anteriormente descritos, de la capacidad superficial de una tarea o sean cuatro áreas treinta y siete centiáreas cincuenta decímetros de centiárea, que tiene los linderos siguientes: al Oriente, con terreno de don Antonio Trejo y Heriberto Girón, calle de por medio; al Norte, con terreno de María Tránsito Berrios, ahora de su sucesión, cerco de alambre propio de la colindante; al Poniente, con María Tránsito Berrios, cerco de alambre del colindante; y al Sur, con terreno de la señora Tránsito Pereira, cerco de alambre del colindante. Todos los colindantes viven en el lugar y están valorados estos terrenos y construcción en la cantidad de diez mil colones que los inmuebles descritos los adquirió su cliente por compra que hizo al señor José Aniceto Portillo, en el mes de junio de mil novecientos setenta y uno, por medio de escritura privada, la cual se le extravió a su cliente y que no estaba inscrita ni

era inscribible por carecer de antecedente escrito e inscrito; que el señor José Aniceto Portillo, es mayor de edad, agricultor en pequeño, del domicilio de Chirilagua; que su cliente tiene por sí sola más de diez años de estar en posesión de dichos inmuebles en las condiciones que se expresan; que en tal virtud viene a promover diligencias sumarias a efecto de que se le extienda a su cliente título supletorio de los referidos inmuebles.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado de lo Civil: San Miguel, a las diez horas del día veintiocho de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. —**Dr. José Arturo López Tenorio**, Juez de lo Civil. —**Manuel Antonio Gómez Rodríguez**, Secretario.

3 v. alt. N° 19768 2-7-XII-83.

El infrascrito Alcalde Municipal de esta villa,

Hace saber: que la señora Ana María Lazo, mayor de edad, oficios domésticos, de este domicilio, solicita título de propiedad de un solar y casa de naturaleza urbana, sito en el barrio El Centro de esta villa, distrito de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, el cual es de los linderos siguientes: Oriente, con solar y casa de Blanca Alicia Márquez viuda de Escobar, tapial de adobe de la colindante, y con Rosa María Machuca, con esta cerco de alambre propio; Norte, con solar de José Héctor Napoleón Flores, cercos de alambre del colindante; Poniente, con solar de Gloria Elva Sánchez, calle pavimentada de por medio, y al Sur, con solar y casa de Carlos Enrique Sánchez, cercos de alambre propios; lo hubo por compra a Santiago González Lazo, los colindantes son de este domicilio y lo valúa en la suma de siete mil colones exactos.

Alcaldía Municipal: El Divisadero, a los cinco días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —**Carlos Antonio Cisneros Márquez**, Alcalde Municipal. —**José Gilberto Jiménez Ponce**, Secretario Municipal.

3 v. alt. N° 19762 2-7-XII-83.

El infrascrito Alcalde Municipal de esta Villa,

Hace saber: que Ciro Pérez Salamanca y María Máxima Vásquez de Salamanca, conocida socialmente por Orbelina Vásquez de Salamanca, ambos mayores de edad, de este domicilio, solicitan título de propiedad de un solar y dos casas de naturaleza urbana, sito en el barrio El Calvario de esta Villa, distrito de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, de los linderos siguientes: Oriente, linda con José Manuel Mata, cerco de alambre y piña del colindante; Norte, con Lorenzo Alberto, cercos de piedra medianeros; Poniente, con la sucesión de Francisco Vásquez, representada por Paula Coreas, cercos de piedra propios y al Sur, linda con Ana Paula Solís y Elena Hernández, cercos de piedra propios, calle de por medio; lo hubo por compra que hicimos a Miguel Ángel González Mejía, los colindantes son de este domicilio y lo valuamos en la suma de diez mil colones exactos.

Alcaldía Municipal: Chilanga, a los cinco días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —**José Ildefonso Martínez**, Alcalde Municipal. —**Armido Norberto Padilla**, Secretario Mpal.

3 v. alt. N° 19763 2-7-XII-83.

El infrascrito Alcalde Municipal de esta Villa,

Hace saber: que el señor Carlos Ernesto Vásquez, mayor de edad, empleado, del domicilio de Ayutuxtepeque, solicita título de propiedad de un solar y casa situado en el barrio Santa Lucía de esta Villa, distrito de San Francisco Gotera departamento de Morazán, el cual es de los linderos siguientes: Oriente, linda con solar y casa de Ale-

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria: San Salvador, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19643 3—6—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Wilfredo Antonio Salinas, abogado, de este domicilio, como apoderado de Societe Des Produits Nestlé, S.A., una sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la Confederación Suiza, del domicilio de Vevey, Cantón de Vaud, Suiza, solicitando se registre a favor de su representada la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad suiza,

QUIK

Denominada "QUIK" servirá para amparar: Leche, manteca, mantequillas, cremas, queso y demás productos de la leche; chocolates y demás productos de cacao, no clasificados, café te y yerba mate, achicoria y otras sustancias y productos para infusiones y bebidas calientes; aguas gaseosas, aguas minerales en general, cerveza en jengibre y otras bebidas no clasificadas" artículos comprendidos en las Clases 96, 103, 104, y 107ª, de la Ley del Ramo. La cual podrá ir escrita en letras corrientes, podrá ser impresa grabada, estampada o fotografiada por cualquier método conocido o por conocerse y se usará en cualquier color tamaño y estilo de letra sola o acompañada de dibujos y/o leyendas en los productos que ampara o en los envoltorios, empaques, envases así como en su propaganda. La fábrica se llama Compañía Industrial de Alimentos, S. A., situada en la ciudad de Antigua Guatemala, República de Guatemala, Centro América.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de Ley.

Registro de Comercio, Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria, San Salvador, a los cuatro días, del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19677 3—6—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio.

Hace saber que a este Departamento se ha presentado el doctor Wilfredo Antonio Salinas, mayor de edad, abogado, de este domicilio como apoderado de Maggi, S.A., sociedad organizada y existente de acuerdo con las leyes de la Confederación Suiza del domicilio de Kempittal, Cantón de Zurich, Suiza, solicitando se registre a favor de su representada la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad suiza,

CROSSE & BLACKWELL

Denominada CROSSE & BLACKWELL, dicha marca, podrá ser impresa, grabada, estampada o fotografiada por cualquier método conocido o

por conocerse y se usará sola o acompañada de dibujos y/o leyendas, pudiendo usarse en cualquier color y tamaño, servirá para amparar: Conservas alimenticias, saladas o de otra manera, legumbres y frutas secas o frescas, grasas, mantecas y aceites comestibles, vinagres, sales y condimentos; pastas alimenticias, pan, galletas y pastelería, azúcar, mieles, dulces, jarabes jaleas y confiterías. Clases 94ª, 95ª, 97ª, 98ª, 100ª 101ª y 102ª, de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial y está situada en Staverton, Inglaterra y en Peterhead, Escocia, y dichos artículos son elaborados en la fábrica propiedad de la sociedad y serán distribuidos en El Salvador y en todo Centro América.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio: Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, San Salvador, a los dieciséis días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19678 3—6—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: Que a este Departamento se ha presentado el señor Tomás Ovidio Hernández, conocido por Tomás Ovidio Hernández Fuentes, mayor de edad, Contador, de este domicilio; solicitando se registre a su favor el Nombre Comercial de nacionalidad salvadoreña:

TOTACOS

Consistente en la palabra "TOTACOS", el cual servirá para distinguir: Un establecimiento comercial dedicado al servicio de restaurante, situado en la Setenta y Nueve Avenida Sur, casa número diez, de la Urbanización La Mascota, en esta ciudad de San Salvador, El Salvador. Reservándose el derecho de usar el nombre comercial en cualquier color, forma de letras y acompañado de otras leyendas.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de Ley

Registro de Comercio: Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria, San Salvador, a los ocho días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y tres.

Doctor Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19686 3—6—XII—83.

José Angel Vanegas Guzmán, Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al público.

Hace saber: que se ha presentado la señora Tomasa Majano, mayor de edad, de oficios domésticos de este domicilio solicitando título supletorio de un terreno rústico situado en el cantón La Chorrera jurisdicción y Distrito de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, de la capacidad de catorce hectáreas, que linda: al Oriente, con terreno de la sucesión de Adriana Mejía, representada por Dimas Mejía; al Norte, con María Diaz viuda de Mejía; al Poniente, con

Antonia Mejía; al Sur, con sucesión de Erlinda Mejía. Contiene una casa techo de tejas paredes de adobe.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Santa Rosa de Lima, a las nueve horas del día uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —*Dr. José Angel Vanegas Guzmán*, Juez de Primera Instancia. —*Pedro Cruz*, Secretario.

3 v. alt. N° 19696 3—6—XII—83.

José Angel Vanegas Guzmán, Juez de Primera Instancia de este distrito judicial, al público, Hace saber: que se ha presentado María Mauda Villatoro, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de El Sauce, solicitando título supletorio de tres terrenos rústicos, situados en el cantón San Juan Gualare, jurisdicción de El Sauce, distrito de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, el primero de la capacidad de treinta y cinco áreas, que linda: Oriente, con Horacio Antonio Turcios; Norte y Poniente, con Manuel Antonio Herrera; Sur, con Porfirio Villatoro. El segundo de la capacidad de ciento cuarenta áreas, linda: al Oriente, con María Hortencia Herrera; al Norte, con Victorina Padilla; Poniente, con Horacio Turcios; al Sur, con Margarito Herrera. El tercero de la capacidad de setenta áreas, que linda: al Oriente, con Manuel Antonio Herrera; al Norte, con Victoriana Padilla; al Sur, con Porfirio Villatoro y al Poniente, con Porfirio Villatoro.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Santa Rosa de Lima, a las nueve horas del día uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —*Dr. José Angel Vanegas Guzmán*, Juez de Primera Instancia. —*Pedro Cruz*, Secretario.

3 v. alt. N° 19695 3—6—XII—83.

El infrascrito Juez,

Hace saber: que a este Juzgado se ha presentado el señor Carlos Rodríguez, solicitando Título Supletorio, de un terreno rústico, situado en el cantón Llano de Santiago, jurisdicción de El Divisadero, Distrito de San Francisco, Gotera, departamento de Morazán, de la capacidad de nueve hectáreas diez áreas, a sean trece manzanas, linda: Oriente, con terreno de Florentín Fuentes, y María Ernestina Merlos, con el primero por cerco de alambre del colindante; y con el segundo una faralla de por medio, Norte, con Francisco Martínez, Demetrio Varela, y María Ernestina Merlos, por cerco de alambre de los colindantes; Poniente, con José Antonio Perla y José Arturo Perla, por cerco de alambre medianero; y Sur, con José Arturo Perla y René Espinal, un callejón de por medio, hubo dicho terreno de acuerdo a los Arts. 568 y 587 del Código Civil, y lo valía en doce mil colones.

Juzgado Primero de Primera Instancia; San Francisco Gotera, a las nueve horas del día veintidós de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. —*Dr. Mario Alvarado Belloso*, Juez Primero de Primera Instancia. —*Ismael Quijano*, Srío.

3 v. alt. N° 19697 3—6—XII—83.

El infrascrito Juez,

Hace saber: que ha este Juzgado se ha presentado el señor Demetrio Varela Rodríguez, solicitando Título Supletorio, de un terreno rústico, de cuatro manzanas y media, o sean trescientas quince áreas, situado en el cantón Llano de Santiago, jurisdicción de El Divisadero, Distrito de San Francisco Gotera, departamento de Morazán, linda: Oriente, con Martín Reyes, e Ismael Saravia, por cerco de piedra y alambre medianero; al Norte, con Carlos Luis Escobar; y Julio Hernández, por cerco de alambre del colindante; Poniente, con bienes de Francisco Martínez, y Eladio Reyes, por cerco de alambre del co-

lindante, y Sur, con Carlos Rodríguez, Martín Reyes y Ernestina Merlos, por cerco de alambre medianero. Lo valora en tres mil colones. Hubo el expresado terreno por posesión de acuerdo con los Arts. 568 y 587, del Código Civil.

Juzgado Primero de Primera Instancia; San Francisco Gotera, a las nueve horas del día veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. —*Br. José Oscar Cisneros Ordóñez*, Juez Primero de Primera Instancia Acc. —*Ismael Quijano* Secretario.

3 v. alt. N° 19698 3—6—XII—83.

El infrascrito Alcalde Municipal,

Avisa: que a esta Oficina se ha presentado Irma del Carmen Mendoza, mayor de edad, soltera, de oficios domésticos, de este domicilio, con Cédula N° 7-10-001712, solicitando a su favor título de un solar rústico, situado en los suburbios del barrio La Cruz de esta villa, Oriente; mide 38 metros, con Evangelina Mendoza, Norte; mide 33 metros, con Julio Pérez, Poniente; mide 65 metros, con Basilia Pérez, y Sur; mide 39 metros, con Leovigildo Pérez. Lo estima en siete mil colones.

Alcaldía Municipal: Villa Yucuaiquín, diciembre tres de mil novecientos ochenta y tres. —*Profesora Enriqueta Fuentes de Fuentes*, Alcalde Municipal. —*Rodolfo Benavides Pérez*, Srío.

3 v. alt. N° 19685 3—6—XII—83.

José Angel Vanegas Guzmán, Juez de Primera Instancia de este Distrito Judicial, al Público,

Hace saber: que se han presentado José Santos Zetino, agricultor y Catalina Alvarez, de oficios domésticos, ambos del domicilio de Anamorós, solicitando título supletorio de dos terrenos rústicos situados en el Cantón Tulima jurisdicción de Anamorós, Distrito de Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, el primero de la capacidad de cuatro hectáreas noventa áreas, que linda Norte, con Santos Zetino Herrera; Poniente, con Nicolás Escobar; Sur, con Alfonso Alvarez; Oriente, con Santos Herrera y Alfonso Alvarez; el Segundo de la capacidad de dos hectáreas ochenta áreas, que linda: al Oriente y Sur, con Higinio Zetino; Norte, con Esther Zetino y Máxima Zetino; Poniente, con Cirilo Zetino.

Librado en el Juzgado de Primera Instancia: Santa Rosa de Lima, a las trece horas del día diecinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. —*Dr. José Angel Vanegas Guzmán*, Juez de Primera Instancia. —*Pedro Cruz*, Secretario.

3 v. alt. N° 19699 3—6—XII—83.

El infrascrito Alcalde Municipal,

Hace saber al público para efectos de Ley. Que a esta oficina se ha presentado Ermelina Palacios Oviedo, solicitando Título Municipal de dos solares urbanos situados barrio Santa Lucía de esta población de 168,56 metros cuadrados cada uno. Primero, Oriente, 16 m. 8 cm. con Petrona Andrés y Marina Santamaría. Norte, 10 m. 83 cm. con José Benjamín Melara. Poniente, 16 m. 41 cm. con María Socorro Vega. Sur, 10 m. 45 cm. con Suc. Castro v. de Artiga, Segundo, Oriente, 18 m. 6 cm. con Jesús Angel Melara. Norte, 9 m. 71 cm. con Nicolás de J. Menjívar. Poniente, 15 m. 81 cm. con Nicolás de J. Menjívar. Sur, 10 m. 45 cm. Suc. Castro v. de Artiga. Lo estima en cinco mil colones. No es dominante ni sirviente, lo hubo por compra a Elso Santos Melara, mayor de edad.

Alcaldía Municipal: Rosario de Mora, dos de diciembre mil novecientos ochenta y tres. —*Félix Alonso Artiga*, Alcalde Municipal. —*Rosa Etelvina Pérez*, Secretario.

3 v. alt. N° 19676 3—6—XII—83.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Liceo Centroamericano, S. A., con base en las prescripciones legales vigentes, convoca a Junta General Ordinaria de accionistas para celebrar sesión en el local de la Sección de Varones de Nuevo Liceo Centroamericano, situado en la Octava Avenida Sur número trescientos veintisiete de esta ciudad, de las nueve horas en adelante, el día veinticuatro de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, previa la verificación del quórum y de conformidad a la siguiente agenda:

- 1º Lectura del acta de la sesión anterior.
- 2º a) Memoria de la Junta Directiva.
b) Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
c) Informe del señor Auditor.
- 3º Proyecto de distribución de utilidades, si las hubiere.
- 4º Elección de la Junta Directiva que fungirá en el periodo administrativo 1984/86.
- 5º Nombramiento del auditor y fijar sus honorarios.

La Junta General Ordinaria de Accionistas quedará legalmente constituida con un quórum de la mitad más una de las acciones que integran el capital de la Sociedad, o sea ocho mil doscientas una acciones.

Si dicha Junta no se llevare a cabo por falta de quórum, por este medio se hace Segunda Convocatoria para celebrarse en el mismo local a partir de las nueve horas del día veinticinco de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro y la Junta se celebrará con las acciones que concurren.

San Salvador, dos de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Liceo Centroamericano, S. A.

José Antonio Salvador Campos,
Director Secretario.

3 v. alt. Nº 19644 3-6-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que a este departamento se ha presentado Vilma Sonia Rivera Mendoza, solicitante que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

La solicitante nació en San Salvador, departamento del mismo nombre, el día diecinueve de agosto de mil novecientos cincuenta y dos, y es salvadoreña, Licenciada en Química y Farmacia, residente en 16ª Avenida Norte Nº 1318, colonia Guatemala, de esta ciudad; con Cédula de Identidad Personal Nº 1-1-129454 y N.I.T. 0614-190852-001-4.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, doce de julio de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19689 3-6-XII-83.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de La Colina, Sociedad Anónima de Capital Variable, Convoca a los señores Accionistas a Junta General Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse en las Oficinas de la Sociedad, situadas en la Cuarta Calle Oriente número Siete-Tres de esta ciudad, a las diez horas del día treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, para tratar y resolver sobre los siguientes asuntos:

ASUNTOS DE CARACTER ORDINARIO

- 1—Lectura y discusión del Acta de la Sesión anterior.
- 2—Aplicación de Utilidades de Ejercicios anteriores.

ASUNTOS DE CARACTER EXTRAORDINARIO

- 1—Aumento del Capital Social, suscripción y pago del mismo, Modificación del Contrato Social y designación de Ejecutor Especial.
- Para que haya quórum en la Junta expresada, se requiere:

Para los asuntos de carácter ordinario 251 Acciones y para los de carácter extraordinario 376 acciones presentes y representadas. En caso de no haber quórum se convoca para que la Junta General se instale en el lugar expresado a las diez horas del día primero de enero de mil novecientos ochenta y cuatro y se podrá conocer de los asuntos ordinarios con cualquiera que sea el número de acciones presentes y representadas y de los de carácter extraordinario con 251 acciones presentes o representadas que concurren.

Nueva San Salvador, cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Luis Chita Santamaría,
Presidente.

3 v. alt. Nº 19694 3-6-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria,

Hace saber: que Carlos Alirio Minero Martínez, como representante legal de la sociedad "Gutiérrez, Minero y Rodríguez de Capital Variable", que se abrevia "Gutiérrez, Minero y Rodríguez de C.V.", salvadoreña, de este domicilio, cuya escritura social está inscrita bajo el Nº 28 del Libro 323 de Registro de Sociedades del Registro de Comercio, NIT 0614-151281-001-2 y Matrícula de Comercio correspondiente y se inscriba a su favor la empresa comercial denominada "CODINSA", que se dedica a la compra-venta de mercadería, con dirección en 9ª Calle Oriente, Apartamentos San Francisco Nº 4 ciudad, cuyo activo asciende a la suma de veintiocho mil seiscientos setenta y cuatro colones setenta y siete centavos (¢ 28,774.77) y que tiene el establecimiento denominado "CODINSA", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición, en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, nueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19688 3-6-XII-83.

DIARIO OFICIAL

Director: ALONSO MIRA

TOMO Nº 281 | San Salvador, Viernes 16 de Diciembre de 1983 | NUMERO 234

SUMARIO

PODER CONSTITUYENTE

Decreto Nº 38.—Constitución Política de El Salvador 1

SECCION CARTELES OFICIALES

De 1ª Publicación

Cartel Nº 1301.—Dirección General de la Renta de Aduanas, San Salvador. Aviso de subasta Nº 3, de mercaderías caídas en abandono en la Aduana Aérea de Ilopango el día 13 de Enero de 1984.... 27

SECCION CARTELES PAGADOS

De 1ª Publicación

Carteles Nos. 19871 19880 19882 19878 19881 19883 19909
19926 19873 19915 19919 19921 19876 19913 19914
19918 19872 19877 19875 19927 19916 19879 19917
19799 y 19793.

De 2ª Publicación

Carteles Nos. 19786 19782 19774 19778 19784 19777 19785
19786 19787 19789 19700 19791 19792 19794 19795
19779 19780 19775 y 19798.

De 3ª Publicación

Carteles Nos. 19702 19703 19716 19721 19722 19701 19706
19710 19714 19717 19719 19704 19715 19718 19712
19713 19445 19708 19797 19788 y 19632.

PODER CONSTITUYENTE

DECRETO Nº 38.

NÓ S O T R O S, REPRESENTANTES DEL PUEBLO SALVADOREÑO REUNIDOS EN ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PUESTA NUESTRA CONFIANZA EN DIOS, NUESTRA VOLUNTAD EN LOS ALTOS DESTINOS DE LA PATRIA Y EN EJERCICIO DE LA POTESTAD SOBERANA QUE EL PUEBLO DE EL SALVADOR NOS HA CONFERIDO, ANIMADOS DEL FERVENTE DESEO DE ESTABLECER LOS FUNDAMENTOS DE LA CONVIVENCIA NACIONAL CON BASE EN EL RESPETO A LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA, EN LA CONSTRUCCION DE UNA SOCIEDAD MAS JUSTA, ESENCIA DE LA DEMOCRACIA Y AL ESPIRITU DE LIBERTAD Y JUSTICIA, VALORES DE NUESTRA HERENCIA HUMANISTA,

DECRETAMOS, SANCIONAMOS Y PROCLAMAMOS, la siguiente

C O N S T I T U C I O N

TITULO I

CAPITULO UNICO

LA PERSONA HUMANA Y LOS DEBERES DEL ESTADO

Art. 1.—El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común.

En consecuencia, es obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República, el goce de la libertad, la salud, la cultura, el bienestar económico y la justicia social.

TITULO —

LOS DERECHOS Y GARANTIAS FUNDAMENTALES DE LA PERSONA

CAPITULO I

DERECHOS INDIVIDUALES Y SU REGIMEN DE EXCEPCION

SECCION PRIMERA

DERECHOS INDIVIDUALES

Art. 2.—Toda persona tiene derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad, a la seguridad, al trabajo, a la propiedad y posesión, y a ser protegida en la conservación y defensa de los mismos.

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Se establece la indemnización, conforme a la ley, por daños de carácter moral.

Art. 3.—Todas las personas son iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán establecerse restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión.

No se reconocen empleos ni privilegios hereditarios.

Art. 4.—Toda persona es libre en la República.

No será esclavo el que entre en su territorio ni ciudadano el que trafique con esclavos. Nadie puede ser sometido a servidumbre ni a ninguna otra condición que menoscabe su dignidad.

Art. 5.—Toda persona tiene libertad de entrar, de permanecer en el territorio de la República y salir de éste, salvo las limitaciones que la ley establezca.

Nadie puede ser obligado a cambiar de domicilio o residencia, sino por mandato de autoridad judicial, en los casos especiales y mediante los requisitos que la ley señale.

No se podrá expatriar a ningún salvadoreño, ni prohibírsele la entrada en el territorio de la República, ni negársele pasaporte para su regreso u otros documentos de identificación. Tampoco podrá prohibírsele la salida del territorio sino por resolución o sentencia de autoridad competente dictada con arreglo a las leyes.

Art. 6.—Toda persona puede expresar y difundir libremente sus pensamientos siempre que no subvierta el orden público, ni lesione la moral, el honor, ni la vida privada de los demás. El ejercicio de este derecho no estará sujeto a previo examen, censura ni caución; pero los que haciendo uso de él, infrinjan las leyes, responderán por el delito que cometan.

En ningún caso podrá secuestrarse, como instrumentos de delito, la imprenta, sus accesorios o cualquier otro medio destinado a la difusión del pensamiento.

No podrán ser objeto de estatización o nacionalización, ya sea por expropiación o cualquier otro procedimiento, las empresas que se dediquen a la comunicación escrita, radiada o televisada, y demás empresas de publicaciones. Esta prohibición es aplicable a las acciones o cuotas sociales de sus propietarios.

Las empresas mencionadas no podrán establecer tarifas distintas o hacer cualquier otro tipo de discriminación por el carácter político o religioso de lo que se publique.

Se reconoce el derecho de respuesta como una protección a los derechos y garantías fundamentales de la persona.

Los espectáculos públicos podrán ser sometidos a censura conforme a la ley.

Art. 7.—Los habitantes de El Salvador tienen derecho a asociarse libremente y a reunirse pacíficamente y sin armas para cualquier objeto lícito. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

No podrá limitarse ni impedirse a una persona el ejercicio de cualquier actividad lícita, por el hecho de no pertenecer a una asociación.

Se prohíbe la existencia de grupos armados de carácter político, religioso o gremial.

Art. 8.—Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda ni a privarse de lo que ella no prohíbe.

Art. 9.—Nadie puede ser obligado a realizar trabajos o prestar servicios personales sin justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo en los casos de calamidad pública y en los demás señalados por la ley.

Art. 10.—La ley no puede autorizar ningún acto o contrato que implique la pérdida o el irreparable sacrificio de la libertad o dignidad de la persona. Tampoco puede autorizar convenios en que se pacte proscripción o destierro.

Art. 11.—Ninguna persona puede ser privada del derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y posesión, ni de cualquier otro de sus derechos sin ser previamente oída y vencida en juicio con arreglo a las leyes; ni puede ser enjuiciada dos veces por la misma causa.

Toda persona tiene derecho al habeas corpus cuando cualquier autoridad o individuo restrinja ilegalmente su libertad.

Art. 12.—Toda persona a quien se impute un delito, se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa.

La persona detenida debe ser informada de manera inmediata y comprensible, de sus derechos y de las razones de su detención, no pudiendo ser obligada a declarar. Se garantiza al detenido la asistencia de defensor en las diligencias de los órganos auxiliares de la administración de justicia y en los procesos judiciales, en los términos que la ley establezca.

Las declaraciones que se obtengan sin la voluntad de la persona carecen de valor, quien así las obtuviere y empleare incurrirá en responsabilidad penal.

Art. 13.—Ningún órgano gubernamental, autoridad o funcionario podrá dictar órdenes de detención o de prisión si no es de conformidad con la ley, y estas órdenes deberán ser siempre escritas. Cuando un delincuente sea sorprendido infraganti, puede ser detenido por cualquier persona, para entregarlo inmediatamente a la autoridad competente.

La detención administrativa no excederá de setenta y dos horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubiere practicado.

La detención para inquirir no pasará de setenta y dos horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar al detenido en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención provisional, dentro de dicho término.

Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación, los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa, revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Dichas medidas de seguridad deben estar estrictamente reglamentadas por la ley y sometidas a la competencia del Órgano Judicial.

Art. 14.—Corresponde únicamente al Órgano Judicial la facultad de imponer penas. No obstante, la autoridad administrativa podrá sancionar, mediante resolución o sentencia y previo el juicio correspondiente, las contravenciones a las leyes, reglamentos u ordenanzas, con arresto hasta por quince días o con multa, la cual podrá permutarse por un período igual.

Art. 15.—Nadie puede ser juzgado sino conforme a leyes promulgadas con anterioridad al hecho de que se trate, y por los tribunales que previamente haya establecido la ley.

Art. 16.—Un mismo juez no puede serlo en diversas instancias en una misma causa.

Art. 17.—Ningún órgano gubernamental ni autoridad puede avocarse causas pendientes ni abrir juicios fenecidos.

En caso de revisión en materia penal, el Estado indemnizará, conforme a la ley, a las víctimas de los errores judiciales debidamente comprobados.

Art. 18.—Toda persona tiene derecho a dirigir sus peticiones por escrito, de manera decorosa, a las autoridades legalmente establecidas; a que se le resuelvan, y a que se le haga saber lo resuelto.

Art. 19.—Sólo podrá practicarse el registro o la pesquisa de la persona para prevenir o averiguar delitos o faltas.

Art. 20.—La morada es inviolable y sólo podrá ingresarse a ella por consentimiento de la persona que la habita, por mandato judicial, por flagrante delito o peligro inminente de su perpetración, o por grave riesgo de las personas.

La violación de este derecho dará lugar a reclamar indemnización por los daños y perjuicios ocasionados.

Art. 21.—Las leyes no pueden tener efecto retroactivo, salvo en materias de orden público, y en materia penal cuando la nueva ley sea favorable al delincuente.

La Corte Suprema de Justicia tendrá siempre la facultad para determinar, dentro de su competencia, si una ley es o no de orden público.

Art. 22.—Toda persona tiene derecho a disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. La propiedad es transmisible en la forma en que determinen las leyes. Habrá libre testamento.

Art. 23.—Se garantiza la libertad de contratar conforme a las leyes. Ninguna persona que tenga la libre administración de sus bienes puede ser privada del derecho de terminar sus asuntos civiles o comerciales por transacción o arbitramento. En cuanto a las que no tengan esa libre administración, la ley determinará los casos en que puedan hacerlo y los requisitos exigibles.

Art. 24.—La correspondencia de toda clase es inviolable, interceptada no hará fe ni podrá figurar en ninguna actuación, salvo en los casos de concurso y quiebra. Se prohíbe la interferencia y la intervención de las comunicaciones telefónicas.

Art. 25.—Se garantiza el libre ejercicio de todas las religiones, sin más límite que el trazado por la moral y el orden público. Ningún acto religioso servirá para establecer el estado civil de las personas.

Art. 26.—Se reconoce la personalidad jurídica de la Iglesia Católica. Las demás iglesias podrán obtener, conforme a la ley, el reconocimiento de su personalidad.

Art. 27.—Sólo podrá imponerse la pena de muerte en los casos previstos por las leyes militares durante el estado de guerra internacional.

Se prohíbe la prisión por deudas, las penas perpetuas, las infamantes, las proscriptivas y toda especie de tormento.

El Estado organizará los centros penitenciarios con objeto de corregir a los delincuentes, educarlos y formarles hábitos de trabajo, procurando su readaptación y la prevención de los delitos.

Art. 28.—El Salvador concede asilo al extranjero que quiera residir en su territorio, excepto en los casos previstos por las leyes y el Derecho Internacional. No podrá incluirse en los casos de excepción a quien sea perseguido solamente por razones políticas.

La extradición no podrá estipularse respecto de nacionales en ningún caso, ni respecto de extranjeros por delitos políticos, aunque por consecuencia de éstos, resultaren delitos comunes.

SECCION SEGUNDA

REGIMEN DE EXCEPCION

Art. 29.—En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia u otra calamidad general, o de graves perturbaciones del orden público, podrán suspenderse las garantías establecidas en los artículos 5, 6 inciso primero, 7 inciso primero y 24 de esta Constitución, excepto cuando se trate de reuniones o asociaciones con fines religiosos, culturales, económicos o deportivos. Tal suspensión podrá afectar la totalidad o parte del territorio de la República, y se hará por medio de decreto del Organismo Legislativo o del Organismo Ejecutivo, en su caso.

También podrán suspenderse las garantías contenidas en los Arts. 12 inciso segundo y 13 inciso segundo de esta Constitución, cuando así lo acuerde el Organismo Legislativo, con el voto favorable de las tres cuartas partes de los Diputados electos; no excediendo la detención administrativa de quince días.

El plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá de treinta días. Transcurrido este plazo, podrá prolongarse la suspensión, por igual período y mediante nuevo decreto, si continúan las circunstancias que la motivaron. Si no se emite tal decreto, quedarán restablecidas de pleno derecho las garantías suspendidas.

Art. 30.—Declarada la suspensión de garantías constitucionales, será de la competencia de tribunales militares especiales el conocimiento de los delitos contra la existencia y organización del Estado, contra la personalidad internacional o la personalidad interna del mismo y contra la paz pública, así como de los delitos de trascendencia internacional. En el decreto de suspensión de garantías constitucionales, podrá excluirse del conocimiento de los tribunales militares especiales, alguno o algunos de los delitos antes mencionados en atención a las circunstancias que motivaron la suspensión de dichas garantías.

Los juicios que al tiempo de decretarse la suspensión de garantías estén pendientes ante las autoridades comunes, continuarán bajo el conocimiento de éstas.

Restablecidas las garantías constitucionales, los tribunales militares especiales continuarán conociendo de las causas que se encuentren pendientes ante ellos.

Una ley especial de procedimientos regulará esta materia.

Art. 31.—Cuando desaparezcan las circunstancias que motivaron la suspensión de las garantías constitucionales, la Asamblea Legislativa, o el Consejo de Ministros, según el caso, deberá restablecer tales garantías.

CAPITULO II

DERECHOS SOCIALES

SECCION PRIMERA

FAMILIA

Art. 32.—La familia es la base fundamental de la sociedad y tendrá la protección del Estado, quien dictará la legislación necesaria y creará los organismos y servicios apropiados para su integración, bienestar y desarrollo social, cultural y económico.

El fundamento legal de la familia es el matrimonio y descansa en la igualdad jurídica de los cónyuges.

El Estado fomentará el matrimonio; pero la falta de éste no afectará el goce de los derechos que se establezcan en favor de la familia.

Art. 33.—La ley regulará las relaciones personales y patrimoniales de los cónyuges entre sí y entre ellos y sus hijos, estableciendo los derechos y deberes recíprocos sobre bases equitativas; y creará las instituciones necesarias para garantizar su aplicabilidad. Regulará asimismo las relaciones familiares resultantes de la unión estable de un varón y una mujer.

Art. 34.—Todo menor tiene derecho a vivir en condiciones familiares y ambientales que le permitan su desarrollo integral, para lo cual tendrá la protección del Estado.

La ley determinará los deberes del Estado y creará las instituciones para la protección de la maternidad y de la infancia.

Art. 35.—El estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores, y garantizará el derecho de éstos a la educación y a la asistencia.

La conducta antisocial de los menores que constituya delito o falta estará sujeta a un régimen jurídico especial.

Art. 36.—Los hijos nacidos dentro o fuera de matrimonio y los adoptivos, tienen iguales derechos frente a sus padres. Es obligación de éstos dar a sus hijos protección, asistencia, educación y seguridad.

No se consignará en las actas del Registro Civil ninguna calificación sobre la naturaleza de la filiación, ni se expresará en las partidas de nacimiento el estado civil de los padres.

Toda persona tiene derecho a tener un nombre que la identifique. La ley secundaria regulará esta materia.

La ley determinará asimismo las formas de investigar y establecer la paternidad.

SECCION SEGUNDA

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Art. 37.—El trabajo es una función social, goza de la protección del Estado, y no se considera artículo de comercio.

El Estado empleará todos los recursos que estén a su alcance para proporcionar ocupación al trabajador, manual o intelectual, y para asegurar a él y a su familia las condiciones económicas de una existencia digna. De igual forma promoverá el trabajo y empleo de las personas con limitaciones o incapacidades físicas, mentales o sociales.

Art. 38.—El trabajo estará regulado por un Código que tendrá por objeto principal armonizar las relaciones entre patronos y trabajadores, estableciendo sus derechos y obligaciones. Estará fundamentado en principios generales que tiendan al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores, e incluirá especialmente los derechos siguientes:

1º—En una misma empresa o establecimiento y en idénticas circunstancias, a trabajo igual debe corresponder igual remuneración al trabajador, cualquiera que sea su sexo, raza, credo o nacionalidad;

2º—Todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Para fijar este salario se atenderá sobre todo al costo de la vida, a la índole de la labor, a los diferentes sistemas de re-

muneración, a las distintas zonas de producción y a otros criterios similares. Este salario deberá ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural.

En los trabajos a destajo, por ajuste o precio alzado, es obligatorio asegurar el salario mínimo por jornada de trabajo;

3º—El salario y las prestaciones sociales, en la cuantía que determine la ley, son inembargables y no se pueden compensar ni retener, salvo por obligaciones alimenticias. También pueden retenerse por obligaciones de seguridad social, cuotas sindicales o impuestos. Son inembargables los instrumentos de labor de los trabajadores;

4º—El salario debe pagarse en moneda de curso legal. El salario y las prestaciones sociales constituyen créditos privilegiados en relación con los demás créditos que puedan existir contra el patrono;

5º—Los patronos darán a sus trabajadores una prima por cada año de trabajo. La ley establecerá la forma en que se determinará su cuantía en relación con los salarios;

6º—La jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno no excederá de ocho horas y la semana laboral de cuarenta y cuatro horas. El máximo de horas extraordinarias para cada clase de trabajo será determinado por la ley.

La jornada nocturna y la que se cumpla en tareas peligrosas o insalubres, será inferior a la diurna y estará reglamentada por la ley. La limitación de la jornada no se aplicará en casos de fuerza mayor.

La ley determinará la extensión de las pausas que habrán de interrumpir la jornada cuando, atendiendo a causas biológicas, el ritmo de las tareas así lo exija, y la de aquellas que deberán mediar entre dos jornadas.

Las horas extraordinarias y el trabajo nocturno serán remunerados con recargo;

7º—Todo trabajador tiene derecho a un día de descanso remunerado por cada semana laboral, en la forma que exija la ley.

Los trabajadores que no gocen de descanso en los días indicados anteriormente, tendrán derecho a una remuneración extraordinaria por los servicios que presten en esos días y a un descanso compensatorio;

8º—Los trabajadores tendrán derecho a descanso remunerado en los días de asueto que señala la ley; ésta determinará la clase de labores en que no regirá esta disposición, pero en tales casos, los trabajadores tendrán derecho a remuneración extraordinaria;

9º—Todo trabajador que acredite una prestación mínima de servicios durante un lapso dado, tendrá derecho a vacaciones anuales remuneradas en la forma que determinará la ley. Las vacaciones no podrán compensarse en dinero, y a la obligación del patrono de darlas corresponde la del trabajador de tomarlas;

10º—Los menores de catorce años, y los que habiendo cumplido esa edad sigan sometidos a la enseñanza obligatoria en virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo.

Podrá autorizarse su ocupación cuando se considere indispensable para la subsistencia de los mismos o de su familia, siempre que ello no les impida cumplir con el mínimo de instrucción obligatoria.

La jornada de los menores de dieciséis años no podrá ser mayor de seis horas diarias y de treinta y cuatro semanales, en cualquier clase de trabajo.

Se prohíbe el trabajo a los menores de dieciocho años y a las mujeres en labores insalubres o peligrosas. También se prohíbe el trabajo nocturno a los menores de dieciocho años. La ley determinará las labores peligrosas o insalubres;

11º—El patrono que despida a un trabajador sin causa justificada está obligado a indemnizarlo conforme a la ley;

12º—La ley determinará las condiciones bajo las cuales los patronos estarán obligados a pagar a sus trabajadores permanentes, que renuncien a su trabajo, una prestación económica cuyo monto se fijará en relación con los salarios y el tiempo de servicio.

La renuncia produce sus efectos sin necesidad de aceptación del patrono, pero la negativa de éste a pagar la correspondiente prestación constituye presunción legal de despido injusto.

En caso de incapacidad total y permanente o de muerte del trabajador, éste o sus beneficiarios tendrán derecho a las prestaciones que recibirían en el caso de renuncia voluntaria.

Art. 39.—La ley regulará las condiciones en que se celebrarán los contratos y convenciones colectivos de trabajo. Las estipulaciones que éstos contengan serán aplicables a todos los trabajadores de las empresas que los hubieren suscrito, aunque no pertenezcan al sindicato contratante, y también a los demás trabajadores que ingresen a tales empresas durante la vigencia de dichos contratos o convenciones. La ley establecerá el procedimiento para uniformar las condiciones de trabajo en las diferentes actividades económicas, con base en las disposiciones que contenga la mayoría de los contratos y convenciones colectivos de trabajo vigentes en cada clase de actividad.

Art. 40.—Se establece un sistema de formación profesional para la capacitación y calificación de los recursos humanos.

La ley regulará los alcances, extensión y forma en que el sistema debe ser puesto en vigor.

El contrato de aprendizaje será regulado por la ley, con el objeto de asegurar al aprendiz enseñanza de un oficio, tratamiento digno, retribución equitativa y beneficios de previsión y seguridad social.

Art. 41.—El trabajador a domicilio tiene derecho a un salario mínimo oficialmente señalado, y al pago de una indemnización por el tiempo que pierda con motivo del retardo del patrono en ordenar o recibir el trabajo o por la suspensión arbitraria o injustificada del mismo. Se reconocerá al trabajador a domicilio una situación jurídica análoga a la de los demás trabajadores, tomando en consideración la peculiaridad de su labor.

Art. 42.—La mujer trabajadora tendrá derecho a un descanso remunerado antes y después del parto, y a la conservación del empleo.

Las leyes regularán la obligación de los patronos de instalar y mantener salas cunas y lugares de custodia para los niños de los trabajadores.

Art. 43.—Los patronos están obligados a pagar indemnización, y a prestar servicios médicos, farmacéuticos y demás que establezcan las leyes, al trabajador que sufra accidente de trabajo o cualquier enfermedad profesional.

Art. 44.—La ley reglamentará las condiciones que deban reunir los talleres, fábricas y locales de trabajo.

El Estado mantendrá un servicio de inspección técnica encargado de velar por el fiel cumplimiento de las normas legales de trabajo, asistencia, previsión y seguridad social, a fin de comprobar sus resultados y sugerir las reformas pertinentes.

Art. 45.—Los trabajadores agrícolas y domésticos tienen derecho a protección en materia de salarios, jornada de trabajo, descansos, vacaciones, seguridad social, indemnizaciones por despido y, en general, a las prestaciones sociales. La extensión y naturaleza de los derechos antes mencionados serán determinadas por la ley de acuerdo con las condiciones y peculiaridades del trabajo. Quienes presten servicios de carácter doméstico en empresas industriales, comerciales, entidades sociales y demás equiparables, serán considerados como trabajadores manuales y tendrán los derechos reconocidos a éstos.

Art. 46.—El Estado propiciará la creación de un banco de propiedad de los trabajadores.

Art. 47.—Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas y cualquiera que sea su actividad o la naturaleza del trabajo que realicen, tienen el derecho de asociarse libremente para la defensa de sus respectivos intereses, formando asociaciones profesionales o sindicatos. El mismo derecho tendrán los trabajadores de las instituciones oficiales autónomas.

Dichas organizaciones tienen derecho a personalidad jurídica y a ser debidamente protegidas en el ejercicio de sus funciones. Su disolución o suspensión sólo podrá decretarse en los casos y con las formalidades determinadas por la ley.

Las normas especiales para la constitución y funcionamiento de las organizaciones profesionales y sindicales del campo y de la ciudad, no deben coartar la libertad de asociación. Se prohíbe toda cláusula de exclusión.

Los miembros de las directivas sindicales deberán ser salvadoreños por nacimiento y durante el período de su elección y mandato, y hasta después de transcurrido un año de haber cesado en sus funciones, no podrán ser despedidos, suspendidos disciplinariamente, trasladados o desmejorados en sus condiciones de trabajo, sino por justa causa calificada previamente por la autoridad competente.

Art. 48.—Los trabajadores tienen derecho a la huelga y los patronos al paro. Para el ejercicio de estos derechos no será necesaria la calificación previa, después de haberse procurado la solución del conflicto que los genera median-

te las etapas de solución pacífica establecidas por la ley. Los efectos de la huelga o el paro se retrotraerán al momento en que éstos se inician.

La ley regulará estos derechos en cuanto a sus condiciones y ejercicio.

Art. 49.—Se establece la jurisdicción especial de trabajo. Los procedimientos en materia laboral serán regulados de tal forma que permitan la rápida solución de los conflictos.

El Estado tiene la obligación de promover la conciliación y el arbitraje, de manera que constituyan medios efectivos para la solución pacífica de los conflictos de trabajo. Podrán establecerse juntas administrativas especiales de conciliación y arbitraje, para la solución de conflictos colectivos de carácter económico o de intereses.

Art. 50.—La seguridad social constituye un servicio público de carácter obligatorio. La ley regulará sus alcances, extensión y forma.

Dicho servicio será prestado por una o varias instituciones, las que deberán guardar entre sí la adecuada coordinación para asegurar una buena política de protección social, en forma especializada y con óptima utilización de los recursos.

Al pago de la seguridad social contribuirán los patronos, los trabajadores y el Estado en la forma y cuantía que determine la ley.

El Estado y los patronos quedarán excluidos de las obligaciones que les imponen las leyes en favor de los trabajadores, en la medida en que sean cubiertas por el Seguro Social.

Art. 51.—La ley determinará las empresas y establecimientos que, por sus condiciones especiales, quedan obligados a proporcionar, al trabajador y a su familia, habitaciones adecuadas, escuelas, asistencia médica y demás servicios y atenciones necesarios para su bienestar.

Art. 52.—Los derechos consagrados en favor de los trabajadores son irrenunciables.

La enumeración de los derechos y beneficios a que este capítulo se refiere no excluye otros que se deriven de los principios de justicia social.

SECCION TERCERA

EDUCACION, CIENCIA Y CULTURA

Art. 53.—El derecho a la educación y a la cultura es inherente a la persona humana; en consecuencia, es obligación y finalidad primordial del Estado su conservación, fomento y difusión.

El Estado propiciará la investigación y el quehacer científico.

Art. 54.—El Estado organizará el sistema educativo para lo cual creará las instituciones y servicios que sean necesarios. Se garantiza a las personas naturales y jurídicas la libertad de establecer centros privados de enseñanza.

Art. 55.—La educación tiene los siguientes fines: lograr el desarrollo integral de la personalidad en su dimensión espiritual, moral y social; contribuir a la construcción de una sociedad democrática más próspera, justa y humana; inculcar el respeto a los derechos humanos y la observancia de los correspondientes

deberes; combatir todo espíritu de intolerancia y de odio; conocer la realidad nacional e identificarse con los valores de la nacionalidad salvadoreña; y propiciar la unidad del pueblo centroamericano.

Los padres tendrán derecho preferente a escoger la educación de sus hijos.

Art. 56.—Todos los habitantes de la República tienen el derecho y el deber de recibir educación parvularia y básica que los capacite para desempeñarse como ciudadanos útiles. El Estado promoverá la formación de centros de educación especial.

La educación parvularia, básica y especial será gratuita cuando la imparta el Estado.

Art. 57.—La enseñanza que se imparta en los centros educativos oficiales será esencialmente democrática.

Los centros de enseñanza privados estarán sujetos a reglamentación e inspección del Estado y podrán ser subvencionados cuando no tengan fines de lucro.

El Estado podrá tomar a su cargo, de manera exclusiva, la formación del magisterio.

Art. 58.—Ningún establecimiento de educación podrá negarse a admitir alumnos por motivo de la naturaleza de la unión de sus progenitores o guardadores, ni por diferencias sociales, religiosos, raciales o políticas.

Art. 59.—La alfabetización es de interés social. Contribuirán a ella todos los habitantes del país en la forma que determine la ley.

Art. 60.—Para ejercer la docencia se requiere acreditar capacidad en la forma que la ley disponga.

En todos los centros docentes, públicos o privados, civiles o militares, será obligatoria la enseñanza de la historia nacional, el civismo, la moral, la Constitución de la República, los derechos humanos y la conservación de los recursos naturales.

La historia nacional y la Constitución deberán ser enseñadas por profesores salvadoreños.

Se garantiza la libertad de cátedra.

Art. 61.—La educación superior se regirá por una ley especial. La Universidad de El Salvador y las demás del Estado gozarán de autonomía en los aspectos docente, administrativo y económico. Deberán prestar un servicio social, respetando la libertad de cátedra. Se regirán por estatutos enmarcados dentro de dicha ley, la cual sentará los principios generales para su organización y funcionamiento.

Se consignarán anualmente en el Presupuesto del Estado las partidas destinadas al sostenimiento de las universidades estatales y las necesarias para asegurar y acrecentar su patrimonio. Estas instituciones estarán sujetas, de acuerdo con la ley, a la fiscalización del organismo estatal correspondiente.

La ley especial regulará también la creación y funcionamiento de universidades privadas, respetando la libertad de cátedra. Estas universidades prestarán un servicio social y no perseguirán fines de lucro. La misma ley regulará la creación y el funcionamiento de los institutos tecnológicos oficiales y privados.

El Estado velará por el funcionamiento democrático de las instituciones de educación superior y por su adecuado nivel académico.

Art. 62.—El idioma oficial de El Salvador es el castellano. El gobierno está obligado a velar por su conservación y enseñanza.

Las lenguas autóctonas que se hablan en el territorio nacional forman parte del patrimonio cultural y serán objeto de preservación, difusión y respeto.

Art. 63.—La riqueza artística, histórica y arqueológica del país forma parte del tesoro cultural salvadoreño, el cual queda bajo la salvaguarda del Estado y sujeto a leyes especiales para su conservación.

Art. 64.—Los Símbolos Patrios son: el Pabellón o Bandera Nacional, el Escudo de Armas y el Himno Nacional. Una ley regulará lo concerniente a esta materia.

SECCION CUARTA

SALUD PUBLICA Y ASISTENCIA SOCIAL

Art. 65.—La salud de los habitantes de la República constituye un bien público. El Estado y las personas están obligados a velar por su conservación y restablecimiento.

El Estado determinará la política nacional de salud y controlará y supervisará su aplicación.

Art. 66.—El Estado dará asistencia gratuita a los enfermos que carezcan de recursos, y a los habitantes en general, cuando el tratamiento constituya un medio eficaz para prevenir la diseminación de una enfermedad transmissible. En este caso, toda persona está obligada a someterse a dicho tratamiento.

Art. 67.—Los servicios de salud pública serán esencialmente técnicos. Se establecen las carreras sanitarias, hospitalarias, paramédicas y de administración hospitalaria.

Art. 68.—Un Consejo Superior de Salud Pública velará por la salud del pueblo. Estará formado por igual número de representantes de los gremios médico, odontológico, químico-farmacéutico y médico veterinario; tendrá un Presidente y un Secretario de nombramiento del Organismo Ejecutivo, quienes no pertenecerán a ninguna de dichas profesiones. La ley determinará su organización.

El ejercicio de las profesiones que se relacionan de un modo inmediato con la salud del pueblo, será vigilado por organismos legales formados por académicos pertenecientes a cada profesión. Estos organismos tendrán facultad para suspender en el ejercicio profesional a los miembros del gremio bajo su control, cuando ejerzan su profesión con manifiesta inmoralidad o incapacidad. La suspensión de profesionales podrá resolverse por los organismos competentes con sólo robustez moral de prueba.

El Consejo Superior de Salud Pública conocerá y resolverá de los recursos que se interpongan en contra de las resoluciones pronunciadas por los organismos a que alude el inciso anterior.

Art. 69.—El Estado proveerá los recursos necesarios e indispensables para el control permanente de la calidad de los productos químicos, farmacéuticos y veterinarios, por medio de organismos de vigilancia.

Asimismo el Estado controlará la calidad de los productos alimenticios y las condiciones ambientales que puedan afectar la salud y el bienestar.

Art. 70.—El Estado tomará a su cargo a los indigentes que, por su edad o incapacidad física o mental, sean inhábiles para el trabajo.

CAPITULO III

LOS CIUDADANOS, SUS DERECHOS Y DEBERES POLITICOS Y EL CUERPO ELECTORAL

Art. 71.—Son ciudadanos todos los salvadoreños mayores de dieciocho años.

Art. 72.—Los derechos políticos del ciudadano son:

- 1º—Ejercer el sufragio;
- 2º—Asociarse para constituir partidos políticos de acuerdo con la ley e ingresar a los ya constituidos;
- 3º—Optar a cargos públicos cumpliendo con los requisitos que determinan esta Constitución y las leyes secundarias.

Art. 73.—Los deberes políticos del ciudadano son:

- 1º—Ejercer el sufragio;
- 2º—Cumplir y velar porque se cumpla la Constitución de la República;
- 3º—Servir al Estado de conformidad con la ley.

El ejercicio del sufragio comprende, además, el derecho de votar en la consulta popular directa, contemplada en esta Constitución.

Art. 74.—Los derechos de ciudadanía se suspenden por las causas siguientes:

- 1º—Auto de prisión formal;
- 2º—Enajenación mental;
- 3º—Interdicción judicial;
- 4º—Negarse a desempeñar, sin justa causa, un cargo de elección popular; en este caso, la suspensión durará todo el tiempo que debiera desempeñarse el cargo rehusado.

Art. 75.—Pierden los derechos de ciudadano:

- 1º—Los de conducta notoriamente viciada;
- 2º—Los condenados por delito;
- 3º—Los que compren o vendan votos en las elecciones;
- 4º—Los que suscriban actas, proclamas o adhesiones para promover o apoyar la reelección o la continuación del Presidente de la República, o empleen medios directos encaminados a ese fin;
- 5º—Los funcionarios, las autoridades y los agentes de éstas que coarten la libertad del sufragio.

En estos casos, los derechos de ciudadanía se recuperarán por rehabilitación expresa declarada por autoridad competente.

Art. 76.—El cuerpo electoral está formado por todos los ciudadanos capaces de emitir voto.

Art. 77.—Para el ejercicio del sufragio es condición indispensable estar inscrito en el Registro Electoral, elaborado en forma autónoma por el Consejo Central de Elecciones, y distinto a cualquier otro registro público.

Art. 78.—El voto será libre, directo, igualitario y secreto.

Art. 79.—El territorio de la República se dividirá en circunscripciones electorales que determinará la ley. La base del sistema electoral es la población.

Para elecciones de Diputados se adoptará el sistema de representación proporcional.

La ley determinará la forma, tiempo y demás condiciones para el ejercicio del sufragio.

La fecha de las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República, deberá preceder no menos de dos meses ni más de cuatro a la iniciación del periodo presidencial.

Art. 80.—El Presidente y Vicepresidente de la República, los Diputados a la Asamblea Legislativa y los miembros de los Concejos Municipales, son funcionarios de elección popular.

Cuando en las elecciones de Presidente y Vicepresidente de la República ningún partido político o coalición de partidos políticos participantes, haya obtenido mayoría absoluta de votos de conformidad con el escrutinio practicado, se llevará a cabo una segunda elección entre los dos partidos políticos o coalición de partidos políticos que hayan obtenido mayor número de votos válidos; esta segunda elección deberá celebrarse en un plazo no mayor de treinta días después de haberse declarado firmes los resultados de la primera elección.

Cuando por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asamblea Legislativa, no pudiere efectuarse la segunda elección en el periodo señalado, la elección se verificará dentro de un segundo periodo no mayor de treinta días.

Art. 81.—La propaganda electoral sólo se permitirá, aun sin previa convocatoria, cuatro meses antes de la fecha establecida por la ley para la elección de Presidente y Vicepresidente de la República; dos meses antes, cuando se trate de Diputados, y un mes antes en el caso de los Concejos Municipales.

Art. 82.—Los ministros de cualquier culto religioso y los miembros en servicio activo de la Fuerza Armada no podrán pertenecer a partidos políticos ni obtener cargos de elección popular.

Tampoco podrán realizar propaganda política en ninguna forma.

El ejercicio del voto lo efectuarán los ciudadanos en los lugares que determine la ley respectiva y no podrá efectuarse en los recintos de las instalaciones militares.

TITULO III

EL ESTADO, SU FORMA DE GOBIERNO Y SISTEMA POLITICO

Art. 83.—El Salvador es un Estado soberano. La soberanía reside en el pueblo, que la ejerce en la forma prescrita y dentro de los límites de esta Constitución.

Art. 84.—El territorio de la República sobre el cual El Salvador ejerce jurisdicción y soberanía es irreductible y además de la parte continental, comprende:

El territorio insular integrado por las islas, islotes y cayos que enumera la Sentencia de la Corte de Justicia Centroamericana, pronunciada el 9 de marzo de 1917 y que además le corresponden, conforme a otras fuentes del Derecho Internacional; igualmente otras islas, islotes y cayos que también le corresponden conforme al derecho internacional.

Las aguas territoriales y en comunidad del Golfo de Fonseca, el cual es una bahía histórica con caracteres de mar cerrado, cuyo régimen está determinado por el derecho internacional y por la sentencia mencionada en el inciso anterior.

El espacio aéreo, el subsuelo y la plataforma continental e insular correspondiente; y además, El Salvador ejerce soberanía y jurisdicción sobre el mar, el subsuelo y el lecho marinos hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde la línea de más baja marea, todo de conformidad a las regulaciones del derecho internacional.

Los límites del territorio nacional son los siguientes:

AL PONIENTE, con la República de Guatemala, de conformidad a lo establecido en el Tratado de Límites Territoriales, celebrado en Guatemala, el 9 de abril de 1938.

AL NORTE, y AL ORIENTE, en parte, con la República de Honduras, en las secciones delimitadas por el Tratado General de Paz, suscrito en Lima, Perú, el 30 de octubre de 1980. En cuanto a las secciones pendientes de delimitación los límites serán los que se establezcan de conformidad con el mismo Tratado, o en su caso, conforme a cualquiera de los medios de solución pacífica de las controversias internacionales.

AL ORIENTE, en el resto, con las Repúblicas de Honduras y Nicaragua en las aguas del Golfo de Fonseca.

Y AL SUR, con el Océano Pacífico.

Art. 85.—El Gobierno es republicano, democrático y representativo.

El sistema político es pluralista y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del Gobierno. Las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa.

La existencia de un partido único oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma de gobierno establecidos en esta Constitución.

Art. 86.—El poder público emana del pueblo. Los órganos del Gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establecen esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos del Gobierno son indelegables, pero éstos colaborarán entre sí en el ejercicio de las funciones públicas.

Los órganos fundamentales del Gobierno son el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial.

Los funcionarios del Gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley.

Art. 87.—Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución.

El ejercicio de este derecho no producirá la abrogación ni la reforma de esta Constitución, y se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta Constitución.

Las atribuciones y competencias que corresponden a los órganos fundamentales establecidos por esta Constitución, no podrán ser ejercidos en ningún caso por una misma persona o por una sola institución.

Art. 88.—La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección.

Art. 89.—El Salvador alentará y promoverá la integración humana, económica, social y cultural con las repúblicas americanas y especialmente con las del istmo centroamericano. La integración podrá efectuarse mediante tratados o convenios con las repúblicas interesadas, los cuales podrán contemplar la creación de organismos con funciones supranacionales.

También propiciará la reconstrucción total o parcial de la República de Centro América, en forma unitaria, federal o confederada, con plena garantía de respeto a los principios democráticos y republicanos y de los derechos individuales y sociales de sus habitantes.

El proyecto y bases de la unión se someterán a consulta popular.

TITULO IV

LA NACIONALIDAD

Art. 90.—Son salvadoreños por nacimiento:

- 1º—Los nacidos en el territorio de El Salvador;
- 2º—Los hijos de padre o madre salvadoreños, nacidos en el extranjero;
- 3º—Los originarios de los demás Estados que constituyeron la República Federal de Centro América, que teniendo domicilio en El Salvador, manifiesten ante las autoridades competentes su voluntad de ser salvadoreños, sin que se requiera la renuncia a su nacionalidad de origen.

Art. 91.—Los salvadoreños por nacimiento tienen derecho a gozar de la doble o múltiple nacionalidad.

La calidad de salvadoreño por nacimiento sólo se pierde por renuncia expresa ante autoridad competente y se recupera por solicitud ante la misma.

Art. 92.—Pueden adquirir la calidad de salvadoreños por naturalización:

- 1º—Los españoles e hispanoamericanos de origen que tuvieren un año de residencia en el país;
- 2º—Los extranjeros de cualquier origen que tuvieren cinco años de residencia en el país;
- 3º—Los que por servicios notables prestados a la República obtengan esa calidad del Órgano Legislativo;

4º—El extranjero casado con salvadoreña o la extranjera casada con salvadoreño que acrediten dos años de residencia en el país, anteriores o posteriores a la celebración del matrimonio.

La nacionalidad por naturalización se otorgará por autoridades competentes de conformidad con la ley.

Art. 93.—Los tratados internacionales regularán la forma y condiciones en que los nacionales de países que no formaron parte de la República Federal de Centro América conserven su nacionalidad, no obstante haber adquirido la salvadoreña por naturalización siempre que se respete el principio de reciprocidad.

Art. 94.—La calidad de salvadoreño naturalizado se pierde:

1º—Por residir más de dos años consecutivos en el país de origen o por ausencia del territorio de la República por más de cinco años consecutivos, salvo en caso de permiso otorgado conforme a la ley;

2º—Por sentencia ejecutoriada, en los casos que determine la ley. Quien pierda así la nacionalidad, no podrá recuperarla.

Art. 95.—Son salvadoreñas las personas jurídicas constituidas conforme a las leyes de la República, que tengan domicilio legal en el país.

Las regulaciones que las leyes establezcan en beneficio de los salvadoreños no podrán vulnerarse por medio de personas jurídicas salvadoreñas cuyos socios o capitales sean en su mayoría extranjeros.

Art. 96.—Los extranjeros, desde el instante en que llegaren al territorio de la República, estarán estrictamente obligados a respetar a las autoridades y a obedecer las leyes, y adquirirán derecho a ser protegidos por ellas.

Art. 97.—Las leyes establecerán los casos y la forma en que podrá negarse al extranjero la entrada o la permanencia en el territorio nacional.

Los extranjeros que directa o indirectamente participen en la política interna del país pierden el derecho a residir en él.

Art. 98.—Ni los salvadoreños ni los extranjeros podrán en ningún caso reclamar al gobierno indemnización alguna por daños o perjuicios que a sus personas o a sus bienes causaren las facciones. Sólo podrán hacerlo contra los funcionarios o particulares culpables.

Art. 99.—Los extranjeros no podrán ocurrir a la vía diplomática sino en los casos de denegación de justicia y después de agotados los recursos legales que tengan expedidos.

No se entiende por denegación de justicia el que un fallo ejecutoriado sea desfavorable al reclamante. Los que contravengan esta disposición perderán el derecho de residir en el país.

Art. 100.—Los extranjeros estarán sujetos a una ley especial.

TITULO V

ORDEN ECONOMICO

Art. 101.—El orden económico debe responder esencialmente a principios de justicia social, que tiendan a asegurar a todos los habitantes del país una existencia digna del ser humano.

El Estado promoverá el desarrollo económico y social mediante el incremento de la producción, la productividad y la racional utiliza-

ción de los recursos. Con igual finalidad, fomentará los diversos sectores de la producción y defenderá el interés de los consumidores.

Art. 102.—Se garantiza la libertad económica, en lo que no se oponga al interés social.

El Estado fomentará y protegerá la iniciativa privada dentro de las condiciones necesarias para acrecentar la riqueza nacional y para asegurar los beneficios de ésta al mayor número de habitantes del país.

Art. 103.—Se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada en función social.

Se reconoce asimismo la propiedad intelectual y artística, por el tiempo y en la forma determinados por la ley.

El subsuelo pertenece al Estado el cual podrá otorgar concesiones para su explotación.

Art. 104.—Los bienes inmuebles propiedad del Estado podrán ser transferidos a personas naturales o jurídicas dentro de los límites y en la forma establecida por la ley.

La propiedad estatal rústica con vocación agropecuaria que no sea indispensable para las actividades propias del Estado, deberán ser transferidas mediante el pago correspondiente a los beneficiarios de la Reforma Agraria. Podrá también transferirse a corporaciones de utilidad pública.

Art. 105.—El Estado reconoce, fomenta y garantiza el derecho de propiedad privada sobre la tierra rústica, ya sea individual, cooperativa, comunal o en cualquier otra forma asociativa, y no podrá por ningún concepto reducir la extensión máxima de tierra que como derecho de propiedad establece esta Constitución.

La extensión máxima de tierra rústica perteneciente a una misma persona natural o jurídica no podrá exceder de doscientas cuarenta y cinco hectáreas. Esta limitación no será aplicable a las asociaciones cooperativas o comunales campesinas.

Los propietarios de tierras a que se refiere el inciso segundo de este artículo, podrán transferirla, enajenarla, partirla, dividirla o arrendarla libremente. La tierra propiedad de las asociaciones cooperativas, comunales campesinas y beneficiarios de la Reforma Agraria estará sujeta a un régimen especial.

Los propietarios de tierras rústicas cuya extensión sea mayor de doscientas cuarenta y cinco hectáreas, tendrán derecho a determinar de inmediato la parte de la tierra que deseen conservar, segregándola e inscribiéndola por separado en el correspondiente Registro de la Propiedad Raíz e Hipotecas.

Los inmuebles rústicos que excedan el límite establecido por esta Constitución y se encuentren en proindivisión, podrán ser objeto de partición entre los copropietarios.

Las tierras que excedan la extensión establecida por esta Constitución podrán ser transferidas a cualquier título a campesinos, agricultores en pequeño, sociedades y asociaciones cooperativas y comunales campesinas. La transferencia a que se refiere este inciso, deberá realizarse dentro de un plazo de tres años. Una ley especial determinará el destino de las tierras que no hayan sido transferidas, al finalizar el período anteriormente establecido.

En ningún caso las tierras excedentes a que se refiere el inciso anterior podrán ser transferidas a cualquier título a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

El Estado fomentará el establecimiento, financiación y desarrollo de la agroindustria, en los distintos departamentos de la República, a fin de garantizar el empleo de mano de obra y la transformación de materias primas producidas por el sector agropecuario nacional.

Art. 106.—La expropiación procederá por causa de utilidad pública o de interés social, legalmente comprobados, y previa una justa indemnización.

Cuando la expropiación sea motivada por causas provenientes de guerra, de calamidad pública o cuando tenga por objeto el aprovisionamiento de agua o de energía eléctrica, o la construcción de viviendas o de carreteras, caminos o vías públicas de cualquier clase, la indemnización podrá no ser previa.

Cuando lo justifique el monto de la indemnización que deba reconocerse por los bienes expropiados de conformidad con los incisos anteriores, el pago podrá hacerse a plazos, el cual no exceda en conjunto de quince años, en cuyo caso se pagará a la persona expropiada el interés bancario correspondiente. Dicho pago deberá hacerse preteritivamente en efectivo.

Se podrá expropiar sin indemnización las entidades que hayan sido creadas con fondos públicos.

Se prohíbe la confiscación ya sea como pena o en cualquier otro concepto. Las autoridades que contravengan este precepto responderán en todo tiempo con sus personas y bienes del daño inferido. Los bienes confiscados son imprescriptibles.

Art. 107.—Se prohíbe toda especie de vinculación, excepto:

1º—Los fideicomisos constituidos a favor del Estado, de los municipios, de las entidades públicas, de las instituciones de beneficencia o de cultura, y de los legalmente incapaces;

2º—Los fideicomisos constituidos por un plazo que no exceda del establecido por la ley y cuyo manejo esté a cargo de bancos o instituciones de crédito legalmente autorizados;

3º—El bien de familia.

Art. 108.—Ninguna corporación o fundación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su denominación u objeto, tendrá capacidad legal para conservar en propiedad o administrar bienes raíces, con excepción de los destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución.

Art. 109.—La propiedad de los bienes raíces rústicos no podrá ser adquirida por extranjeros en cuyos países de origen no tengan iguales derechos los salvadoreños, excepto cuando se trate de tierras para establecimientos industriales.

Las sociedades extranjeras y las salvadoreñas a que alude el inciso segundo del Art. 95 de esta Constitución, estarán sujetas a esta regla.

Art. 110.—No podrá autorizarse ningún monopolio sino a favor del Estado o de los Municipios, cuando el interés social lo haga imprescindible. Se podrán establecer estancos a favor del Estado.

A fin de garantizar la libertad empresarial y proteger al consumidor, se prohíben las prácticas monopolísticas.

Se podrá otorgar privilegios por tiempo limitado a los descubridores e inventores y a los perfeccionadores de los procesos productivos.

Corresponde al Estado prestar por sí o por medio de instituciones oficiales autónomas, los

servicios de correos y telecomunicaciones. Podrá tomar a su cargo otros servicios públicos, cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente o por medio de las mencionadas instituciones o de los municipios. También le corresponde regular y vigilar los servicios públicos prestados por empresas privadas y la aprobación de sus tarifas, excepto las que se establezcan de conformidad con tratados o convenios internacionales, las empresas salvadoreñas de servicios públicos tendrán sus centros de trabajo y bases de operaciones en El Salvador.

Art. 111.—El poder de emisión de especies monetarias corresponde exclusivamente al Estado, el cual podrá ejercerlo directamente o por medio de un instituto emisor de carácter público. El régimen monetario, bancario y crediticio será regulado por la ley.

El Estado deberá orientar la política monetaria con el fin de promover y mantener las condiciones más favorables para el desarrollo ordenado de la economía nacional.

Art. 112.—El Estado podrá administrar las empresas que presten servicios esenciales a la comunidad, con el objeto de mantener la continuidad de los servicios, cuando los propietarios o empresarios se resistan a acatar las disposiciones legales sobre organización económica y social.

También podrá intervenir los bienes pertenecientes a nacionales de países con los cuales El Salvador se encuentre en guerra.

Art. 113.—Serán fomentadas y protegidas las asociaciones de tipo económico que tiendan a incrementar la riqueza nacional mediante un mejor aprovechamiento de los recursos naturales y humanos, y a promover una justa distribución de los beneficios provenientes de sus actividades. En esta clase de asociaciones, además de los particulares, podrán participar el Estado, los municipios y las entidades de utilidad pública.

Art. 114.—El Estado protegerá y fomentará las asociaciones cooperativas, facilitando su organización, expansión y financiamiento.

Art. 115.—El comercio, la industria y la prestación de servicios en pequeño son patrimonio de los salvadoreños por nacimiento y de los centroamericanos naturales. Su protección, fomento y desarrollo serán objeto de una ley.

Art. 116.—El Estado fomentará el desarrollo de la pequeña propiedad rural. Facilitará al pequeño productor asistencia técnica, créditos y otros medios necesarios para la adquisición y el mejor aprovechamiento de sus tierras.

Art. 117.—Se declara de interés social la protección, restauración, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales. El Estado creará los incentivos económicos y proporcionará la asistencia técnica necesaria para el desarrollo de programas adecuados.

La protección, conservación y mejoramiento de los recursos naturales y del medio serán objeto de leyes especiales.

Art. 118.—El Estado adoptará políticas de población con el fin de asegurar el mayor bienestar a los habitantes de la República.

Art. 119.—Se declara de interés social la construcción de viviendas. El Estado procurará que el mayor número de familias salvadoreñas lleguen a ser propietarias de su vivienda. Fomentará que todo propietario de fincas rústicas proporcione a los trabajadores residentes habitación higiénica y cómoda, e instalaciones adecuadas a los trabajadores temporales; y al efecto, facilitará al pequeño propietario los medios necesarios.

Art. 120.—En toda concesión que otorgue el Estado para establecimiento de muelles, ferrocarriles, canales u otras obras materiales de servicio público, deberá estipularse, como condición esencial, que después de transcurrido cierto tiempo, no mayor de cincuenta años, tales obras pasarán por ministerio de ley, en perfectas condiciones de servicio, al dominio del Estado, sin indemnización alguna.

Estas concesiones deberán ser sometidas al conocimiento de la Asamblea Legislativa para su aprobación.

TITULO VI

ORGANOS DEL GOBIERNO, ATRIBUCIONES Y COMPETENCIAS

CAPITULO I

ORGANO LEGISLATIVO

SECCION PRIMERA

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Art. 121.—La Asamblea Legislativa es un cuerpo colegiado compuesto por Diputados, elegidos en la forma prescrita por esta Constitución, y a ella compete fundamentalmente la atribución de legislar.

Art. 122.—La Asamblea Legislativa se reunirá en la capital de la República, para iniciar su período y sin necesidad de convocatoria, el día primero de mayo del año de la elección de sus miembros. Podrá trasladarse a otro lugar de la República para celebrar sus sesiones, cuando así lo acordare.

Art. 123.—La mayoría de los miembros de la Asamblea será suficiente para deliberar.

Para tomar resolución se requerirá por lo menos el voto favorable de la mitad más uno de los Diputados electos, salvo los casos en que conforme a esta Constitución se requiere una mayoría distinta.

Art. 124.—Los miembros de la Asamblea se renovarán cada tres años y podrán ser reelegidos. El período de sus funciones comenzará el primero de mayo del año de su elección.

Art. 125.—Los Diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan.

Art. 126.—Para ser elegido Diputado se requiere ser mayor de veinticinco años, salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño, de notoria honradez e instrucción y no haber perdido los derechos de ciudadano en los cinco años anteriores a la elección.

Art. 127.—No podrán ser candidatos a Diputados:

1º—El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los funcionarios de los organismos electorales, los militares de alta, y en general, los funcionarios que ejerzan jurisdicción.

2º—Los que hubiesen administrado o manejado fondos públicos, mientras no obtengan el finiquito de sus cuentas;

3º—Los contratistas de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio, sus caucioneros y los que, de resultas de tales obras o empresas tengan pendientes reclamaciones de interés propio;

- 4º—Los parientes del Presidente de la República dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad;
- 5º—Los deudores de la Hacienda Pública o Municipal que estén en mora;
- 6º—Los que tengan pendientes contratos o concesiones con el Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, así como los que hayan aceptado ser representantes o apoderados administrativos de aquéllos, o de sociedades extranjeras que se hallen en los mismos casos.

Las incompatibilidades a que se refiere el ordinal primero de este artículo afectan a quienes hayan desempeñado los cargos indicados dentro de los tres meses anteriores a la elección.

Art. 128.—Los Diputados no podrán ser contratistas ni caucioneros de obras o empresas públicas que se costeen con fondos del Estado o del Municipio; ni tampoco obtener concesiones del Estado para explotación de riquezas nacionales o de servicios públicos, ni aceptar ser representantes o apoderados administrativos de personas nacionales o extranjeras que tengan esos contratos o concesiones.

Art. 129.—Los Diputados en ejercicio no podrán desempeñar cargos públicos remunerados durante el tiempo para el que han sido elegidos, excepto los de carácter docente o cultural, y los relacionados con los servicios profesionales de asistencia social.

No obstante, podrán desempeñar los cargos de Ministros o Viceministros de Estado, Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas, Jefes de Misión Diplomática, Consular o desempeñar Misiones Diplomáticas Especiales. En estos casos, al cesar en sus funciones se reincorporarán a la Asamblea, si todavía está vigente el período de su elección.

Los suplentes pueden desempeñar empleos o cargos públicos sin que su aceptación y ejercicio produzca la pérdida de la calidad de tales.

Art. 130.—Los Diputados cesarán en su cargo en los casos siguientes:

- 1º—Cuando en sentencia definitiva fueren condenados por delitos graves;
- 2º—Cuando incurrieren en las prohibiciones contenidas en el artículo 128 de esta Constitución
- 3º—Cuando renunciaren sin justa causa calificada como tal por la Asamblea.

En estos casos quedarán inhabilitados para desempeñar cualquier otro cargo público durante el período de su elección.

Art. 131.—Corresponde a la Asamblea Legislativa:

- 1º—Decretar su reglamento interior;
- 2º—Aceptar o desechar las credenciales de sus miembros, recibir a éstos la protesta constitucional, y deducirles responsabilidades en los casos previstos por esta Constitución;
- 3º—Conocer de las renunciaciones que presentaren los Diputados, admitiéndolas cuando se fundaren en causas justas legalmente comprobada;
- 4º—Llamar a los Diputados suplentes en caso de muerte, renuncia, nulidad de elección, permiso temporal o imposibilidad de concurrir de los propietarios;
- 5º—Decretar, interpretar auténticamente, reformar y derogar las leyes secundarias;

6º—Decretar impuestos, tasas y demás contribuciones sobre toda clase de bienes, servicios e ingresos, en relación equitativa; y en caso de invasión, guerra legalmente declarada o calamidad pública, decretar empréstitos forzosos en la misma relación, si no bastaren las rentas públicas ordinarias;

7º—Ratificar los tratados o pactos que celebre el Ejecutivo con otros Estados u organismos internacionales, o denegar su ratificación;

8º—Decretar el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública, así como sus reformas;

9º—Crear y suprimir plazas, y asignar sueldos a los funcionarios y empleados de acuerdo con el régimen de Servicio Civil;

10º—Aprobar su presupuesto y sistema de salarios, así como sus reformas, consultándolos previamente con el Presidente de la República para el solo efecto de garantizar que existan los fondos necesarios para su cumplimiento. Una vez aprobado dicho presupuesto se incorporará al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Administración Pública;

11º—Decretar de una manera general, beneficios e incentivos fiscales o de cualquier naturaleza, para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios;

12º—Decretar leyes sobre el reconocimiento de la deuda pública y crear y asignar los fondos necesarios para su pago;

13º—Establecer y regular el sistema monetario nacional y resolver sobre la admisión y circulación de la moneda extranjera;

14º—Recibir la protesta constitucional y dar posesión de su cargo a los ciudadanos que, conforme a la ley, deban ejercer la Presidencia y Vicepresidencia de la República;

15º—Resolver sobre renunciaciones interpuestas y licencias solicitadas por el Presidente y el Vicepresidente de la República y los Designados, previa ratificación personal ante la misma Asamblea;

16º—Desconocer obligatoriamente al Presidente de la República o al que haga sus veces cuando terminado su período constitucional continúe en el ejercicio del cargo. En tal caso, si no hubiere persona legalmente llamada para el ejercicio de la Presidencia, designará un Presidente Provisional;

17º—Elegir, para todo el período presidencial respectivo, en votación nominal y pública, a dos personas que en carácter de Designados deban ejercer la Presidencia de la República, en los casos y en el orden determinados por esta Constitución;

18º—Recibir el informe de labores que debe rendir el Ejecutivo por medio de sus Ministros, y aprobarlo o desaprobarlo;

19º—Elegir por votación nominal y pública a los siguientes funcionarios: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Presidente y Miembros del Consejo Central de Elecciones, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, Fiscal General de la República y Procurador General de la República;

20º—Declarar, con no menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos, la incapacidad física o mental del Presidente del

Vicepresidente de la República y de los funcionarios electos por la Asamblea, para el ejercicio de sus cargos, previo dictamen unánime de una Comisión de cinco médicos nombrados por la Asamblea;

- 21º—Determinar las atribuciones y competencias de los diferentes funcionarios cuando por esta Constitución no se hubiese hecho;
- 22º—Conceder, a personas o poblaciones, títulos, distinciones honoríficas y gratificaciones compatibles con la forma de gobierno establecida, por servicios relevantes prestados a la Patria.
- No obstante, se prohíbe que tales títulos, distinciones y gratificaciones se concedan, mientras desempeñen sus cargos, a los funcionarios siguientes: Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado, Diputados a la Asamblea Legislativa, y Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia;
- 23º—Conceder permiso a los salvadoreños para que acepten distinciones honoríficas otorgadas por gobiernos extranjeros;
- 24º—Conceder permisos o privilegios temporales por actividades o trabajos culturales o científicos;
- 25º—Declarar la guerra y ratificar la paz, con base en los informes que le proporcione el Organismo Ejecutivo;
- 26º—Conceder amnistía por delitos políticos o comunes conexos con éstos, o por delitos comunes cometidos por un número de personas que no baje de veinte; y conceder indultos, previo informe favorable de la Corte Suprema de Justicia;
- 27º—Suspender y restablecer las garantías constitucionales de acuerdo con el Art. 29 de esta Constitución, en votación nominal y pública, con los dos tercios de votos, por lo menos, de los Diputados electos;
- 28º—Conceder o negar permiso a los salvadoreños para que acepten cargos diplomáticos o consulares que deban ser ejercidos en El Salvador;
- 29º—Permitir o negar el tránsito de tropas extranjeras por el territorio de la República, y el estacionamiento de naves o aeronaves de guerra de otros países, por más tiempo del establecido en los tratados o prácticas internacionales;
- 30º—Aprobar las concesiones a que se refiere el Art. 120 de esta Constitución;
- 31º—Erigir jurisdicciones y establecer cargos, a propuesta de la Corte Suprema de Justicia, para que los funcionarios respectivos conozcan en toda clase de causas criminales, civiles, mercantiles, laborales, contencioso-administrativas, agrarias y otras;
- 32º—Nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de dichas comisiones;
- 33º—Decretar los Símbolos Patrios;
- 34º—Interpelar a los Ministros o Encargados del Despacho y a los Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas;
- 35º—Calificar la fuerza mayor o el caso fortuito a que se refiere el último inciso del artículo 80:

36º—Recibir el informe de labores que debe rendir el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Presidente de la Corte de Cuentas de la República y el Presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador;

37º—Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los Ministros de Estado; o a los organismos correspondientes, la de los funcionarios de Instituciones Oficiales Autónomas cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación, en su caso;

38º—Ejercer las demás atribuciones que le señale esta Constitución.

Art. 132.—Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de Instituciones Oficiales Autónomas y los Miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa; y la comparecencia y declaración de aquellos así como las de cualquier otra persona, requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial.

Las conclusiones de las comisiones especiales de investigación de la Asamblea Legislativa no serán vinculantes para los tribunales, ni afectarán los procedimientos o las resoluciones judiciales, sin perjuicio de que el resultado sea comunicado a la Fiscalía General de la República para el ejercicio de acciones pertinentes.

SECCION SEGUNDA

LA LEY, SU FORMACION, PROMULGACION Y VIGENCIA

Art. 133.—Tienen exclusivamente iniciativa de ley:

- 1º—Los Diputados;
- 2º—El Presidente de la República por medio de sus Ministros;
- 3º—La Corte Suprema de Justicia en materias relativas al Organismo Judicial, al ejercicio del Notariado y de la Abogacía, y a la jurisdicción y competencia de los Tribunales;
- 4º—Los Concejos Municipales en materia de impuestos municipales.

Art. 134.—Todo proyecto de ley que se apruebe deberá estar firmado por la mayoría de los miembros de la Junta Directiva. Se guardará un ejemplar en la Asamblea y se enviarán dos al Ejecutivo.

Art. 135.—Todo proyecto de ley, después de discutido y aprobado, se trasladará a más tardar dentro de diez días al Organismo Ejecutivo, y si éste no tuviere objeciones, le dará su sanción y lo hará publicar como ley.

No será necesaria la sanción del Organismo Ejecutivo en los casos de los ordinarios 1º, 2º, 3º, 4º, 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º, 20º, 32º, 34º, 35º, 36º y 37º del Art. 131 de esta Constitución y en los antejuicios en que conozca la Asamblea.

Art. 136.—Si el Ejecutivo no encontrare objeción al proyecto recibido, firmará los dos ejemplares, devolverá uno a la Asamblea, deará el otro en su archivo, y hará publicar el texto como ley en el órgano oficial correspondiente.

Art. 137.—Cuando el Organismo Ejecutivo vetare un proyecto de ley, lo devolverá a la Asam-

blea dentro de los ocho días siguientes al de su recibo, puntualizando las razones en que funda su veto; si dentro del término expresado no lo devolviese se tendrá por sancionado y lo publicará como ley.

En caso de veto, la Asamblea reconsiderará el proyecto, y si lo ratificare con los dos tercios de votos, por lo menos, de los Diputados electos, lo enviará de nuevo al Ejecutivo, y éste deberá sancionarlo y mandarlo publicar.

Si lo devolviese con observaciones, la Asamblea las considerará y resolverá lo que crea conveniente por la mayoría establecida en el Art. 123, y lo enviará al Ejecutivo, quien deberá sancionarlo y mandarlo publicar.

Art. 138.—Cuando la devolución de un proyecto de ley se deba a que el Organó Ejecutivo lo considera inconstitucional, y el Organó Legislativo lo ratifica en la forma establecida en el artículo que antecede, deberá el Ejecutivo dirigirse a la Corte Suprema de Justicia dentro del tercer día, para que esta, oyendo las razones de ambos Organos, decida si es o no constitucional, a mas tardar dentro de quince días. Si la Corte decidiere que el proyecto es constitucional, el Organó ejecutivo estará en la obligación de sancionarlo y publicarlo como ley.

Art. 139.—El término para la publicación de las leyes será de quince días. Si dentro de ese término el Organó Ejecutivo no las publicare, el Presidente de la Asamblea lo hará en el Diario Oficial o en cualquier otro diario de los de mayor circulación en la República.

Art. 140.—Ninguna ley obliga sino en virtud de su promulgación y publicación. Para que una ley de carácter permanente sea obligatoria deberán transcurrir, por lo menos, ocho días después de su publicación. Este plazo podrá ampliarse, pero no restringirse.

Art. 141.—En caso de evidente error en la impresión del texto de la ley, se volverá a publicar, a más tardar dentro de diez días. Se tendrá la última publicación como su texto auténtico; y de la fecha de la nueva publicación se contará el término para su vigencia.

Art. 142.—Para interpretar, reformar o derogar las leyes se observarán los mismos trámites que para su formación.

Art. 143.—Cuando un proyecto de ley fuere desechado o no fuere ratificado, no podrá ser propuesto dentro de los próximos seis meses.

SECCION TERCERA

TRATADOS

Art. 144.—Los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados o con organismos internacionales, constituyen leyes de la República al entrar en vigencia, conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución.

La ley no podrá modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalecerá el tratado.

Art. 145.—No se podrán ratificar los tratados en que se restrinjan o afecten de alguna manera las disposiciones constitucionales, a menos que la ratificación se haga con las reservas correspondientes. Las disposiciones del tratado sobre las cuales se hagan las reservas no son ley de la República.

Art. 146.—No podrán celebrarse o ratificarse tratados u otorgarse concesiones en que de alguna manera se altere la forma de gobierno o se lesionen o menoscaben la integridad del territorio, la soberanía e independencia de la República o los derechos y garantías fundamentales de la persona humana.

Lo dispuesto en el inciso anterior se aplica a los tratados internacionales o contratos con gobiernos o empresas nacionales o internacionales en los cuales se someta el Estado salvadoreño, a la jurisdicción de un tribunal de un estado extranjero.

Lo anterior no impide que, tanto en los tratados como en los contratos, el Estado salvadoreño en caso de controversia, someta la decisión a un arbitraje o a un tribunal internacionales.

Art. 147.—Para la ratificación de todo tratado o pacto por el cual se someta a arbitraje cualquier cuestión relacionada con los límites de la República, será necesario el voto de las tres cuartas partes, por lo menos, de los Diputados electos.

Cualquier tratado o convención que celebre el Organó Ejecutivo referente al territorio nacional requerirá también el voto de las tres cuartas partes, por lo menos, de los Diputados electos.

Art. 148.—Corresponde a la Asamblea Legislativa facultar al Organó Ejecutivo para que contrate empréstitos voluntarios, dentro o fuera de la República, cuando una grave y urgente necesidad lo demande, y para que garantice obligaciones contraídas por entidades estatales o municipales de interés público.

Los compromisos contraídos de conformidad con esta disposición deberán ser sometidos al conocimiento del Organó Legislativo, el cual no podrá aprobarlos con menos de los dos tercios de votos de los Diputados electos.

El decreto legislativo en que se autorice la emisión o contratación de un empréstito deberá expresar claramente el fin a que se destinarán los fondos de éste y, en general, todas las condiciones esenciales de la operación.

Art. 149.—La facultad de declarar la inaplicabilidad de las disposiciones de cualquier tratado contrarias a los preceptos constitucionales, se ejercerá por los tribunales dentro de la potestad de administrar justicia.

La declaratoria de inconstitucionalidad de un tratado, de un modo general, y obligatorio, se hará en la misma forma prevista por esta Constitución para las leyes, decretos y reglamentos.

CAPITULO II

ORGANO EJECUTIVO

Art. 150.—El Presidente y el Vicepresidente de la República, los Ministros y Viceministros de Estado y sus funcionarios dependientes, integran el Organó Ejecutivo.

Art. 151.—Para ser elegido Presidente de la República se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, hijo de padre o madre salvadoreño; del estado seglar, mayor de treinta años de edad, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano, haberlo estado en los seis años anteriores a la elección y estar afiliado a uno de los partidos políticos reconocidos legalmente.

Art. 152.—No podrán ser candidatos a Presidente de la República:

- 1º—El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial;
- 2º—El cónyuge y los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de las personas que hayan ejercido la Presidencia en los casos del ordinal anterior;
- 3º—El que haya sido Presidente de la Asamblea Legislativa o Presidente de la Corte Suprema de Justicia durante el año anterior al día del inicio del período presidencial;
- 4º—El que haya sido Ministro, Viceministro de Estado o Presidente de alguna Institución Oficial Autónoma, dentro del último año del período presidencial inmediato anterior;
- 5º—Los militares de profesión que estuvieren de alta o que lo hayan estado en los tres años anteriores al día del inicio del período presidencial;
- 6º—El Vicepresidente o Designado que llamado legalmente a ejercer la Presidencia en el período inmediato anterior, se negare a desempeñarla sin justa causa, entendiéndose que ésta existe cuando el Vicepresidente o Designado manifieste su intención de ser candidato a la Presidencia de la República, dentro de los seis meses anteriores al inicio del período presidencial;
- 7º—Las personas comprendidas en los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 127 de esta Constitución.

Art. 153.—Lo dispuesto en los dos artículos anteriores se aplicará al Vicepresidente de la República y a los Designados a la Presidencia.

Art. 154.—El período presidencial será de cinco años y comenzará y terminará el día primero de junio, sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más.

Art. 155.—En defecto del Presidente de la República, por muerte, renuncia, remoción u otra causa, lo sustituirá el Vicepresidente, a falta de éste, uno de los Designados por el orden de su nominación, y si todos éstos faltaren por cualquier causa legal, la Asamblea designará la persona que habrá de sustituirlo.

Si la causa que inhabilite al Presidente para el ejercicio del cargo durare más de seis meses, la persona que lo sustituya conforme al inciso anterior terminará el período presidencial.

Si la inhabilidad del Presidente fuere temporal, el sustituto ejercerá el cargo únicamente mientras dure aquélla.

Art. 156.—Los cargos de Presidente y de Vicepresidente de la República y los de Designados solamente son renunciables por causa grave debidamente comprobada, que calificará la Asamblea.

Art. 157.—El Presidente de la República es el Comandante General de la Fuerza Armada.

Art. 158.—Se prohíbe al Presidente de la República salir del territorio nacional sin licencia de la Asamblea Legislativa.

Art. 159.—Para la gestión de los negocios públicos habrá las Secretarías de Estado que fueren necesarias, entre las cuales se distribuirán los diferentes Ramos de la Administración. Cada Secretaría estará a cargo de un Ministro,

quien actuará con la colaboración de uno o más Viceministros. Los Viceministros sustituirán a los Ministros en los casos determinados por la ley.

Art. 160.—Para ser Ministro o Viceministro de Estado se requiere ser salvadoreño por nacimiento, mayor de veinticinco años de edad, del estado seglar, de moralidad e instrucción notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores a su nombramiento.

Art. 161.—No podrán ser Ministros ni Viceministros de Estado las personas comprendidas en los ordinales 2º, 3º, 4º, 5º y 6º del artículo 127 de esta Constitución.

Art. 162.—Corresponde al Presidente de la República nombrar, remover, aceptar renunciaciones y conceder licencias a los Ministros y Viceministros de Estado.

Art. 163.—Los decretos, acuerdos, órdenes y providencias del Presidente de la República deberán ser autorizados y comunicados por los Ministros en sus respectivos Ramos, o por los Viceministros, en su caso. Sin estos requisitos no tendrán fuerza legal ni deberán ser obedecidos.

Art. 164.—Todos los decretos, acuerdos, órdenes y resoluciones que los funcionarios del Organismo Ejecutivo emitan, excediendo las facultades que esta Constitución establece, serán nulos y no deberán ser obedecidos, aunque se den a reserva de someterlos a la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Art. 165.—Los Ministros o Encargados del Despacho y Presidentes de Instituciones Oficiales Autónomas deberán concurrir a la Asamblea Legislativa para contestar las interpelaciones que se les hicieren.

Los funcionarios llamados a interpelación que sin justa causa se negaren a concurrir, quedarán, por el mismo hecho, depuestos de sus cargos.

Art. 166.—Habrá un Consejo de Ministros integrado por el Presidente y el Vicepresidente de la República y los Ministros de Estado o quienes hagan sus veces.

Art. 167.—Corresponde al Consejo de Ministros:

- 1º—Decretar el Reglamento Interno del Organismo Ejecutivo y su propio Reglamento;
- 2º—Elaborar el plan general del Gobierno;
- 3º—Elaborar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos y presentarlo a la Asamblea Legislativa, por lo menos tres meses antes de que se inicie el nuevo ejercicio fiscal;

También conocerá de las reformas a dicho presupuesto cuando se trate de transferencias entre partidas de distintos Ramos de la Administración Pública;

- 4º—Autorizar la erogación de sumas que no hayan sido incluidas en los presupuestos, a fin de satisfacer necesidades provenientes de guerra, de calamidad pública o de grave perturbación del orden, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida, informando inmediatamente a la Junta Directiva de la misma, de las causas que motivaron tal medida, a efecto de que reunida que fuere ésta, apruebe o no los créditos correspondientes.

- 5º—Proponer a la Asamblea Legislativa la suspensión de garantías constitucionales a que se refiere el Art. 29 de esta Constitución;

- 6º—Suspender y restablecer las garantías constitucionales a que se refiere el Art. 29 de esta Constitución, si la Asamblea Legislativa no estuviere reunida. En el primer caso, dará cuenta inmediatamente a la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, de las causas que motivaron tal medida y de los actos que haya ejecutado en relación con ésta;
- 7º—Convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden;
- 8º—Conocer y decidir sobre todos los asuntos que someta a su consideración el Presidente de la República.

Art. 168.—Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la República:

- 1º—Cumplir y hacer cumplir la Constitución, los tratados, las leyes y demás disposiciones legales;
- 2º—Mantener ileso la soberanía de la República y la integridad del territorio;
- 3º—Procurar la armonía social, y conservar la paz y tranquilidad interiores y la seguridad de la persona humana como miembro de la sociedad;
- 4º—Celebrar tratados y convenciones internacionales, someterlos a la ratificación de la Asamblea Legislativa, y vigilar su cumplimiento;
- 5º—Dirigir las relaciones exteriores;
- 6º—Presentar por conducto de los Ministros, a la Asamblea Legislativa, dentro de los dos meses siguientes a la terminación de cada año, el informe de labores de la Administración Pública en el año transcurrido. El Ministro de Hacienda presentará además, dentro de los tres meses siguientes a la terminación de cada período fiscal, la cuenta general del último presupuesto y el estado demostrativo de la situación del Tesoro Público y del Patrimonio Fiscal.
- Si dentro de esos términos no se cumpliere con estas obligaciones, quedará por el mismo hecho depuesto el Ministro que no lo verifique, lo cual será notificado al Presidente de la República inmediatamente, para que nombre el sustituto. Este presentará dentro de los treinta días siguientes el informe correspondiente. Si aún en este caso no se cumpliere con lo preceptuado, quedará depuesto el nuevo Ministro;
- 7º—Dar a la Asamblea Legislativa los informes que ésta le pida, excepto cuando se trate de planes militares secretos. En cuanto a negociaciones políticas que fuere necesario mantener en reserva, el Presidente de la República deberá advertirlo, para que se conozca de ellas en sesión secreta;
- 8º—Sancionar, promulgar y publicar las leyes y hacerlas ejecutar;
- 9º—Promocionar a los funcionarios del orden judicial, los auxilios que necesiten para hacer efectivas sus providencias;
- 10º—Conmutar penas, previo informe y dictamen favorable de la Corte Suprema de Justicia;
- 11º—Organizar y mantener la Fuerza Armada y conferir los grados militares de conformidad con la ley;
- 12º—Disponer de la Fuerza Armada para el mantenimiento de la soberanía, el orden, la se-

guridad y la tranquilidad de la República, y llamar al servicio la fuerza necesaria, además de la permanente, para cumplir tales fines;

- 13º—Dirigir la guerra y hacer la paz, y someter inmediatamente el tratado que celebre con este último fin a la ratificación de la Asamblea Legislativa;
- 14º—Decretar los reglamentos que fueren necesarios para facilitar y asegurar la aplicación de las leyes cuya ejecución le corresponde;
- 15º—Velar por la eficaz gestión y realización de los negocios públicos;
- 16º—Proponer las ternas de personas de entre las cuales deberá la Asamblea Legislativa elegir a los dos Designados a la Presidencia de la República;
- 17º—Ejercer las demás atribuciones que le confieren las leyes.

Art. 169.—El nombramiento, remoción, aceptación de renuncias y concesión de licencias de los funcionarios y empleados de la Administración Pública y de la Fuerza Armada, se regirán por el Reglamento Interior del Órgano Ejecutivo u otras leyes y reglamentos que fueren aplicables.

Art. 170.—Los representantes diplomáticos y consulares de carrera que acredite la República deberán ser salvadoreños por nacimiento.

Art. 171.—El Presidente de la República, el Vicepresidente de la República, los Ministros y los Viceministros de Estado, son responsables solidariamente por los actos que autoricen. De las resoluciones tomadas en Consejo de Ministros, serán responsables los Ministros presentes o quienes hagan sus veces, aunque hubieren salvado su voto, a menos que interpongan su renuncia inmediatamente después de que se adopte la resolución.

CAPITULO III

ORGANO JUDICIAL

Art. 172.—La Corte Suprema de Justicia, las Cámaras de Segunda Instancia y los demás tribunales que establezcan las leyes secundarias, integran el Órgano Judicial. Corresponde exclusivamente a este Órgano la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado en materias constitucional, civil, penal, mercantil, laboral, agraria y de lo contencioso-administrativo, así como en las otras que determine la ley.

La organización y funcionamiento del Órgano Judicial serán determinados por la ley.

Los Magistrados y Jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y a las leyes.

Art. 173.—La Corte Suprema de Justicia estará compuesta por el número de Magistrados que determine la ley, los que serán elegidos por la Asamblea Legislativa y uno de ellos será el Presidente. Este será el Presidente del Órgano Judicial.

La ley determinará la organización interna de la Corte Suprema de Justicia, de modo que las atribuciones que le corresponden se distribuyan entre diferentes Salas.

Art. 174.—La Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional, a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, los procesos de amparo, el habeas

corpus, las controversias entre el Organó Legislativo y el Organó Ejecutivo a que se refiere el Art. 133 y las causas mencionadas en la atribución 7ª del Art. 182 de esta Constitución.

La Sala de lo Constitucional estará compuesta de cinco Magistrados designados por la Asamblea Legislativa, uno de los cuales será el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, quien también la presidirá.

Art. 175.—Habrán Cámaras de Segunda Instancia compuestas de dos Magistrados cada una, Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz. Su número, jurisdicción, atribuciones y residencia serán determinados por la ley.

Art. 176.—Para ser Magistrado de la Corte Suprema de Justicia se requiere: ser salvadoreño por nacimiento, del estado seglar, mayor de cuarenta años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber desempeñado una Magistratura de Segunda Instancia durante seis años o una judicatura de Primera Instancia durante nueve años, o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos diez años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.

Art. 177.—Para ser Magistrado de las Cámaras de Segunda Instancia se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de treinta y cinco años, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber servido una judicatura de Primera Instancia durante seis años o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos ocho años antes de su elección; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los seis años anteriores al desempeño de su cargo.

Art. 178.—No podrán ser elegidos Magistrados de la Corte Suprema de Justicia ni de una misma Cámara de Segunda Instancia, los cónyuges ni los parientes entre sí, comprendidos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

Art. 179.—Para ser Juez de Primera Instancia se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, abogado de la República, de moralidad y competencia notorias; haber servido una judicatura de paz durante un año o haber obtenido la autorización para ejercer la profesión de abogado dos años antes de su nombramiento; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores al desempeño de su cargo.

Art. 180.—Son requisitos mínimos para ser Juez de Paz: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de veintidós años, de moralidad e instrucción notorias; estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su nombramiento. El período de sus funciones será de dos años.

Art. 181.—La administración de justicia será gratuita.

Art. 182.—Son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia:

- 1ª—Conocer de los procesos de amparo;
- 2ª—Dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales de cualquier fuero y naturaleza;
- 3ª—Conocer de las causas de presas y de aquellas que no estén reservadas a otra autoridad; ordenar el curso de los suplicatorios o comisiones rogatorias que se libren para practicar diligencias fuera del Estado y

mandar a cumplimentar los que procedan de otros países, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados; y conceder la extradición;

- 4ª—Conceder, conforme a la ley y cuando fuere necesario, el permiso para la ejecución de sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros;
- 5ª—Vigilar que se administre pronta y cumplida justicia, para lo cual adoptará las medidas que estime necesarias;
- 6ª—Conocer de la responsabilidad de los funcionarios públicos en los casos señalados por las leyes;
- 7ª—Conocer de las causas de suspensión o pérdida de los derechos de ciudadanía en los casos comprendidos en los ordinales 2º y 4º del artículo 74 y en los ordinales 1º, 3º, 4º y 5º del artículo 75 de esta Constitución, así como de la rehabilitación correspondiente;
- 8ª—Emitir informe y dictamen en las solicitudes de indulto o de conmutación de pena;
- 9ª—Nombrar a los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz; a los médicos forenses y a los empleados de las dependencias de la misma Corte; removerlos, conocer de sus renunciaciones y concederles licencias;
- 10ª—Nombrar conjueces en los casos determinados por la ley;
- 11ª—Recibir, por sí o por medio de los funcionarios que designe, la protesta constitucional a los funcionarios de su nombramiento;
- 12ª—Practicar recibimientos de abogados y autorizarlos para el ejercicio de su profesión; suspenderlos por incumplimiento de sus obligaciones profesionales, por negligencia o ignorancia graves, por mala conducta profesional, o por conducta privada notoriamente inmoral; inhabilitarlos por venalidad, cohecho, fraude, falsedad y otros motivos que establezca la ley y rehabilitarlos por causa legal. En los casos de suspensión e inhabilitación procederá en la forma que la ley establezca, y resolverá con sólo robustez moral de prueba. Las mismas facultades ejercerá respecto de los notarios;
- 13ª—Elaborar el proyecto de presupuesto de los sueldos y gastos de la administración de justicia y remitirlo al Organó Ejecutivo para su inclusión sin modificaciones en el proyecto del Presupuesto General del Estado. Los ajustes presupuestarios que la Asamblea Legislativa considere necesario hacer a dicho proyecto, se harán en consulta con la Corte Suprema de Justicia;
- 14ª—Las demás que determine esta Constitución y la ley.

Art. 183.—La Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala de lo Constitucional será el único tribunal competente para declarar la inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos, en su forma y contenido, de un modo general y obligatorio, y podrá hacerlo a petición de cualquier ciudadano.

Art. 184.—Las Cámaras de Segunda Instancia de la capital, de acuerdo a la materia, conocerán en primera instancia de los juicios contra el Estado; y en segunda instancia conocerá la respectiva Sala de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 185.—Dentro de la potestad de administrar justicia, corresponde a los tribunales, en los casos en que tengan que pronunciar sentencia, declarar la inaplicabilidad de cualquier ley o disposición de los otros Organos, contraria a los preceptos constitucionales.

Art. 186.—Se establece la carrera judicial. Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia serán elegidos por la Asamblea Legislativa para un periodo de cinco años, y por ministerio de ley continuarán por periodos iguales, salvo que al finalizar cada uno de los periodos, la Asamblea Legislativa acordare lo contrario, o fueren destituidos por causas legales.

Los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y los Jueces de Primera Instancia gozarán de estabilidad en sus cargos.

La ley regulará los requisitos y la forma de ingreso a la carrera judicial, las promociones, ascensos, traslados y sanciones disciplinarias a los funcionarios incluidos en ella.

Art. 187.—El Consejo Nacional de la Judicatura es el órgano encargado de proponer candidatos para los cargos de Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y de Jueces de Primera Instancia.

La ley determinará la forma de designación de sus miembros, sus requisitos, la duración de sus funciones y demás materias atinentes al Consejo.

Art. 188.—La calidad de Magistrado o de Juez es incompatible con el ejercicio de la abogacía y con la de funcionario o empleado de los otros Organos del Estado, excepto la de docente y la de diplomático en misión transitoria.

Art. 189.—Se establece el Jurado para el juzgamiento de los delitos comunes que determine la ley.

Art. 190.—Se prohíbe el fuero atractivo.

CAPITULO IV

MINISTERIO PUBLICO

Art. 191.—El Ministerio Público será ejercido por el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República y los demás funcionarios que determine la ley.

Art. 192.—Para ser Fiscal General de la República o Procurador General de la República, se requieren las mismas cualidades que para ser Magistrado de las Cámaras de Segunda Instancia. Ejercerán el cargo por un periodo de tres años y podrán ser reelegidos.

Art. 193.—Corresponde al Fiscal General de la República:

- 1º—Defender los intereses del Estado y de la sociedad;
- 2º—Promover de oficio o a petición de parte la acción de la justicia en defensa de la legalidad y de los derechos humanos tutelados por la ley;
- 3º—Vigilar la investigación del delito e intervenir en la misma desde la etapa policial, y promover la acción penal de oficio o a petición de parte;
- 4º—Denunciar o acusar personalmente ante la Asamblea Legislativa o ante la Corte Suprema de Justicia, a los funcionarios indiciados de infracciones legales cuyo juzgamiento corresponde a esos organismos;
- 5º—Defender los intereses fiscales y representar al Estado en toda clase de juicios y en los contratos sobre adquisición de bienes in-

muebles en general y de los muebles sujetos a licitación, y los demás que determine la ley;

- 6º—Promover el enjuiciamiento y castigo de los indiciados por delitos de atentados contra las autoridades, y de desacato;
- 7º—Nombrar comisiones especiales para el cumplimiento de sus funciones;
- 8º—Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renunciaciones a los Fiscales de la Corte Suprema de Justicia, de las Cámaras de Segunda Instancia, de los Tribunales Militares y de los tribunales que conocen en primera instancia, y a los Fiscales de Hacienda. Iguales atribuciones ejercerá respecto de los demás funcionarios y empleados de su dependencia;
- 9º—Organizar y dirigir los entes especializados en la investigación del delito;
- 10º—Velar porque en las concesiones de cualquier clase otorgadas por el Estado, se cumpla con los requisitos, condiciones y finalidades establecidas en las mismas y ejercer al respecto las acciones correspondientes;
- 11º—Ejercer las demás atribuciones que establezca la ley.

Art. 194.—Corresponde al Procurador General de la República:

- 1º—Velar por la defensa de la familia y de las personas e intereses de los menores y demás incapaces;
- 2º—Dar asistencia legal a las personas de escasos recursos económicos, y representarlas judicialmente en la defensa de su libertad individual y de sus derechos laborales;
- 3º—Nombrar, remover, conceder licencias y aceptar renunciaciones a los Procuradores Auxiliares de todos los Tribunales de la República, a los Procuradores del Trabajo y a los demás funcionarios y empleados de su dependencia;
- 4º—Las demás atribuciones que establezca la ley.

CAPITULO V

CORTE DE CUENTAS DE LA REPUBLICA

Art. 195.—La fiscalización de la Hacienda Pública en general y de la ejecución del Presupuesto en particular, estará a cargo de un organismo independiente del Organismo Ejecutivo, que se denominará Corte de Cuentas de la República, y que tendrá las siguientes atribuciones:

- 1ª—Vigilar la recaudación, la custodia, el compromiso y la erogación de los fondos públicos; así como la liquidación de impuestos, tasas, derechos y demás contribuciones, cuando la ley lo determine;
- 2ª—Autorizar toda salida de fondos del Tesoro Público, de acuerdo con el Presupuesto; intervenir preventivamente en todo acto que de manera directa o indirecta afecte el Tesoro Público o al patrimonio del Estado, y refrendar los actos y contratos relativos a la deuda pública;
- 3ª—Vigilar, inspeccionar y glosar las cuentas de los funcionarios y empleados que administren o manejen bienes públicos, y conocer de los juicios a que den lugar dichas cuentas;

- 4^a—Fiscalizar la gestión económica de las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y de las entidades que se costeen con fondos del Erario o que reciban subvención o subsidio del mismo. Esta fiscalización se hará de manera adecuada a la naturaleza y fines del organismo de que se trate, de acuerdo con lo que al respecto determine la ley;
- 5^a—Examinar la cuenta que sobre la gestión de la Hacienda Pública rinda el Organismo Ejecutivo a la Asamblea, e informar a ésta del resultado de su examen;
- 6^a—Dictar los reglamentos necesarios para el cumplimiento de sus atribuciones;
- 7^a—Informar por escrito al Presidente de la República, a la Asamblea Legislativa y a los respectivos superiores jerárquicos de las irregularidades relevantes comprobadas a cualquier funcionario o empleado público en el manejo de bienes y fondos sujetos a fiscalización;
- 8^a—Velar porque se hagan efectivas las deudas a favor del Estado y Municipios;
- 9^a—Ejercer las demás funciones que las leyes le señalen.

Art. 196.—La Corte de Cuentas de la República, para el cumplimiento de sus funciones jurisdiccionales, se dividirá en una Cámara de Segunda Instancia y en las Cámaras de Primera Instancia que establezca la ley.

La Cámara de Segunda Instancia estará formada por el Presidente de la Corte y dos Magistrados, cuyo número podrá ser aumentado por la ley.

Estos funcionarios serán elegidos para un período de tres años, podrán ser reelegidos, y no podrán ser separados de sus cargos sino por causa justa, mediante resolución de la Asamblea Legislativa. La Cámara de Segunda Instancia nombrará, removerá, concederá licencias y aceptará renunciaciones a los Jueces de las Cámaras de Primera Instancia.

Una ley especial regulará el funcionamiento, jurisdicción, competencia y régimen administrativo de la Corte de Cuentas y Cámaras de la misma.

Art. 197.—Siempre que un acto sometido a conocimiento de la Corte de Cuentas de la República viole a su juicio alguna ley o reglamento en vigor, ha de advertirlo así a los funcionarios que en el ejercicio de sus funciones legales se lo comunicuen, y el acto de que se trate quedará en suspenso.

El Organismo Ejecutivo puede ratificar el acto total o parcialmente, siempre que lo considere legal, por medio de resolución razonada tomada en Consejo de Ministros y comunicada por escrito al Presidente de la Corte. Tal resolución deberá ser publicada en el Diario Oficial.

La ratificación debidamente comunicada, hará cesar la suspensión del acto, siempre que las observaciones de la Corte de Cuentas no consistan en falta o insuficiencia de crédito presupuesto al cual debe aplicarse un gasto, pues, en tal caso, la suspensión debe mantenerse hasta que la deficiencia de crédito haya sido llenada.

Art. 198.—El Presidente y los Magistrados de la Corte de Cuentas deberán ser salvadoreños por nacimiento, mayores de treinta años, de honradez y competencia notorias; estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores a su elección.

Art. 199.—El Presidente de la Corte de Cuentas rendirá anualmente a la Asamblea Legislativa un informe detallado y documentado de las labores de la Corte. Esta obligación deberá cumplirse dentro de los tres meses siguientes a la terminación del año fiscal.

El incumplimiento de esta obligación se considera como causa justa de destitución.

CAPITULO VI

GOBIERNO LOCAL

SECCION PRIMERA

LAS GOBERNACIONES

Art. 200.—Para la administración política se divide el territorio de la República en departamentos cuyo número y límite fijará la ley. En cada uno de ellos habrá un Gobernador propietario y un suplente, nombrados por el Organismo Ejecutivo y cuyas atribuciones determinará la ley.

Art. 201.—Para ser Gobernador se requiere: ser salvadoreño, del estado seglar, mayor de veinticinco años de edad, estar en el ejercicio de los derechos de ciudadano y haberlo estado en los tres años anteriores al nombramiento, de moralidad e instrucción notorias, y ser originario o vecino del respectivo departamento, en este último caso, serán necesarios dos años de residencia inmediata anterior al nombramiento.

SECCION SEGUNDA

LAS MUNICIPALIDADES

Art. 202.—Para el Gobierno Local, los departamentos se dividen en Municipios, que estarán regidos por Concejos formados de un Alcalde, un Síndico y dos o más Regidores cuyo número será proporcional a la población.

Los miembros de los Concejos Municipales deberán ser mayores de veintiún años y originarios o vecinos del municipio; serán elegidos para un período de tres años, podrán ser reelegidos y sus demás requisitos serán determinados por la ley.

Art. 203.—Los Municipios serán autónomos en lo económico, en lo técnico y en lo administrativo, y se regirán por un Código Municipal, que sentará los principios generales para su organización, funcionamiento y ejercicio de sus facultades autónomas.

Los Municipios estarán obligados a colaborar con otras instituciones públicas en los planes de desarrollo nacional o regional.

Art. 204.—La autonomía del Municipio comprende:

1^o—Crear, modificar y suprimir tasas y contribuciones públicas para la realización de obras determinadas dentro de los límites que una ley general establezca.

Aprobadas las tasas o contribuciones por el Concejo Municipal se mandará publicar el acuerdo respectivo en el Diario Oficial, y transcurridos que sean ocho días después de su publicación, será obligatorio su cumplimiento;

2^o—Decretar su Presupuesto de Ingresos y Egresos;

3^o—Gestionar libremente en las materias de su competencia;

4^o—Nombrar y remover a los funcionarios y empleados de sus dependencias;

- 5º—Decretar las ordenanzas y reglamentos locales;
- 6º—Elaborar sus tarifas de impuestos y las reformas a las mismas, para proponerlas como ley a la Asamblea Legislativa.

Art. 205.—Ninguna ley ni autoridad podrá eximir ni dispensar el pago de las tasas y contribuciones municipales.

Art. 206.—Los planes de desarrollo local deberán ser aprobados por el Concejo Municipal respectivo; y las Instituciones del Estado deberán colaborar con la Municipalidad en el desarrollo de los mismos.

Art. 207.—Los fondos municipales no se podrán centralizar en el Fondo General del Estado, ni emplearse sino en servicios y para provecho de los Municipios.

Las Municipalidades podrán asociarse o concertar entre ellas convenios cooperativos a fin de colaborar en la realización de obras o servicios que sean de interés común para dos o más Municipios.

Para garantizar el desarrollo y la autonomía económica de los municipios, se creará un fondo para el desarrollo económico y social de los mismos. Una ley establecerá el monto de ese fondo y los mecanismos para su uso.

Los Concejos Municipales administrarán el patrimonio de sus Municipios y rendirán cuenta circunstanciada y documentada de su administración a la Corte de Cuentas de la República.

La ejecución del Presupuesto será fiscalizada a posteriori por la Corte de Cuentas de la República, de acuerdo a la ley.

CAPITULO VII

CONSEJO CENTRAL DE ELECCIONES

Art. 208.—El Consejo Central de Elecciones estará formado por tres miembros elegidos por la Asamblea Legislativa, de cada una de las ternas propuestas por los tres partidos políticos o coaliciones legales que hayan obtenido mayor número de votos en la última elección presidencial.

Habrán tres miembros suplentes elegidos en la misma forma. El Presidente será el del partido mayoritario. Durarán cinco años en sus funciones.

Si por cualquier circunstancia no se propusiere alguna terna, la Asamblea Legislativa hará la respectiva elección sin ella.

Art. 209.—La ley establecerá los organismos necesarios para la recepción, recuento y fiscalización de votos y demás actividades concernientes al ejercicio del sufragio. El Consejo Central de Elecciones será la autoridad suprema en esta materia, sin perjuicio de los recursos que establezca esta Constitución, por violación de la misma.

Los partidos políticos contendientes tendrán derecho de vigilancia sobre el proceso electoral.

Art. 210.—El Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento

para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia. La ley secundaria regulará lo referente a esta materia.

CAPITULO VIII

FUERZA ARMADA

Art. 211.—La Fuerza Armada está instituida para defender la soberanía del Estado y la integridad de su territorio, mantener la paz, la tranquilidad y seguridad públicas y el cumplimiento de la Constitución y demás leyes vigentes.

Velará especialmente porque se mantenga la forma republicana de Gobierno y el régimen democrático representativo, no se viole la norma de la alternabilidad en la Presidencia de la República; y se garantice la libertad del sufragio y el respeto a los derechos humanos.

Colaborará con las demás dependencias del Organismo Ejecutivo en los programas de desarrollo nacional, especialmente en situaciones de emergencia.

Art. 212.—La Fuerza Armada de El Salvador es una Institución fundamental para la seguridad nacional de carácter permanente, esencialmente apolítica y obediente y no deliberará en asuntos del servicio.

Art. 213.—La organización y el desarrollo de las actividades de la Fuerza Armada estarán sujetos a leyes, reglamentos y disposiciones especiales. Sus efectivos serán fijados anualmente por el Organismo Ejecutivo en el Ramo de Defensa y de Seguridad Pública, de acuerdo a las necesidades del servicio.

Art. 214.—La carrera militar es profesional y en ella sólo se reconocen los grados obtenidos por escala rigurosa y conforme a la ley.

Los militares no podrán ser privados de sus grados, honores y prestaciones, salvo en los casos determinados por la ley.

Art. 215.—El servicio militar es obligatorio para todos los salvadoreños comprendidos entre los dieciocho y los treinta años de edad.

En caso de necesidad serán soldados todos los salvadoreños aptos para actuar en las tareas militares.

Una ley especial regulará esta materia.

Art. 216.—Se establece la jurisdicción militar. Para el juzgamiento de los delitos y faltas puramente militares habrá procedimientos y tribunales especiales.

De las resoluciones de las Cortes Marciales se admitirán recursos en última instancia, ante el Comandante General de la Fuerza Armada, o ante el respectivo Jefe de Operaciones en campaña.

Gozan del fuero militar los miembros de la Fuerza Armada en servicio activo por delitos y faltas puramente militares.

Art. 217.—La fabricación, importación, exportación, comercio, tenencia y portación de armas, municiones, explosivos y artículos similares, sólo podrán efectuarse con la autorización y bajo la fiscalización directa del Organismo Ejecutivo en el Ramo de Defensa y de Seguridad Pública.

Una ley especial regulará esta materia.

TITULO VII

REGIMEN ADMINISTRATIVO

CAPITULO I

SERVICIO CIVIL

Art. 218.—Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. El que lo haga será sancionado de conformidad con la ley.

Art. 219.—Se establece la carrera administrativa.

La ley regulará el servicio civil y en especial las condiciones de ingreso a la administración; las promociones y ascensos con base en mérito y aptitud; los traslados, suspensiones y cesantías; los deberes de los servidores públicos y los recursos contra las resoluciones que los afecten; asimismo garantizará a los empleados públicos a la estabilidad en el cargo.

No estarán comprendidos en la carrera administrativa los funcionarios o empleados que desempeñen cargos políticos o de confianza, y, en particular, los Ministros y Viceministros de Estado, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, los Secretarios de la Presidencia de la República, los Embajadores, los Directores Generales, los Gobernadores Departamentales y los Secretarios Particulares de dichos funcionarios.

Art. 220.—Una ley especial regulará lo pertinente al retiro de los funcionarios y empleados públicos y municipales, la cual fijará los porcentajes de jubilación a que éstos tendrán derecho de acuerdo a los años de prestación de servicio y a los salarios devengados.

El monto de la jubilación que se perciba estará exento de todo impuesto o tasa fiscal y municipal.

La misma ley deberá establecer las demás prestaciones a que tendrán derecho los servidores públicos y municipales.

Art. 221.—Se prohíbe la huelga de los trabajadores públicos y municipales, lo mismo que el abandono colectivo de sus cargos.

La militarización de los servicios públicos civiles procederá únicamente en casos de emergencia nacional.

Art. 222.—Las disposiciones de este Capítulo son extensivas a los funcionarios y empleados municipales.

CAPITULO II

HACIENDA PUBLICA

Art. 223.—Forman la Hacienda Pública:

- 1º—Sus fondos y valores líquidos;
- 2º—Sus créditos activos;
- 3º—Sus bienes muebles y raíces;
- 4º—Los derechos derivados de la aplicación de las leyes relativas a impuestos, tasas y demás contribuciones, así como los que por cualquier otro título le correspondan.

Son obligaciones a cargo de la Hacienda Pública, las deudas reconocidas y las que tengan origen en los gastos públicos debidamente autorizados.

Art. 224.—Todos los ingresos de la Hacienda Pública formarán un solo fondo que estará afecto de manera general a las necesidades y obligaciones del Estado.

La Ley podrá, sin embargo, afectar determinados ingresos al servicio de la deuda pública. Los donativos podrán asimismo ser afectados para los fines que indique el donante.

Art. 225.—Cuando la ley lo autorice, el Estado, para la consecución de sus fines, podrá separar bienes de la masa de la Hacienda Pública o asignar recursos del Fondo General, para la constitución o incremento de patrimonios especiales destinados a instituciones públicas.

Art. 226.—El Organismo Ejecutivo, en el Ramo correspondiente, tendrá la dirección de las finanzas públicas y estará especialmente obligado a conservar el equilibrio del Presupuesto, hasta donde sea compatible con el cumplimiento de los fines del Estado.

Art. 227.—El Presupuesto General del Estado contendrá, para cada ejercicio fiscal, la estimación de todos los ingresos que se espera percibir de conformidad con las leyes vigentes a la fecha en que sea votado, así como la autorización de todas las erogaciones que se juzgue convenientes para realizar los fines del Estado.

El Organismo Legislativo podrá disminuir o rechazar los créditos solicitados; pero nunca aumentarlos.

En el Presupuesto se autorizará la deuda flotante en que el Gobierno podrá incurrir, durante cada año, para remediar deficiencias temporales de ingresos.

Las instituciones y empresas estatales de carácter autónomo y las entidades que se costeen con fondos del Erario o que tengan subvención de éste, excepto las instituciones de crédito, se regirán por presupuestos especiales y sistemas de salarios aprobados por el Organismo Legislativo.

Una ley especial establecerá lo concerniente a la preparación, votación, ejecución y rendición de cuentas de los presupuestos, y regulará el procedimiento que deba seguirse cuando al cierre de un ejercicio fiscal no esté aún en vigor el Presupuesto del nuevo ejercicio.

Art. 228.—Ninguna suma podrá comprometerse o abonarse con cargo a fondos públicos, si no es dentro de las limitaciones de un crédito presupuesto.

Todo compromiso, abono o pago deberá efectuarse según lo disponga la ley.

Sólo podrán comprometerse fondos de ejercicios futuros con autorización legislativa, para obras de interés público o administrativo, o para la consolidación o conversión de la deuda pública. Con tales finalidades podrá votarse un presupuesto extraordinario.

Habrá una ley especial que regulará las subvenciones, pensiones y jubilaciones que afecten los fondos públicos.

Art. 229.—El Organismo Ejecutivo, con las formalidades legales, podrá efectuar transferencias entre partidas de un mismo ramo u organismo administrativo, excepto las que en el Presupuesto se declaren intransferibles.

Igual facultad tendrá el Organó Judicial en lo que respecta a las partidas de su presupuesto, cumpliendo con las mismas formalidades legales.

Art. 230.—Para la percepción, custodia y erogación de los fondos públicos, habrá un Servicio General de Tesorería.

Cuando se disponga de bienes públicos en contravención a las disposiciones legales, será responsable el funcionario que autorice u ordene la operación, y también lo será el ejecutor, si no prueba su inculpabilidad.

Art. 231.—No pueden imponerse contribuciones sino en virtud de una ley y para el servicio público.

Los templos y sus dependencias destinadas inmediata y directamente al servicio religioso, estarán exentos de impuestos sobre inmuebles.

Art. 232.—Ni el Organó Legislativo ni el Ejecutivo podrán dispensar del pago de las cantidades reparadas a los funcionarios y empleados que manejen fondos fiscales o municipales, ni de las deudas a favor del Fisco o de los Municipios.

Art. 233.—Los bienes raíces de la Hacienda Pública y los de uso público sólo podrán donarse o darse en usufructo, comodato o arrendamiento, con autorización del Organó Legislativo, a entidades de utilidad general.

Art. 234.—Cuando el Estado tenga que celebrar contratos para realizar obras o adquirir bienes muebles en que hayan de comprometerse fondos o bienes públicos, deberán someterse dichas obras o suministros a licitación pública, excepto en los casos determinados por la ley.

No se celebrarán contratos en que la decisión, en caso de controversia, corresponda a tribunales de un estado extranjero.

Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplicará a las Municipalidades.

TITULO VIII

RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS

Art. 235.—Todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, atendiéndose a su texto cualesquiera que fueren las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo, además, el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes.

Art. 236.—El Presidente y el Vice-Presidente de la República, los Diputados, los Designados a la Presidencia, los Ministros y Viceministros de Estado, el Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cámaras de Segunda Instancia, el Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el Fiscal General de la República, el Procurador General de la República, el Presidente y Miembros del Consejo Central de Elecciones y los representantes diplomáticos, responderán ante la Asamblea Legislativa por los delitos oficiales y comunes que cometan

La Asamblea, oyendo a un fiscal de su seno y al indiciado, o a un defensor especial, en su caso, declarará si hay o no hay lugar a formación de causa. En el primer caso, se pasarán

las diligencias a la Cámara de Segunda Instancia que determine la ley, para que conozca en primera instancia, y, en el segundo caso, se archivarán.

De las resoluciones que pronuncie la Cámara mencionada conocerá en segunda instancia una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia, y del recurso que dichas resoluciones admitan, la Corte en pleno.

Cualquier persona tiene derecho de denunciar los delitos de que trata este artículo, y de mostrarse parte, si para ello tuviere las cualidades requeridas por la ley.

Art. 237.—Desde que se declare por la Asamblea Legislativa o por la Corte Suprema de Justicia, que hay lugar a formación de causa, el indiciado quedará suspendido en el ejercicio de sus funciones y por ningún motivo podrá continuar en su cargo. En caso contrario se hará culpable del delito de prolongación de funciones. Si la sentencia fuere condenatoria, por el mismo hecho quedará depuesto del cargo. Si fuere absolutoria, volverá al ejercicio de sus funciones, si el cargo fuere de aquellos que se confieren por tiempo determinado y no hubiere expirado el periodo de la elección o del nombramiento.

Art. 238.—Los Diputados no podrán ser juzgados por delitos graves que cometan desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, sin que la Asamblea Legislativa declare previamente que hay lugar a formación de causa, conforme al procedimiento establecido en el artículo anterior.

Por los delitos menos graves y faltas que cometan durante el mismo periodo no podrán ser detenidos o presos, ni llamados a declarar sino después de concluido el periodo de su elección.

Si el Presidente, Vicepresidente de la República o un Diputado fuere sorprendido en flagrante delito, desde el día de su elección hasta el fin del periodo para el que fueron elegidos, podrán ser detenidos por cualquier persona o autoridad, quien estará obligado a ponerlo inmediatamente a disposición de la Asamblea.

Art. 239.—Los Jueces de Primera Instancia, los Gobernadores Departamentales, los Jueces de Paz y los demás funcionarios que determine la ley, serán juzgados por los delitos oficiales que cometan, por los tribunales comunes, previa declaratoria de que hay lugar a formación de causa, hecha por la Corte Suprema de Justicia. Los antedichos funcionarios estarán sujetos a los procedimientos ordinarios por los delitos y faltas comunes que cometan.

Por los delitos oficiales o comunes que cometan los miembros de los Concejos Municipales, responderán ante los Jueces de Primera Instancia correspondientes.

Art. 240.—Los funcionarios y empleados públicos que se enriquecieron sin justa causa a costa de la Hacienda Pública o Municipal, estarán obligados a restituir al Estado o al Municipio lo que hubieren adquirido ilegítimamente, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieren incurrido conforme a las leyes.

Se presume enriquecimiento ilícito cuando el aumento del capital del funcionario o empleado, desde la fecha en que haya tomado posesión de su cargo hasta aquella en que haya cesado en sus funciones, fuere notablemente superior al que normalmente hubiere podido

tener, en virtud de los sueldos y emolumentos que haya percibido legalmente, y de los incrementos de su capital o de sus ingresos por cualquier otra causa justa. Para determinar dicho aumento, el capital y los ingresos del funcionario o empleado, de su cónyuge y de sus hijos, se considerarán en conjunto.

Los funcionarios y empleados que la ley determine están obligados a declarar el estado de su patrimonio ante la Corte Suprema de Justicia, de acuerdo con los incisos anteriores, dentro de los sesenta días siguientes a aquél en que tomen posesión de sus cargos. La Corte tiene facultad de tomar las providencias que estime necesarias para comprobar la veracidad de la declaración, la que mantendrá en reserva y únicamente servirá para los efectos previstos en este artículo. Al cesar en sus cargos los funcionarios y empleados aludidos, deberán hacer nueva declaración del estado de sus patrimonios. La ley determinará las sanciones por el incumplimiento de esta obligación.

Los juicios por enriquecimiento sin causa justa sólo podrán incoarse dentro de diez años siguientes a la fecha en que el funcionario o empleado haya cesado en el cargo cuyo ejercicio pudo dar lugar a dicho enriquecimiento.

Art. 241.—Los funcionarios públicos, civiles o militares que tengan conocimiento de delitos oficiales cometidos por funcionarios o empleados que les estén subordinados, deberán comunicarlo a la mayor brevedad a las autoridades competentes para su juzgamiento, y si no lo hicieron oportunamente, serán considerados como encubridores e incurrirán en las responsabilidades penales correspondientes.

Art. 242.—La prescripción de los delitos y faltas oficiales se regirá por las reglas generales, y comenzará a contarse desde que el funcionario culpable haya cesado en sus funciones.

Art. 243.—No obstante, la aprobación que dé el Órgano Legislativo a los actos oficiales en los casos requeridos por esta Constitución, los funcionarios que hayan intervenido en tales actos, podrán ser procesados por delitos oficiales mientras no transcurra el término de la prescripción.

La aprobación de las memorias y cuentas que se presenten al Órgano Legislativo, no da más valor a los actos y contratos a que ellas se refieren, que el que tengan conforme a las leyes.

Art. 244.—La violación, la infracción o la alteración de las disposiciones constitucionales serán especialmente penadas por la ley, y las responsabilidades civiles o penales en que incurran los funcionarios públicos, civiles o militares, con tal motivo, no admitirán amnistía, conmutación o indulto, durante el periodo presidencial dentro del cual se cometieron.

Art. 245.—Los funcionarios y empleados públicos responderán personalmente y el Estado subsidiariamente, por los daños materiales o morales que causaren a consecuencia de la violación a los derechos consagrados en esta Constitución.

TITULO IX

ALCANCES, APLICACION, REFORMAS Y DEROGATORIAS

Art. 246.—Los principios, derechos y obligaciones establecidos por esta Constitución no pueden ser alterados por las leyes que regulen su ejercicio.

La Constitución prevalecerá sobre todas las leyes y reglamentos. El interés público tiene primacía sobre el interés privado.

Art. 247.—Toda persona puede pedir amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por violación de los derechos que otorga la presente Constitución.

El habeas corpus puede pedirse ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia o ante las Cámaras de Segunda Instancia que no residen en la capital. La resolución de la Cámara que denegare la libertad del favorecido podrá ser objeto de revisión, a solicitud del interesado, por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.

Art. 248.—La reforma de esta Constitución podrá acordarse por la Asamblea Legislativa, con el voto de la mitad más uno de los Diputados electos.

Para que tal reforma pueda decretarse deberá ser ratificada por la siguiente Asamblea Legislativa con el voto de los dos tercios de los Diputados electos. Así ratificada, se emitirá el decreto correspondiente, el cual se mandará a publicar en el Diario Oficial.

La reforma únicamente puede ser propuesta por los Diputados en un número no menor de diez.

No podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República.

Art. 249.—Derógase la Constitución promulgada por Decreto N° 6, de fecha 8 de enero de 1962, publicado en el Diario Oficial N° 110, Tomo 194, de fecha 16 del mismo mes y año, adoptada por Decreto Constituyente N° 3, de fecha 26 de abril de 1982, publicado en el Diario Oficial N° 75, Tomo 275, de la misma fecha, su régimen de excepciones, así como todas aquellas disposiciones que estuvieren en contra de cualquier precepto de esta Constitución.

TITULO X

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 250.—Mientras no se modifique la legislación secundaria en lo pertinente, los delitos que estuviere penados con la muerte, que no estén comprendidos en el artículo 27 de esta Constitución, serán sancionados con la pena máxima de privación de la libertad. Esta disposición se aplicará a las personas que hubiesen sido condenadas a muerte por sentencia ejecutoriada.

Art. 251.—Hasta que la ley de procedimientos mencionadas en el inciso último del artículo 30 de esta Constitución entre en vigencia, se mantendrá en vigor la ley que regule esta materia, pero su vigencia no podrá exceder del día 28 de febrero de 1984.

Art. 252.—El derecho establecido en el ordinal 12° del artículo 38 de esta Constitución, tendrá aplicación hasta que sea regulado en la ley secundaria, la cual no podrá tener efecto retroactivo.

Art. 253.—Se incorporan a este Título las disposiciones contenidas en el Decreto Constituyente N° 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial N° 225, Tomo 281 de fecha 5 de diciembre del mismo año.

Lo dispuesto en los ordinales 3º, 4º y 5º del artículo 152 de esta Constitución, no tendrá aplicación para la próxima elección de Presidente y Vicepresidente de la República, debiéndose estar a lo dispuesto en el Decreto Constituyente Nº 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial Nº 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año.

Art. 254.—Las personas a quienes esta Constitución confiere la calidad de salvadoreños por nacimiento, gozarán de los derechos y tendrán los deberes inherentes a la misma, desde la fecha de su vigencia, sin que se requiera ningún trámite adicional de reconocimiento de su nacionalidad.

Art. 255.—La organización actual de la Corte Suprema de Justicia continuará vigente hasta el 30 de junio de 1984, y los Magistrados de la misma elegidos por esta Asamblea Constituyente durarán en sus funciones hasta esa fecha, en la cual deben estar armonizada con esta Constitución las leyes relativas a su organización y competencia a que se refieren los artículos 173 y 174 de la misma.

Los Magistrados de las Cámaras de Segunda Instancia y Jueces de Primera Instancia actualmente en funciones terminarán sus respectivos periodos, y los nuevos que se elijan conforme a lo dispuesto en esta Constitución, gozarán de la estabilidad en sus cargos a que la misma se refiere y deberán reunir los requisitos que ella exige.

Art. 256.—El Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas de la República elegidos por esta Asamblea Constituyente, durarán en sus funciones hasta el día 30 de junio de 1984.

Art. 257.—Los Vice-presidentes de la República continuarán en el ejercicio de sus cargos hasta el día 31 de mayo de 1984, con las atribuciones que establece el Decreto Constituyente Nº 9, de fecha 6 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial Nº 91, Tomo 275, de fecha 19 del mismo mes y año.

Art. 258.—Las atribuciones, facultades y demás funciones que las leyes o reglamentos confieren a los Subsecretarios de Estado, serán ejercidas por los Viceministros de Estado, excepto la de formar parte del Consejo de Ministros, salvo cuando hicieren las veces de éstos.

Art. 259.—El Fiscal General de la República y el Procurador General de Pobres nombrados de conformidad a la Constitución de 1982, y ratificados por esta Asamblea de acuerdo al régimen de excepciones de la misma durarán en sus funciones hasta el treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro.

Art. 260.—Los Concejos Municipales nombrados de conformidad al Decreto Constituyente Nº 9 de fecha 6 de mayo de 1982, publicado en el Diario Oficial Nº 91, Tomo 275, de fecha 19 del mismo mes y año, durarán en sus cargos hasta el día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco.

Si durante el período comprendido entre el 31 de mayo de 1984 y el 30 de abril de 1985, ocurriere alguna vacante por cualquier causa, ésta será llenada conforme a la ley.

Art. 261.—En caso de que se nombraren Ministros y Viceministros de Estado durante el período comprendido desde la fecha de vigencia de esta Constitución, hasta la fecha en que tomen posesión de sus cargos el Presidente y

el Vicepresidente de la República, elegidos de conformidad al Decreto Constituyente Nº 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial Nº 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año, éstos deberán ser ratificados por la Asamblea Legislativa.

Art. 262.—La creación, modificación y supresión de tasas y contribuciones públicas a que se refiere el ordinal 1º del Art. 204 de esta Constitución, serán aprobadas por la Asamblea Legislativa mientras no entre en vigencia la ley general a que se refiere la misma disposición constitucional.

Art. 263.—Los Miembros del Consejo Central de Elecciones elegidos con base a los Decretos Constituyentes Nos. 17 y 18, de fecha 3 de noviembre de 1982, publicados en el Diario Oficial Nº 203, Tomo 277, de fecha 4 del mismo mes y año, continuarán en sus funciones hasta el día 31 de julio de 1984.

Art. 264.—Mientras no se erija la jurisdicción agraria, seguirán conociendo en esta materia las mismas instituciones y tribunales que de conformidad a las respectivas leyes tienen tal atribución aplicando los procedimientos establecidos en las mismas.

Art. 265.—Reconocese la vigencia de todas las leyes y decretos relativos al proceso de la Reforma Agraria en todo lo que no contradigan el texto de esta Constitución.

Art. 266.—Será obligación del Estado establecer los mecanismos necesarios para garantizar el pago del precio o indemnización de los inmuebles por naturaleza, por adherencia y por destinación de uso agrícola, ganadero y forestal, expropiados como consecuencia de disposiciones legales que introdujeron cambios en el sistema de propiedad o posesión de los mismos.

Una ley especial regulará esta materia.

Art. 267.—Si la tierra que excede los límites máximos establecidos en el artículo 105 de esta Constitución, no fuere transferida en el plazo que allí se contempla por causa imputable al propietario, podrá ser objeto de expropiación por ministerio de ley, y la indemnización podrá no ser previa.

Los conceptos camoesino y agricultor en pequeño deberán definirse en la ley.

Art. 268.—Se tendrán como documentos fidedignos para la interpretación de esta Constitución, además del acta de la sesión plenaria de la Asamblea Constituyente, las grabaciones magnetofónicas y de audiovideo que contienen las incidencias y participación de los Diputados Constituyentes en la discusión y aprobación de ella, así como los documentos similares que se elaboraron en la Comisión Redactora del Proyecto de Constitución. La Junta Directiva de la Asamblea Legislativa deberá dictar las disposiciones pertinentes para garantizar la autenticidad y conservación de tales documentos.

Art. 269.—En caso de que por fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificados por la Asamblea Legislativa, no pudieren efectuarse las elecciones para Presidente y Vicepresidente de la República en la fecha señalada en el Decreto Constituyente Nº 36, de fecha 22 de noviembre de 1983, publicado en el Diario Oficial Nº 225, Tomo 281, de fecha 5 de diciembre del mismo año, la misma señalará una nueva fecha. Tanto para la calificación del hecho como para

el señalamiento de la nueva fecha de celebración de las elecciones, se necesitará el voto de las tres cuartas partes de los Diputados electos.

Art. 270.—Lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 106 de esta Constitución no se aplicará a las indemnizaciones provenientes de expropiaciones efectuadas con anterioridad a la vigencia de esta misma Constitución.

Art. 271.—La Asamblea Legislativa deberá armonizar con esta Constitución las leyes secundarias de la República y las leyes especiales de creación y demás disposiciones que rigen las Instituciones Oficiales Autónomas, dentro del periodo de un año contado a partir de la fecha de vigencia de la misma, a cuyo efecto los órganos competentes deberán presentar los respectivos proyectos, dentro de los primeros seis meses del periodo indicado.

Art. 272.—Todo funcionario civil o militar deberá rendir la protesta a que se refiere el artículo 235, al entrar en vigencia esta Constitución.

Art. 273.—Esta Asamblea se constituirá en Legislativa el día en que entre en vigencia la Constitución y terminará su período el día treinta de abril de mil novecientos ochenta y cinco.

TITULO XI

VIGENCIA

Art. 274.—La presente Constitución entrará en vigencia el día veinte de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, previa publicación en el Diario Oficial el día dieciséis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE, PALACIO LEGISLATIVO: San Salvador, a los quince días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Roberto d'Aubuisson Arrieta
Presidente

Diputado por el Departamento
de San Salvador

Hugo Roberto Carrillo Corleto
Vice-Presidente

Diputado por el Departamento
de Santa Ana

Maria Julia Castillo Rodas
Vice-Presidente

Diputada por el Departamento
de San Salvador

Hugo César Barrera Guerrero,
Primer Secretario

Diputado por el Departamento
de San Salvador

José Francisco Merino López
Primer Secretario

Diputado por el Departamento
de San Miguel

Rafael Morán Castaneda
Primer Secretario

Diputado por el Departamento
de Ahuachapán

Héctor Tulio Flores Larín
Segundo Secretario

Diputado por el Departamento
de Usulután

Antonio Genaro Pastore Mendoza
Segundo Secretario

Diputado por el Departamento
de San Salvador

Mercedes Gloria Salguero Gross
Segundo Secretario

Diputada por el Departamento
de Santa Ana

Alfonso Aristides Alvarenga
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Rodolfo Antonio Castillo Claramount
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Ricardo González Camacho
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Guillermo Antonio Guevara Lacayo
Diputado por el Departamento
de San Salvador

José Humberto Posada Sánchez
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Julio Adolfo Rey Prendes
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Luis Nelson Segovia
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Mauricio Armando Mazier Andino
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Juan Antonio Martínez Varela
Diputado por el Departamento
de San Salvador

Félix Ernesto Cánizales Acevedo
Diputado por el Departamento
de Santa Ana

Fantina Elvira Cortez v. de Martínez
Diputada por el Departamento
de Santa Ana

Rafael Antonio Peraza Hernández
Diputado por el Departamento
de Santa Ana

Juan Ramón Toledo
Diputado por el Departamento
de Santa Ana

Carlos Alberto Funes
Diputado por el Departamento
de San Miguel

Herbert Prudencio Palma Duque
Diputado por el Departamento
de San Miguel

Rafael Soto Alvarenga
Diputado por el Departamento
de San Miguel

David Humberto Trejo
Diputado por el Departamento
de San Miguel

Ricardo Edmundo Burgos
Diputado por el Departamento
de La Libertad

Manuel Mártir Noguera
Diputado por el Departamento
de La Libertad

Juan Francisco Puquirre González
Diputado por el Departamento
de La Libertad

Liliana Rosa Rubio de Valdez
Diputada por el Departamento
de La Libertad

Héctor Manuel Araujo Rivera
Diputado por el Departamento
de Usulután

Luis Roberto Hidalgo Zelaya
Diputado por el Departamento
de Usulután

Ricardo Arnoldo Pohl Tavarone
Diputado por el Departamento
de Usulután

Angel Armando Alfaro Calderón
Diputado por el Departamento
de Sonsonate

Hernán Antonio Castillo Garzona
Diputado por el Departamento
de Sonsonate

Carlos Alberto Madrid Zúñiga
Diputado por el Departamento
de Sonsonate

Jorge Alberto Zelada Robredo
Diputado por el Departamento
de Sonsonate

Mauricio Adolfo Dheming Morrissey
Diputado por el Departamento
de La Unión

José Septalín Santos Ponce
Diputado por el Departamento
de La Unión

Márcia Judith Romero de Torres
Diputada por el Departamento
de La Unión

José Napoleón Bonilla Alvarado
Diputado por el Departamento
de La Paz

José Alberto Buendía Flores
Diputado por el Departamento
de La Paz

Jesús Alberto Villacorta Rodríguez
Diputado por el Departamento
de La Paz

Lucás Asdrúbal Aguilar Zepeda
Diputado por el Departamento
de Chalatenango

Carlos Arnulfo Crespin
Diputado por el Departamento
de Chalatenango

Pedro Alberto Hernández Portillo
Diputado por el Departamento
de Chalatenango

Marina Isabel Marroquín de Ibarra
Diputada por el Departamento
de Cuscatlán

Carmen Martínez Cañas de Lazo
Diputada por el Departamento
de Cuscatlán

Jorge Alberto Jarquín Sosa
Diputado por el Departamento
de Cuscatlán

Antonio Enrique Aguirre Rivas
Diputado por el Departamento
de Ahuachapán

Luis Angel Trejo Sintigo
Diputado por el Departamento
de Ahuachapán

José Luis Chicas
Diputado por el Departamento
de Morazán

Alfredo Márquez Flores
Diputado por el Departamento
de Morazán

Ramiro Midence Barrios Zavala
Diputado por el Departamento
de Morazán

Oscar Armando Méndez Moína
Diputado por el Departamento
de San Vicente

José Armando Pino Molina
Diputado por el Departamento
de San Vicente

Daniel Ramírez Rodríguez
Diputado por el Departamento
de San Vicente

Mario Enrique Amaya Rosa
Diputado por el Departamento
de Cabañas

Jesús Dolores Ortiz Hernández
Diputado por el Departamento
de Cabañas

Roberto Ismael Ayala Echeverría
Diputado por el Departamento
de Cabañas

SECCION CARTELES OFICIALES**DE PRIMERA PUBLICACION**

AVISO Nº 3

Por Auto de esta Dirección General de las ocho horas del día veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y tres y de conformidad con los artículos 11, 12, 13 y 14 de la Ley de Almacenaje vigente, se venderán en pública subasta de las nueve horas en adelante del día 13 de enero de 1984, en el local de la Aduana Aérea de Ilopango, las mercaderías siguientes:

Pól.	Fecha	Guía	Consig.	Bultos	Contenido
POR PRIMERA VEZ					
2427	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	1 trapecio para bebé. Valor ₡ 25.00
2428	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 atado	3 galerías para cortina ₡ 10.00 c/u. Valor ₡ 30.00.
2429	27- 9-80	S/Guía	Sagrisa	17 Blts.	15 bombas atomizadoras para fumigar ₡ 200.00 c/u.; 2 motores para bombas ₡ 100.00 c/u. Valor ₡ 3.200.00
2430	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	1 extractor de jugo automático. Valor ₡ 500.00.
2431	27- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 tambo	12 1/2 kilos de aceite de eucalipto ₡ 25.00 c/u. Valor ₡ 312.50.
2433	29- 9-80	625811	Rodolfo Gloser y Co.	1 Ctón.	6 cajuelas para hacer hielo ₡ 10.00 c/u. Valor ₡ 60.00.
2434	29- 9-80	188361	Productos Alimenticios Texas Instrument	1 jaba	1 galón de electrolito para baterías. Valor ₡ 10.00.
2435	27- 9-80	5302404		1 Ctón.	1 motor de acero inoxidable para laboratorio. Valor ₡ 75.00.
2436	30- 9-80	560533	Ignorado	1 Ctón.	4 botellas de vino Ries Ling ₡ 15.00 c/u. Valor ₡ 60.00.
2440	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 atado	1 cuna metálica. Valor ₡ 50.00.
2441	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	2 botes de tinta para imprenta ₡ 15.00 c/u. Valor ₡ 30.00.
2442	30- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	3 baleros ₡ 25.00 c/u.; 1 disco de clutch ₡ 40.00; 1 prensa para clutch ₡ 50.00; 1 farol para automóvil ₡ 10.00. Valor ₡ 175.00.
2443	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	10 estuches para primeros auxilios médicos ₡ 20.00 c/u. Valor ₡ 200.00.
2445	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	4 mortas poleas de plástico ₡ 25.00 c/u. Valor ₡ 100.00.
2446	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 atado	5 láminas de hierro ₡ 10.00 c/u. Valor ₡ 50.00.
2448	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	6 juguetes ₡ 30.00 c/u. Valor ₡ 180.00.
2449	30- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 caja	1 T. V. a colores Motorola ₡ 300.00; 70 piezas de ropa ₡ 1.00 c/u. Valor ₡ 370.00.
2450	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	39 rollos de tiras plásticas para tapicería ₡ 10.00 c/u. Valor ₡ 390.00.
2451	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 bolsa	1 lote de repuestos p/uso mecánico. Valor ₡ 25.00.
2452	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	3 Ctns.	3 latas plásticas de 5 galones de A.F. emulsión médica ₡ 30.00 c/u. Valor ₡ ... 90.00.
2453	1-10-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	1 antena completa para radio transmisión. Valor ₡ 150.00.
2454	1-10-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	1 asador eléctrico p/restaurante Wear-Ever. Valor ₡ 400.00.
2455	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	4 juegos con 6 botes c/tapón de corcho para especias en cocina ₡ 5.00 c/u. Valor ₡ 20.00.
2456	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	4 ratas para muebles de hierro ₡ 35.00 c/u. Valor ₡ 140.00.
2457	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	4 brújulas para barcos ₡ 25.00 c/u. Valor ₡ 100.00.
2458	29- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 atado	2 antenas para automóvil 20 metros ₡ ... 25.00 c/u.; 1 antena para base de 20 metros ₡ 100.00. Valor ₡ 150.00.
2459	1-10-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	35 matrices para punzón ₡ 5.00 c/u.; 47 punzones grandes ₡ 10.00 c/u.; 110 punzones inferiores pequeños ₡ 10.00 c/u. Valor ₡ 1.745.00.
2461	30- 9-80	S/Guía	Ana G. Rivera	1 Ctón.	9 piezas de ropa ₡ 3.00 c/u.; 2 cortinas ₡ 5.00 c/u.; 3 juguetes ₡ 3.00 c/u. Va...

Pól.	Fecha	Guía	Consig.	Bultos	Contenido
2462	29- 9-80	28518184	Carmen Poveda	1 Ctón.	1 T.V. a colores R.C.A. \$ 700.00; 2 parlantes \$ 15.00 c/u; 15 piezas de ropa \$ 2.00 c/u; 1 lote de artículos varios \$ 5.00. Valor \$ 765.00.
2463	29- 9-80	283532	Rosalía Quinteros	1 Ctón.	1 licuadora \$ 60.00; 1 T.V. blanco y negro Nivico \$ 200.00; 45 piezas de ropa \$ 2.00 c/u. Valor \$ 350.00.
2464	1-10-80	S/Guía	I. B. M.	2 Ctns.	136 bolitas para máquina de escribir IBM elite 72 \$ 25.00 c/u; 9 bolsitas con repuestos eléctricos \$ 1.00 c/u. Valor 3.409.00.
2465	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	27 juegos de biberones para pajas Evenflo \$ 1.00 c/u. Valor \$ 27.00.
2466	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	94 paquetes de rulos para el cabello c/u. \$ 3.00. Valor \$ 282.00.
2468	30- 9-80	S/Guía	Sin Consignatario	1 Ctón.	250 cajitas para guardar Slides de fotografía \$ 2.00 c/u. Valor \$ 500.00.
2469	1-10-80	S/Guía	Sin Consignatario	2 Ctns.	2 máquinas rectificadoras d/cilindros de motores \$ 1.500.00 c/u. Valor \$... 3.000.00.
2470	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Paq.	3 rollos con hojas de acetato para dibujo \$ 30.00 c/u. Valor \$ 90.00.
2471	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 fardo	15.800 kilogramos de cable de acero de 1/2" \$ 10.00 c/kg. Valor \$ 158.00.
2472	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	1 bomba para acoplar a motor marca Denison. Valor \$ 100.00.
2473	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	60 conectores para mangueras de alta presión \$ 5.00 c/u. Valor \$ 300.00.
2474	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	19 conos de hilo \$ 3.00 c/u. Valor \$... 57.00.
2476	30- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	17 kilos de alambre para maquinaria textil \$ 15.00 c/k. Valor \$ 225.00.
2477	30- 9-80	S/Guía	I. B. M.	1 Ctón.	1 pantalla para computadora IBM. Valor \$ 400.00.
2478	30- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	4 patas de plástico para muebles \$ 15.00 c/u. Valor \$ 60.00.
2480	27- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	1 lote de repuestos para vehículos. Valor \$ 50.00.
2481	27- 9-80	S/Guía	I. B. M.	1 Ctón.	9 placas para máquinas copadoras \$... 2.00 c/u. Valor \$ 18.00.
2482	27- 9-80	S/Guía	Banco Agrícola Comercial	1 Ctón.	33 rollos de hilo \$ 10.00 c/u. \$ 330.00.
2483	26- 9-80	S/Guía	Ignorado	1 Ctón.	1 granatorio electrónico p/laboratorio. Valor \$ 500.00.
2484	27- 9-80	S/Guía	Zoila Villa Real	1 Ctón.	1 árbol de navidad. Valor \$ 60.00.

POR CUARTA VEZ

934	4- 7-80	12487952	Eduardo Salvador Sánchez	2 Ctns.	1 radiocadisco con 2 parlantes. Valor \$ 621.01.
943	9- 7-80	83408695	Tapan de El Salvador	1 Ctón.	2 motores eléctricos 1/3 HP marca Universal. Valor \$ 162.00.
1003	15- 7-80	9841241	INDUSAL	1 Ctón.	2 engrapadoras industriales. Valor \$... 378.01.
1004	16- 7-80	13214552	Jubis Industrial	1 Ctón.	1 block de material plástico para uso industrial. Valor \$ 27.01.
1015	28- 7-80	9709243	Sistemas S.A.	1 Ctón.	2 piezas circuito impreso para computadora. Valor \$ 540.01.
1017	22- 7-80	9992183	Industrias Unisola	12 Ctns.	200 rollos con viñetas para Te Lipton. Valor \$ 1,080.01.
1018	18- 7-80	24506893	Misión Adventista de El Salvador.	1 Ctón.	26 cintas grabadas "La Voz de la Esperanza. Valor \$ 70.21.
1026	17- 7-80	53551164	Distribuidora Salvadoreña.	9 fardos	350 revistas Billiken; 90 revistas Gente. Valor \$ 101.80.
1027	17- 7-80	10641470	Textiles Tazumal, S. A.	1 caja	1 peine industrial en faja p/. peinar algodón. Valor \$ 432.01.
1029	17- 7-80	12769854	Reencauchadora Multi frío, S. A.	1 Ctón.	350 sierras circulares segmentales. \$... \$ 661.51.
1034	16- 7-80	20080351	Servicio Técnico Telefónico	2 Ctns.	15 teléfonos "GTE" nuevos; 14 conectores "GTE" nuevos. Valor \$ 1,230.13.
1035	16- 7-80	24073803	Matinsa.	5 Ctns.	22 termómetros industriales con accesorios. Valor \$ 1,782.00.

DIRECCION GENERAL DE LA RENTA DE ADUANAS: San Salvador, a las doce horas del día veintiuno de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

SECCION CARTELES PAGADOS**DE PRIMERA PUBLICACION**

Jorge Alberto Carranza Amaya, notario, de este domicilio con oficina en Trece Calle Poniente número ciento cuarenta y tres, local número cinco de esta ciudad, hace saber: que por resolución pronunciada por el suscrito notario, a las ocho horas del veintiocho de los corrientes, se ha declarado heredera con beneficio de inventario de la herencia intestada que a su defunción, ocurrida en Ciudad Arce, su último domicilio, el día veintitrés de febrero de este año, dejó el señor José Secundino Valencia, conocido por José Valencia Buendía y por José Valencia, a la señora Silvia Luz Valencia, conocida por Silvia Luz Valencia Morán, hoy de Alfaro en concepto de hija legítima del causante y como cesionaria de los derechos que correspondían a la cónyuge sobreviviente señora María Valeria de Jesús Morán viuda de Valencia, conocida por María Morán, habiéndosele conferido la administración y representación definitivas de la sucesión.

San Salvador, veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Jorge Alberto Carranza Amaya,
Notario.

1 v. Nº 19871—8—XII—83.

Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil de este distrito,

Avisa: que por resolución de este Tribunal de las nueve horas y diez minutos del veintisiete de octubre del corriente año, se han declarado herederos abintestato con beneficio de inventario del señor Tomás López Valiente, conocido por Tomás López, fallecido el veintuno de mayo del corriente año, en el cantón Concastes de la jurisdicción de Coatepeque, lugar de su último domicilio, a sus hijos legítimos señores Félix de León López Vásquez, conocido por Feliciano López, Eduardo Reyes López Vásquez, conocido solo por Eduardo López, Antonia López Vásquez y Berta Lina López Vásquez, a quienes se confiere conjuntamente la representación y administración definitivas de la sucesión. Lo que se pone en conocimiento del público para los fines de ley.

Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las ocho horas y diez minutos del diez de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. —Lic. Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil. —Norma Elena Figueroa de Bolaños, Secretaria.

1 v. Nº 19880—8—XII—83.

Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil de este distrito,

Avisa: que por resolución de este Tribunal de las doce horas del primero de los corrientes, se ha declarado heredera abintestato con beneficio de inventario de la señora Victoria Alvarez viuda de Belismelis o Victoria Alvarez, fallecida el veintuno de mayo de mil novecientos setenta y seis en esta ciudad, lugar de su último domicilio a su hija ilegítima señora Adela Belismelis de Arévalo, conocida por Adela Alvarez, a quien se confiere definitivamente

la representación y administración de la sucesión. Lo que se hace del conocimiento del público para los fines de ley.

Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las diez horas del seis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —Licenciado Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil. —Norma Elena Figueroa de Bolaños, Secretaria.

1 v. Nº 19882—8—XII—83.

El infrascrito Alcalde Municipal de Santa Ana;

Hace saber: que a esta Alcaldía Municipal, se han presentado solicitando contraer matrimonio civil, entre sí, los señores: Wilson Capeleti Boff y Gloria Elizabeth Mendoza Monroy, el primero de veintiocho años de edad, soltero, funcionario administrativo, originario y residente de Estado de Río Grande del Sur, Municipio de Torres, distrito de Morro Azul, República de los Estados Unidos del Brasil, de nacionalidad Brasileña, hijo de Arnaldo José Boff y de Pascoa Capeleti Boff, residentes del lugar antes mencionado, y la segunda de veinticinco años de edad, soltera, estudiante, originaria y vecina de esta ciudad, de nacionalidad salvadoreña, hija de Luis Alberto Mendoza Méndez y de Ana Leticia Monroy Quijada, del domicilio de esta ciudad.

Los peticionarios han presentado la documentación correspondiente.

Lo que se hace del conocimiento público, rogando a las personas que sepan o tengan noticias de algún impedimento legal para que este matrimonio se efectúe, informando a esta Alcaldía, dentro del término de ley.

Alcaldía Municipal: Santa Ana, siete de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —Daniel Alegria Vides, Alcalde Municipal y Jefe del Distrito. —Jovel Estrada Valiente, Secretario Municipal Interino.

3 v. c. Nº 19916 1—8—XII—83.

Miguel Héctor Flores Figueroa, Juez Primero de Primera Instancia de este distrito judicial.

Hace saber: que a este Juzgado se ha presentado el señor René Mauricio Artiga de treinta y seis años de edad, obrero, del domicilio de Soyapango, manifestando que tiene proyectado promover juicio civil ordinario de divorcio, contra su cónyuge Teresa de Jesús Rivera Inglés, mayor de edad, de oficios domésticos, de domicilio ignorado, ignorando también si la expresada señora ha dejado procurador o representante legal, se previene que si dicha señora ha dejado persona que la represente, se presente a este Juzgado dentro de los quince días después de la tercera publicación de los edictos respectivos, comprobando dicha circunstancia.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado Primero de Primera Instancia: Cojutepeque, a las nueve horas del día primero de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —Lic. Miguel Héctor Flores Figueroa, Juez Primero de Primera Instancia. —Roque Alfredo Chávez, Secretario.

3 v. c. Nº 19879 1—8—XII—83

A V I S O

De conformidad con el Art. 146 de las Disposiciones Generales de la Ley de Presupuesto General vigente, se hace saber: que ante esta Corte de Cuentas se ha presentado la señora Margarita Flores de Monteagudo, mayor de edad, de oficios domésticos, del domicilio de San Miguel, solicitando se le permita firmar los documentos respectivos y cobrar la cantidad de doscientos treinta y cinco 89/100 colones (¢ 235.89) que a su fallecimiento ocurrió el día trece de mayo del presente año, dejó pendiente de cobro su esposo señor Juan Francisco Monteagudo, cuando desempeñaba el cargo de Vigilante en el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), destacado en Hacienda Cantora, departamento de San Miguel, correspondiente a los períodos del 25 de abril al 8 de mayo y del 9 al 22 de mayo del corriente año.

Lo anterior se pone en conocimiento del público, para que toda persona que se crea con mejor derecho, se presente a hacer uso de él, a más tardar dentro de los tres días subsiguientes a la última publicación de este aviso.

Corte de Cuentas de la República: San Salvador, a los trece días del mes de junio de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. José Francisco Guerrero,
Presidente de la Corte de Cuentas.

3 v. 1 v. c. 3 d. Nº 19799 1—8—XII—83.

A V I S O

De conformidad con el Art. 146 de las Disposiciones Generales del Presupuesto General vigente, se hace saber: que ante esta Corte de Cuentas se ha presentado la señora María Alicia Benavides de Chávez, mayor de edad, modista, del domicilio de Mejicanos de este mismo departamento, solicitando se le permita firmar los documentos respectivos y cobrar la cantidad de ciento cincuenta y cuatro colones con noventa y cuatro centavos (¢ 154.94) que a su fallecimiento ocurrió el día 20 de julio del corriente año, dejó pendiente de cobro su esposo el señor Raúl Chávez Gómez, cuando desempeñaba el cargo de peón en la Región Oriental de Salud, en San Miguel, correspondiente a los períodos del 4 al 17 de julio y del 18 al 31 de julio de 1983.

Lo anterior se pone en conocimiento del público, para que toda persona que se crea con mejor derecho, se presente a hacer uso de él, a más tardar dentro de los tres días subsiguientes a la última publicación de este aviso.

Corte de Cuentas de la República: San Salvador, veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. José Francisco Guerrero,
Presidente de la Corte de Cuentas.

3 v. 1 v. c. 3 d. Nº 19793 1—8—XII—83.

Francisco Rafael Guerrero Aguilar, Juez Segundo de Primera Instancia de este distrito judicial,

Hace saber: al público para los efectos de ley, que se ha presentado a este Tribunal, el señor Daniel de Jesús Ramírez mayor de edad, agricultor en pequeño, de este domicilio, manifestando que el día dieciséis de julio de mil nove-

cientos setenta, ante los oficios del Alcalde Municipal de Chalchuapa, contrajo matrimonio civil con doña Sara Abdulia Alemán Jiménez, quien es mayor de edad, de oficios domésticos y quien hasta el mes de agosto de mil novecientos setenta y uno tuvo como último domicilio conocido esta ciudad; no sabiendo si se encuentra en el país y si ha dejado Procurador o representante legal que la represente en el juicio de divorcio que en su contra promoverá por la causal décima del Art. 145 C.; en vista de lo anterior, ha promovido las correspondientes diligencias de ausencia, a fin de que se le nombre a la mencionada señora Alemán Jiménez, un curador especial, para que la represente en el juicio aludido; de consiguiente se previene, que si dicha señora Sara Abdulia Alemán Jiménez, tuviere procurador o representante legal con facultades judiciales, tuviere procurador o representante legal con facultades judiciales, se presente a este Juzgado dentro de los quince días siguientes a la tercera publicación de este aviso y pruebe tal circunstancia.

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: Nueva San Salvador, a las nueve horas del día seis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. — *Dr. Francisco Rafael Guerrero A.,* Juez 2º de Primera Instancia. — *Br. Yohalmo, Antonio Herrera,* Secretario.

3 v. alt. Nº 19917 1—8—XII—83

El infrascrito Juez Segundo de Primera Instancia de este distrito judicial, al público para los efectos de ley,

Hace saber: que por resolución de este Tribunal de las diez horas del día veintinueve de los corrientes, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción dejó el señor Concepción Pereira Saenz, quien falleció a las dieciséis horas del día cinco de agosto de mil novecientos ochenta y dos, en el barrio El Centro de la población de Joateca, siendo dicho lugar su último domicilio, de parte de la señora María Josefina Umaña de Pereira, ahora viuda de Pereira, por derecho propio que le corresponde, en su concepto de cónyuge sobreviviente del expresado causante. Confiérese a la aceptante en la forma indicada la administración y representación interinas de la expresada sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

Librado en el Juzgado Segundo de Primera Instancia: San Francisco Gotera a treinta días de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. — *Dr. Juan Ramón Montoya,* Juez 2º de 1ª Instancia. — *—Br. Juan Antonio López,* Secretario.

3 v. alt. Nº 19878 1—8—XII—83.

Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil de este distrito,

Hace saber: que por resolución de este Tribunal de las nueve horas y diez minutos del dieciséis de noviembre del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente de parte del señor César Augusto Acosta Batres, con beneficio de inventario la herencia intestada del señor Eusebio Batres Arroyo, fallecido en el cantón Primavera de esta jurisdicción, su último domicilio, el diecinueve de junio de mil novecientos ochenta; en su concepto el aceptante de hijo natural del causante, a quien se nombra interinamente administrador y representante de la sucesión con las facultades y restricciones de los

curadores de la herencia yacente. Lo que se hace del conocimiento del público para los fines de ley.

Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las doce horas y treinta minutos del veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. —Lic. Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil. —Norma Elena Figueroa de Bolaños, Secretaria.

3 v. alt. Nº 19881 1—8—XII—83.

Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil de este distrito,

Hace saber: que por resolución de este Tribunal de las ocho horas y treinta minutos del dieciséis de noviembre del presente año, se ha tenido por aceptada expresamente con beneficio de inventario la herencia intestada de la señora Matilde Cristina Acevedo de Morales o Matilde Cristina Acevedo, fallecida en esta ciudad, lugar de su último domicilio, el día treinta y uno de octubre de mil novecientos ochenta y uno; de parte de su cónyuge sobreviviente señor Everildo Daniel Morales Figueroa o Everildo Daniel Morales, y de su hija legítima Ana Durven Morales Acevedo, a quienes se nombra interinamente administradores y representantes de la sucesión con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente. Lo que se pone en conocimiento del público para los fines de ley.

Juzgado Primero de lo Civil: Santa Ana, a las doce horas y veinte minutos del primero de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —Lic. Juan Carlos Solano Marciano, Juez Primero de lo Civil. —Norma Elena Figueroa de Bolaños, Secretaria.

3 v. alt. Nº 19883 1—8—XII—83.

Julio César Valdivieso Castaneda, Juez Segundo de lo Civil de este distrito,

Hace saber: al público para efectos de ley, que por resoluciones de este Juzgado de las once horas y quince minutos del día dieciocho de noviembre de mil novecientos ochenta y de las diez horas del día diez de agosto del corriente año, se ha tenido por aceptada expresamente, con beneficio de inventario, la herencia intestada que, al fallecer en esta ciudad, su último domicilio, el día dieciséis de mayo de mil novecientos setenta y seis, dejó el señor Manuel López Oliveros, conocido por Manuel López Hernández y por Manuel López, de parte de los señores Luz Amaya Vanegas de López, ahora viuda de López, María Mercedes López Amaya, Juan Antonio López Amaya y María de los Angeles López Amaya viuda de Torres, en el concepto de cónyuge sobreviviente y de hijos legítimos respectivamente, del causante y, la primera de los mencionados señores, también en el concepto de cesionaria de los derechos que en la presente sucesión le correspondían al señor José Gilberto López Amaya, como hijo legítimo del referido causante. Y se confiere a los aceptantes, la administración y representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

Librado en el Juzgado Segundo de lo Civil: San Salvador, a las diez horas veinte minutos del día veintisiete de septiembre de mil novecientos ochenta y tres. —Dr. Julio César Valdivieso Castaneda, Juez Segundo de lo Civil. —Br. Jorge Alberto Martínez, Martínez, Secretario.

3 v. alt. Nº 19909 1—8—XII—83.

El Juez Cuarto de lo Civil del distrito de San Salvador,

Hace saber: que por resolución dictada por este Juzgado, a las once horas y cincuenta minutos del día dos del corriente mes, se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario la herencia intestada que a su defunción ocurrida en San Francisco California, Estados Unidos de América, siendo esta ciudad su último domicilio, el día tres de mayo del corriente año, dejó la señora Zoila Esperanza Funes Mendoza, de parte de la señora Blanca Lilian Funes Mendoza, en su calidad de hermana ilegítima de la causante; y se ha conferido a la aceptante la administración y representación interina de la sucesión, con las facultades y restricciones legales.

Lo que se avisa al público para los efectos de ley.

Librado en el Juzgado Cuarto de lo Civil: San Salvador, a las doce horas del día cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —Dr. Max Lothar Burgos, Juez Cuarto de lo Civil. —Br. José Ricardo Funes Velásquez, Secretario.

3 v. alt. Nº 19926 1—8—XII—83.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de Quiñonez Hermanos S.A., de esta plaza, convoca a los señores accionistas a celebrar Junta General Ordinaria en las oficinas de la Sociedad, situadas en el Edificio número tres mil quinientos veinticinco de la Carretera Panamericana, salida a Santa Tecla, de las once horas en adelante del día quince de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro.

En caso de no poderse celebrar en la fecha indicada la sesión a que se convoca, por este medio se les convoca nuevamente y con el mismo fin para celebrar la referida Junta General, de las quince horas en adelante de esa misma fecha, en el lugar ya señalado.

La agenda a conocerse en la Sesión es la siguiente:

- I.—Verificación del quórum e instalación de la Junta.
- II.—Lectura del Acta de la sesión anterior.
- III.—Memoria de Labores de la Junta Directiva correspondiente al ejercicio social concluido el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.
- IV.—Presentación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio social que finalizó el treinta de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.
- V.—Informe y dictámen del Auditor Externo de la Sociedad.
- VI.—Elección de la Junta Directiva de la Sociedad.
- VII.—Elección del Auditor Externo y fijación de sus honorarios.
- VIII.—Autorización a los señores Directores y Gerentes de conformidad al Artículo 275 numeral III del Código de Comercio.
- IX.—Cualquier otro asunto que legalmente pueda discutirse en la sesión.

Para celebrar Junta en primera convocatoria deberán estar presentes o representadas, por lo me

nos, la mitad más una de las acciones que forman el capital social de la Compañía y las resoluciones se tomarán por mayoría de votos de las acciones presentes o representadas.

En segunda fecha de convocatoria, la sesión se celebrará con cualquier número de acciones que asistan y la resolución se tomará con la mayoría de los votos de las acciones presentes o representadas.

San Salvador, cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Gerard Thomas Coughlin,
Director Presidente.

QUINONEZ HERMANOS, S. A.

3 v. alt. Nº 19873 1-8-XII-83.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de la Sociedad de Economía Mixta "Estaciones Terminales de Autobuses de Sonsonate, S. A. de C. V.", convoca a los señores socios de dicha Sociedad para que asistan a la Junta General Ordinaria; que se llevará a cabo el día veintiocho de enero de mil novecientos ochenta y cuatro a partir de las nueve horas, en el local de la Sociedad, situado en Avenida Quince de Septiembre de Sonsonate, La Agenda a desarrollar es la siguiente

"AGENDA"

- 19) Comprobación del quórum.
- 29) Lectura del Acta anterior.
- 39) Conocer de la memoria de la Junta Directiva, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe del Auditor, correspondiente al Semestre del 1º de julio al 31 de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, a fin de aprobar o improbar los tres primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas.
- 49) Distribución de las Utilidades correspondientes al periodo expresado
- 59) Elección de: Junta Directiva y Junta de Vigilancia.
- 69) Nombramiento del Auditor.
- 79) Cualquier otro asunto que pueda ser tratado de conformidad con la Ley y el Pacto Social.

El quórum necesario se constituirá con la asistencia de tres Representantes de las acciones de la Serie "A" y tres representantes de las acciones de la serie "B"; éstos electos dentro de las de su seno.

En caso de no poderse celebrar esta sesión por falta de quórum, se convoca por este mismo medio, a la misma hora, en el mismo lugar para el día veintinueve de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, celebrándose en este caso la sesión con los representantes de los grupos de acciones que asistan por sí o por medio de sus representantes.

Sonsonate, ocho de Diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Bernarda Marina Arévalo Canales,
Directora-Presidenta.

3 v. alt. Nº 19915 1-8-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matrículas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado Enrique Ernesto Soler Leitzler, como Representante Legal de la sociedad Nesol, Sociedad

Anónima de Capital Variable, que puede abreviarse NESOL, S.A. DE C.V., solicitando que éta, se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Social.

Las características de dicha sociedad, son las siguientes: salvadoreña, de este domicilio, con un capital social de veinte mil colones (¢ 20.000.00), el plazo de la sociedad es por tiempo indefinido; inscrita al Nº 40 del Libro 374 de Registro de Socios del Registro de Comercio, N.I.T. 6614-220683-001-4.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador veinticuatro de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19921 1-8-XII-83.

CONVOCATORIA

La Junta Directiva de "Compañía Farmacéutica, S. A. de C. V.", convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrarse el día veinte de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, a partir de las dieciocho horas, en el local de la Empresa, situado al final de la Avenida Melvin Jones de esta ciudad; en primera convocatoria, en caso de no haber quórum, se cita en segunda convocatoria para la misma hora del día veintitrés de marzo del mismo año, en el mismo lugar; para conocer asuntos de carácter ordinario, según la siguiente agenda:

- 19)—Lectura del Acta de Junta General anterior.
- 29)—Memoria de Labores del 1º de enero al 31 de diciembre de 1983.
- 39)—Presentación del Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 1983.
- 49)—Informe del Auditor.
- 59)—Aplicación de las utilidades.
- 69)—Nombramiento del Auditor y señalamiento de sus honorarios.
- 79)—Autorización para verificar determinadas operaciones de los Administradores con la Empresa, de acuerdo al Art. 275 del Código de Comercio.
- 89)—Cualquier otro punto que pueda conocerse de conformidad a la Ley y al Pacto Social.

Quórum necesario para la primera convocatoria: cuatro mil una (4001) acciones presentes o representadas; para la segunda convocatoria el quórum se formará con cualquiera que sea el número de acciones presentes o representadas.

Nueva San Salvador, a los siete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. José Alejandro Chávez Jiménez,
Gerente General.

3 v. alt. Nº 19919 1-8-XII-83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matrículas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que el señor Gerardo Gálvez Zepeda, como Representante Legal de la Sociedad "Lansalco Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable", que se abrevia "Lansal, S.A. de C.V.", salvadoreña, de este domicilio, cuya Escri-

tura Social está inscrita bajo el N° 3 del Libro 251 de Registro de Sociedades del Registro de Comercio, N.I.T. 0614—040479—004—7 y Matrícula Personal de Comerciante Social N° 2641, ha presentado solicitud a este Departamento para que se conceda a su representada la Matrícula de Comercio correspondiente y se inscriba a su favor la Empresa Comercial denominada "Lancasco Salvadoreña, Sociedad Anónima de Capital Variable", que se abrevia "Lansal, S.A. de C.V.", que se dedica a la compra venta de mercaderías medicinales y cosméticos, con dirección en Pasaje Carbonell N° 6 y 67 Av. Sur, ciudad, con un activo de un millón setenta y seis mil ochocientos noventa y seis colones cuarenta y nueve centavos (¢ 1.076.896.49), y que tiene el establecimiento denominado "Lansal, S.A. de C.V.", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud, para que en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, cinco de septiembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. N° 19876 1—8—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber que Donatila Alemán Blanco de Montesinos, salvadoreña, mayor de edad, comerciante, con residencia en barrio El Centro San Alejo, departamento La Unión, con Cédula de Identidad Personal número 7-4-00355, NIT. 1217—300739—001—9 y Matrícula Personal de Comerciante Individual en trámite, ha presentado solicitud a este Departamento para que se le conceda la Matrícula de Comercio correspondiente y se inscriba a su favor, la Empresa Comercial denominada "Comercial Tilita", que se dedica a la compra venta de textiles y artículos de primera necesidad, cuyo activo asciende a la suma de veintiocho mil seiscientos cuarenta y nueve colones ocho centavos, (¢ 28,649.08) y que tiene el establecimiento denominado "Comercial Tilita", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición, en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, veinte de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. N° 19913 1—8—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que Andrea Montesinos de Morales, salvadoreña, mayor de edad, comerciante, con residencia en barrio El Centro, San Alejo, departamento La Unión, con Cédula de Identidad Perso-

nal número 7-4-002105, NIT. 1414—150833—001—2 y Matrícula Personal de Comerciante Individual en trámite, ha presentado solicitud a este Departamento para que se le conceda la Matrícula de Comercio correspondiente y se inscriba a su favor la Empresa Comercial denominada "Tienda Morales", que se dedica a la compra-venta de textiles y artículos de primera necesidad, con dirección en barrio El Centro San Alejo, departamento de La Unión, cuyo activo asciende a la suma de treinta y cuatro mil seiscientos noventa y un colones veinticinco centavos (¢ 34,691.25) y que tiene el establecimiento denominado "Tienda Morales", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición, en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, veinte de octubre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. N° 19914 1—8—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que Héctor Danilo Benítez Granados, salvadoreño, mayor de edad, comerciante, con residencia en 3ª Avenida Norte número 1004 ciudad y departamento de San Miguel, con Cédula de Identidad Personal número 3-1-034923 y NIT. 1303—040453—001—0 y Matrícula Personal de Comerciante Individual en trámite, ha presentado a este Departamento solicitud para que se le conceda la Matrícula de Comercio correspondiente y se inscriba a su favor la Empresa Comercial denominada "Casa La Maravillosa", que se dedica a la compra-venta de artículos para el hogar, con dirección en 3ª Avenida Norte número 1004 de la ciudad de San Miguel, departamento del mismo nombre, cuyo activo asciende a la suma de noventa y cuatro mil ochocientos treinta y dos colones cinco centavos (¢ 94,832.05) y que tiene el establecimiento denominado "Casa La Maravillosa", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de Ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de quince días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición, en su caso, con la prueba pertinente.

San Salvador, veintiocho de julio de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. N° 19918 1—8—XII—83.

El infrascrito Alcalde Municipal,

Hace constar: que a esta oficina se ha presentado José Santos Gutiérrez, de veintidós años de edad, soltero, agricultor en pequeño, de este origen y domicilio, con Cédula N° 7—4—010148, solicitando título de propiedad y dominio de un solar y

casa, situado en el cantón San Jerónimo, esta jurisdicción, mide y linda: Oriente, 48 metros, linda con Fidelina Coronado y Anselmo Hernández calle de por medio; Norte, 26 metros 50 centímetros, con Mauricio Coronado, línea quebrada; Poniente, 41 metros 75 centímetros, con Angela Hernández; Sur, 28 metros, Angela Hernández, existe una casa techo de teja. Lo adquirió por compra verbal a delfina y Joaquín Colorado. No es predio dominante ni sirviente, lo estima en seis mil colones.

Alcaldía Municipal: San Alejo, a cinco de diciembre de mil novecientos ochenta y tres. —Guillermo Manzano Guerra, Alcalde Municipal. —Salomón Buruca, Secretario Municipal.

3 v. alt. Nº 19872 1—8—XII—83.

Ovidio Bonilla Flores, Juez de lo Laboral de este distrito judicial,

Avisa: que por razones de Utilidad y Necesidad debidamente comprobadas y a solicitud de los señores Oscar Hernández, conocido por Oscar René Girón y Olga Esperanza Lemus de Hernández, quienes a su vez son representantes legales de los menores Lorena Dolores y Elmer Mauricio, ambos de apellido Girón Lemus, se venderá en este Juzgado en pública subasta, los derechos proindivisos que a dichos menores les corresponde, en un solar urbano, situado en el barrio Concepción de la ciudad de San Miguel, en el lugar llamado Colonia Belén, de ciento treinta y siete metros cuadrados cuarenta y seis decímetros cuadrados en el cual hay construida una casa tipo mínimo, la que está marcada con el número, antes catorce, hoy quinientos catorce de la Doceava Avenida Sur solar que a partir de su vértice Noroeste mide y linda: al Norte, diecisiete metros de ancho de por medio; al Sur, diecisiete metros treinta y dos centímetros con casa número dieciséis tipo mínimo de la Doceava Avenida Sur; y al Poniente siete metros noventa y cuatro centímetros, con casa número diecinueve tipo mínimo de la Décima Avenida Sur. Las casas colindantes son del tipo de la misma colonia belén, que es de propiedad del Instituto de Vivienda Urbana; inscrito en el Registro de la propiedad Raíz de la primera sección de Oriente, bajo el número cuatro del Libro trescientos cuarenta y seis, de este Departamento.

Librado en el Juzgado de lo Laboral: San Miguel, a las diez horas del día treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. *Dr. Ovidio Bonilla Flores*, Juez de lo Laboral. *Fidelina de Cárdenas*, Secretaria.

3 v. alt. Nº 19877 1—8—XII—83.

José María Estrada Alvarez, Juez de Primera Instancia de este distrito judicial, al público para los efectos de ley;

Hace saber: que por utilidad y necesidad, legalmente comprobados, se ha ordenado la venta en pública subasta, en este Juzgado, de los derechos indivisos, que le corresponden a los menores Dolores Yaneth Amaya, por medio de su representante legal señora Gloria Quinteros, en concepto de madre legítima de dicha menor, sobre dos inmuebles rústicos, situados en el cantón Nombre de Dios de esta jurisdicción, el primero: sin cultivos ni accesorios, como de tres manzanas o dos hectáreas y veinte áreas, lindante: al Oriente, Sur

y Poniente, con resto del terreno de la otorgante del antecedente o sea Mercedes Iraheeta Rodríguez, del cual se segregó la parte que se describe divididos desde donde están tres piedras a la orilla de la quebrada El Bosque, recto a un árbol de Jobo, donde se pondría un mojón de piedra y de allí por cerco de piedra de chereta hasta donde está un árbol de aceituno donde forma esquina, donde se pondría otro mojón de piedra, de allí se sigue por un cerco de piña y de piedra de chereta a llegar a un árbol de pitarrillo, donde está un mojón de piedras, de donde se sigue el lindero por una zanjuelita a llegar a la quebrada del Agua Caliente; y al Norte, con terreno que fue de Ciriaco Ramos, hoy de José Ruiz y con el de Juan Amaya, mediando la quebrada del Maj Paso. El segundo, como de cuatro manzanas o dos hectáreas y ochenta áreas, lindante: al Oriente, comenzando de la esquina de un cimientito de piedra hasta una puerta de golpe, linda con terreno de Nicolás Zavala, continúa cerco de alambre hasta otra puerta de golpe, colinda con terreno de María Santos Zavala de Cortéz, estando esta última puerta en un mojón de piedra donde hubo un árbol de carao; al Norte, con terreno de Francisco Cortéz, mediando cerco de piña hasta llegar a otro cimientito de piedra abajo de un árbol de jocote; al Poniente, mediando el cimientito relacionado y alambrado hasta un mojón que está al pie de un árbol de carao, continúa el alambrado hasta un barranco, colindando con terreno de Lucio Cortéz; y al Sur, de la barranca mencionado a un peñón que está a la par de un árbol de pitarrillo y continúa en línea recta hasta llegar a un cerco de piedra de chereta, continuando ésta hasta la punta del cimientito de piedra donde comenzó la descripción, colinda con terreno del mismo Lucio Cortéz, y una parte con terreno de Nicolás Zavala; el primer inmueble está inscrito por traspaso bajo el número ochenta y seis del Libro ciento sesenta de la Propiedad del departamento de Cabañas; y el segundo no inscrito en dicho Registro.

Lo que se pone en conocimiento del público para los efectos de ley.

Juzgado de Primera Instancia: Sensuntepeque, a las diez horas del día veinticinco de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. *Lic. José María Estrada Alvarez*, Juez de Primera Instancia. *Bra. Santana Venancio Alfaro*, Secretario.

3 v. alt. Nº 19875 1—8—XII—83.

A V I S O

Se Pone en conocimiento del público que en Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el día seis de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, se tomó el acuerdo de aumentar el capital social en la suma de cuatro millones ciento cuarenta mil colones más, mediante la emisión de nuevas acciones, comunes y nominativas de cien colones cada una, por lo cual el nuevo capital será de doce millones cuatrocientos veinte mil colones.

San Salvador, a los siete días del mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres.

EMBOTELLADORA SALVADOREÑA, S. A.

Enrique Alberto Sol Meza,

Presidente.

3 v. alt. Nº 19927 1—8—XII—83.

DE SEGUNDA PUBLICACION

Gloria Palacios Alfaro, Juez de lo Civil de este distrito, al público para los efectos de ley,

Hace saber: que por ejecución seguida por José Herculano Hernández, conocido por José Hernández Silva, de sesenta y seis años de edad, tipógrafo y de este domicilio, por medio de su apoderado general judicial doctor Ignacio Luis Rolando López, contra Juana Andrade o Juana Agustina Andrade, de cuarenta y ocho años de edad, modista y de este domicilio reclamándole el pago de la cantidad de seis mil colones que es en deberle de plazo vencido, más intereses y costas, se venderá por este Juzgado en pública subasta un solar urbano, sito en la Cuarta Avenida Norte número dos, barrio San Francisco de esta ciudad, el cual fue de una extensión superficial inicial de ciento ochenta y tres metros cuadrados, pero que por haberse desmembrado y vendido por el rumbo Sur, una porción de noventa y un metros cincuenta centímetros, el inmueble ha quedado reducido a una extensión superficial de noventa y un metros cincuenta decímetros cuadrados, con las limitaciones especiales siguientes: al Poniente, seis metros setenta centímetros, Cuarta Avenida Norte de por medio, con casa de Francisca Rodríguez y Paulina Alvarado antes, ahora de Valentín Rodríguez y Elodia Cubías, respectivamente: al Sur, veintidós metros cincuenta y cinco centímetros, con porción desmembrada y vendida a José Gregorio Reyes Matamoros, ahora de Enio Aparicio; al Oriente, siete metros con solar de Bartola y Pilar Paniagua y Cleotilde García viuda de Miranda, trascorral de por medio; y al Norte, veintidós metros cincuenta y cinco centímetros, con solar y casa de Anita Cisneros, ahora de Gema Somoza, trascorral de adobe de por medio. No existe en la actualidad la mediagua interior de que habla el antecedente pero tiene como mejora una casa sistema mixto. El inmueble antes descrito tiene un gravamen hipotecario a favor del señor José Herculano Hernández o José Hernández Silva, por la cantidad de seis mil colones exactos, según inscripción número ocho del Libro doscientos treinta de este departamento y está inscrito bajo el número ochenta y cinco del Tomo ciento ochenta y seis a favor de Juana Andrade o Juana Agustina Andrade.

Juzgado de lo Civil: San Vicente, a las once horas del día treinta de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. — *Dra. Gloria Palacios Alfaro*, Juez de lo Civil. — *Miguel Angel Laureano*, Secretario.

3 v. alt. Nº 19798 2—7—XII—83.

Santiago Mendoza Aguilar, Juez Sexto de lo Civil de este distrito judicial, al público en general,

Hace saber: que por resolución proveída por este Tribunal a las once horas con veinticinco minutos del día once de octubre del corriente año; se ha tenido por aceptada expresamente y con beneficio de inventario de parte de la señora Elsa Guadalupe Abrego Rivas, la herencia intestata que a su defunción ocurrida en esta ciudad, lugar de su último domicilio, el día trece de abril del corriente año, dejó el señor Marcos Rivas Artiga, conocido por Marcos Rivas, en concepto de hija natural del de cuius; y se ha conferido a la aceptante la administración y representación interinas de la sucesión, con las facultades y restricciones de los curadores de la herencia yacente.

Librado en el Juzgado Sexto de lo Civil: San Salvador, a las nueve horas del día tres de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. Santiago Mendoza Aguilar, Juez Sexto de lo Civil. — Br. Myrlena Luna, Secretaria Interina.

3 v. alt. Nº 19796 2—7—XII—83.

Juan José Jaime Portal, Juez Tercero de lo Civil de este distrito, al público para los efectos de ley,

Hace saber: que por resolución dictada el diez del mes en curso, se ha declarado yacente la herencia de José Sifontes Dubón, fallecido en esta ciudad, su último domicilio, el cinco de junio del corriente año y se ha nombrado curador para que la represente al doctor Julio César Barrientos.

Librado en el Juzgado Tercero de lo Civil: Santa Ana, a las nueve horas del veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y tres. — Doctor Juan José Jaime Portal, Juez Tercero de lo Civil. — Santiago Morales, Secretario.

3 v. alt. Nº 19782 2—7—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado Lidia Esther Villeda de Flores, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

La solicitante nació en Santa Ana, departamento del mismo nombre, el día ocho de abril de mil novecientos treinta, y es salvadoreña, de oficios del hogar, residente en Residencial Buen Pastor, casa Nº 11 El Modelo, de esta ciudad; con Cédula de Identidad Personal Nº 1—2—032996 y N.I.T. 0210—080430—002—6.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, diez de agosto de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19774 2—7—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado la señora Sonia Esperanza Hernández de Rosales, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

La solicitante nació en San Salvador, el día uno de abril de mil novecientos cuarenta y ocho, y es salvadoreña, comerciante, residente en Colonia Cus-

catlán, Pasaje Azteca número siete, Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, con Cédula de Identidad Personal Nº 10—1—025054 y N.I.T. 0614—010448—013—2.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, diez de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19778 2—7—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el señor Hernán Alfredo Martínez, solicitando que se le conceda Matrícula Personal de Comerciante Individual.

El solicitante nació en Santa Rosa de Lima, departamento de La Unión, el día diez de junio de mil novecientos cuarenta y ocho, y es salvadoreño, comerciante, residente en Primera Avenida Sur, número ciento uno, San Miguel, departamento del mismo nombre, con Cédula de Identidad Personal Nº 3—1—0001758 y N.I.T. 1416—100648—001—9.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de treinta días contados desde el siguiente al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición con la prueba pertinente.

San Salvador, treinta y uno de mayo de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19784 2—7—XII—83.

El infrascrito Jefe del Departamento de Registro de Matriculas de Comercio y Patentes de Comercio e Industria.

Hace saber: que Sonia Esperanza Hernández de Rosales, salvadoreña, mayor de edad, comerciante, con residencia en Colonia Cuscatlán, Pasaje "Azteca" Nº 7, Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, con Cédula de Identidad Personal Nº 10—1—025054 N.I.T. 0614—010448—013—2 y Matrícula Personal de Comerciante Individual en trámite, ha presentado a este Departamento solicitud para que se le conceda la matrícula de comercio correspondiente y se inscriba a su favor la empresa comercial denominada "Calzado Lupita", que se dedica a la compra-venta de calzado, con dirección en 2ª Avenida Sur Nº 1, contiguo al Almacén "Volga", Cojutepeque, departamento de Cuscatlán, cuyo activo asciende a la suma de veintiún mil trescientos ocho colones (¢... 21.308.00) y que tiene el establecimiento denominado "Calzado Lupita", situado en la dirección antes mencionada.

Lo que se hace saber al público para los efectos de ley, y se emplaza a toda persona interesada en oponerse a la referida solicitud para que, en el término de quince días contados desde el siguiente

al de la última publicación en el Diario Oficial, se presente a este Departamento justificando la oposición en su caso con la prueba pertinente.

San Salvador, cuatro de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Tito Sánchez Valencia,
Registrador.

3 v. alt. Nº 19777 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Alfredo Espino Nieto, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Warner-Lambert Company, una corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en Morris Plains, New Jersey, Estados Unidos, solicitando se registre a favor de su representada la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad norteamericana,

SUPER GOM

Consistente en la expresión SUPER GOM, servirá para amparar: productos de confitería. Clase 102ª de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial, los productos se elaboran en Morris Plains, New Jersey, Estados Unidos de América. Reservándose el derecho de usar la marca en cualquier clase de letra, color y tamaño, sola o acompañada de otras leyendas, dibujos, adherida, estampada o litografiada, sobre envoltorios, cajas, paquetes, etc., así como reproducirla por cualquier medio manual o mecánico u otro conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19785 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Alfredo Espino Nieto, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Warner-Lambert Company, una corporación organizada y existente bajo las leyes del Estado de Delaware, domiciliada en Morris Plains, New Jersey, Estados Unidos, solicitando se registre a favor de su representada la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad norteamericana,

FUTY GOM

Consistente en la expresión "FUTY GOM", servirá para amparar: productos de confitería. Clase 102ª de la Ley del Ramo. La fábrica no

tiene nombre especial, los artículos se elaboran principalmente en Morris Plains, New Jersey, Estados Unidos de América. Reservándose el derecho de usar la marca en cualquier clase de letra, color y tamaño, sola o acompañada de otras leyendas, dibujos, adherida, estampada o litografiada sobre envoltorios, cajas, paquetes, etc., así como reproducirla por cualquier medio manual o mecánico u otro conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los veintiocho días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19786 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Alfredo Espino Nieto, abogado, de este domicilio, como apoderado de Kativo Chemical Industries, S. A., una sociedad constituida y existente bajo las leyes de la República de Panamá domiciliada en Panamá, República de Panamá, solicitando se registre a favor de su representada la marca de fábrica y de comercio, de nacionalidad panameña,

CONTRATISTA

Denominada **CONTRATISTA** servirá para amparar: Pinturas, artículos comprendidos en las Clases 15, y 37ª, de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial, y se encuentra en la ciudad de Panamá, República de Panamá, en donde principalmente se elaboran y expenden los productos. Reservándose el derecho de usar la marca referida en cualquier clase de letra, color o tamaño; sola o acompañada de otras leyendas o dibujos; adherida, estampada o litografiada sobre envoltorios, cajas, paquetes, etc., así como reproducirla por cualquier medio manual o mecánico u otro conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y Propiedad Literaria: San Salvador, a los catorce días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19787 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Armando Interiano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Consorcios Industriales de Aguacaliiente, S. A., con domicilio en la ciudad de San José, República de Costa Rica, solicitando se re-

gistre a favor de su poderdante la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad costarricense,

DAALAS

Consistente en la palabra **DAALAS**, servirá para amparar: la fabricación y venta de calzado. Clase 74ª de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial, los productos se elaboran y expenden principalmente en la República de Costa Rica. Reservándose el uso de la marca en cualquier color o combinación de colores, tipo o tamaño de letras, acompañada o no de letras, signos o palabras que se pudieren registrar o no, adherida, estampadas o litografiadas sobre toda clase de envases, cajas o paquetes y reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los tres días del mes de marzo de mil novecientos ochenta y tres.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19789 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Armando Interiano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Consorcios Industriales de Aguacaliiente, S. A., con domicilio en la ciudad de San José, República de Costa Rica, solicitando se registre a favor de su poderdante la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad costarricense,

RIMINI

Consistente en la expresión **RIMINI**, para amparar: la fabricación y venta de calzado. Clase 74ª de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial. Los productos se elaboran y comercializan principalmente en la ciudad de San José, República de Costa Rica. La cual se podrá usar en cualquier color o combinación de colores tipo o tamaño de letras, acompañada o no de letras, signos, o palabras que se pudieren registrar o no, pudiendo usarse también adherida, estampadas o litografiadas sobre toda clase de envases, cajas o paquetes y reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

Dr. Miguel Angel Gómez,
Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19790 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Armando Interiano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Consorcios Industriales de Aguacaliente, S. A., con domicilio en la ciudad de San José, República de Costa Rica, solicitando se registre a favor de su poderdante la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad costarricense,

LAZO

Consistente en la expresión LAZO, para amparar: la fabricación y venta de calzado. Clase 74ª de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial. Los productos se elaboran y comercializan principalmente en la ciudad de San José, República de Costa Rica. La cual se podrá usar en cualquier color o combinación de colores, tipo o tamaño de letras, acompañada o no de letras, signos o palabras que se pudieren registrar o no, adherida, estampadas o litografiadas sobre toda clase de envases, cajas o paquetes y reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los veintinueve días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

Dr. Miguel Angel Gómez,

Registrador de la Propiedad Intelectual.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19791 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Armando Interiano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Consorcios Industriales de Aguacaliente, S. A., con domicilio en la ciudad de San José, República de Costa Rica, solicitando se registre a favor de su poderdante la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad costarricense,

SENADOR

Consistente en la palabra SENADOR, para amparar: la fabricación y venta de calzado. Clase 74ª de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial. Los productos se elaboran y se expenden principalmente en San José, República de Costa Rica. La cual se podrá usar en cualquier color o combinación de colores, tipo o tamaño de letras, acompañada o no de letras, signos o palabras que se pudieren registrar o no, pudiendo usarse también adherida, estampadas o litografiadas sobre toda clase de envases, cajas o paquetes y reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los diez días del mes de noviembre de mil novecientos ochenta y dos.

Dr. Alfredo González Elizondo,

Registrador.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19792 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Armando Interiano, mayor de edad, abogado, de este domicilio, como apoderado de Consorcios Industriales de Aguacaliente, S. A., del domicilio de la ciudad de San José, República de Costa Rica, solicitando se registre a favor de su representada la marca de fábrica y de comercio de nacionalidad costarricense,

BONDY

Consistente en la palabra "BONDY", la cual se usará en cualquier color o combinación de colores, tipo o tamaño de letras, acompañada o no de letras, signos o palabras que se pudieren registrar o no, también adherida, estampada o litografiada sobre toda clase de envases, cajas o paquetes y reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse. La marca ampara: calzado en general, artículos comprendidos en la Clase 74ª de la Ley del Ramo. Los productos se elaboran en la ciudad de San José, República de Costa Rica. La fábrica no tiene nombre especial.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, veinte de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Dr. Alfredo González Elizondo,
Registrador.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19794 2—7—XII—83.

El infrascrito Registrador de Comercio,

Hace saber: que a este Departamento se ha presentado el doctor Armando Interiano, mayor de edad, abogado y de este domicilio como apoderado de Consorcios Industriales de Aguacaliente, S. A., con domicilio en la ciudad de Costa Rica. Solicitando se registre a favor de sus poderdantes la marca de fábrica y de comercio,

PASO

Consistente en la palabra "PASO" de nacionalidad costarricense. Para amparar: la fabricación y venta de calzado. Clases 74ª de la Ley del Ramo. La fábrica no tiene nombre especial. Los artículos que ampara esta marca se elaboran en Costa Rica, República de Costa Rica, y se expenden principalmente en ese país. Reservándose el derecho de usar la marca en cualquier color o combinación de colores, tipo o tamaño de letras, acompañada o no de letras, signos o palabras que se pudieren registrar o no, pudiendo usarse también adherida, estampadas o litografiadas sobre toda clase de envases, cajas o paquetes y reproducirse por cualquier medio conocido o por conocerse.

Lo que se hace del conocimiento del público para los efectos de ley.

Registro de Comercio; Departamento de Patentes, Marcas de Fábrica y de Propiedad Literaria: San Salvador, a los veintinueve días del mes de septiembre de mil novecientos ochenta y dos.

Dr. Jorge Alberto Flores,
Registrador Jefe.

María Elena Sánchez,
Secretario.

3 v. alt. Nº 19795 2—7—XII—83.